CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL CASO DE VENEZUELA

DR. RAFAEL BADELL MADRID*

SUMARIO

I. Introducción. II. De la responsabilidad interna del Estado. 1. Primera etapa. Aplicación del Código Civil e inicio del camino para una tesis autónoma. 2. Segunda etapa. Constitución de 1999. 3. Tercera Etapa. Involución. III. De la responsabilidad internacional del Estado. 1. Origen de la responsabilidad internacional del Estado. 2. Concepto, fundamento y alcance de la responsabilidad internacional del Estado. 2.1. La obligación de *pacta sunt servanda* como fundamento de la responsabilidad internacional. 2.2. La ilicitud como núcleo de la responsabilidad internacional. 2.3. Órganos que pueden generar la responsabilidad internacional. 2.3.1. Responsabilidad de los órganos legislativos. 2.3.2. Responsabilidad de los órganos ejecutivos. 2.3.3. Responsabilidad de los órganos judiciales. 2.3.4. Responsabilidad de los otros órganos del Estado. 2.4. De la reparación como obligación derivada de la responsabilidad. 3. Violación de la responsabilidad internacional por parte de Venezuela. 3.1. Responsabilidad internacional de Venezuela por la violación de tratados internacionales. 3.1.1. Denuncia del Tratado de Creación de la Comunidad Andina de Naciones. 3.1.2. Responsabilidad internacional del Estado venezolano por incumplimiento de las obligaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3.1.2.1. Caso "Corte Primera de lo Contencioso Administrativo" vs. Venezuela. Corte IDH Sentencia de 5 de agosto de 2008. 3.1.2.2. Caso López Mendoza vs. Venezuela. Corte IDH sentencia de 1 de septiembre de 2011. 3.1.2.3. Caso Marcel Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela. Corte IDH. Sentencia de 22 de junio de 2015. 3.1.2.4. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Corte IDH sentencia del 26 de septiembre de 2018. 3.1.3. Responsabilidad internacional de Venezuela por el incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

* Rafael Badell Madrid. Profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Venezuela. Socio fundador de Badell & Grau Despacho de Abogados.

(Caso Brewer-Carías vs Venezuela. Comité de Derechos Humanos ONU. Dictamen de 14 de octubre de 2021). 3.1.4. Responsabilidad internacional del Estado venezolano determinada por el CIADI. 3.1.4.1. Vestey Group Ltd. 3.1.4.2 Venezuela Holdings BV y otros (Exxon Mobil). 3.1.4.3. Hamaca B.V. y Conoco-Phillips Gulf of Paria B.V. 3.1.4.4. Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A. 3.1.4.5. Crystallex International Corporation. 3.1.4.6. Longreef Investment A.V.V. 3.1.4.7. Koch Minerals y Koch Nitrogen International Sárl (Fertinro). 3.1.4.8. OI European Group B.V. 3.1.4.9. Tenaris S.A. y Talta. 3.1.4.10. Rusoro Mining Limited. 3.1.4.11. Saint-Gobain Performance Plastics Europe (Francia). 3.1.4.12. Valores Mundiales SL y Consorcio Andino SL. 3.1.4.1.3 Tidewater Investment SRL y Tidewater Caribe, C.A. 3.1.4.14. Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos. 3.2. Responsabilidad internacional de Venezuela por la violación de derechos humanos. 4. Responsabilidad internacional penal. 4.1. Concepto. 4.2. Carácter subjetivo e individual de la responsabilidad internacional penal. 4.3 Responsabilidad internacional del Estado por la comisión de crímenes internacionales. 4.4 Crímenes internacionales (crímenes de guerra). 4.4.1. Origen. 4.4.2. Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra. IV. Bibliografía.

RESUMEN

La expresión responsabilidad del Estado tiene una significación diversa, compleja y especial dentro del derecho. El sistema de responsabilidad del Estado se fundamenta, de una parte, en las normas y principios de derecho interno del Estado y en disposiciones de derecho internacional. Vamos a referirnos a la responsabilidad de los Estados en su consideración general. Inicialmente realizaremos algunas consideraciones muy generales sobre este sistema de responsabilidad del Estado en su esfera interna, especialmente sobre cómo fue el proceso de construcción de una tesis autónoma de responsabilidad interna del Estado, haciendo referencia al caso de Venezuela y, posteriormente, formularemos comentarios sobre la responsabilidad internacional de los Estados según su desarrollo en el sistema de derecho internacional, con fundamento en el principio general de derecho internacional *pacta sunt servanda* y el ilícito internacional entendido como la violación de una obligación internacional. Finalmente nos referiremos a varios casos de responsabilidad del Estado en los que ha incurrido Venezuela.

Palabras clave: Responsabilidad del Estado, Estado de derecho, derechos humanos, responsabilidad internacional, ilícito internacional.

ABSTRACT

*The expression of State liability has a diverse, complex and special meaning within the law. The system of State liability is based on the State's norms and principles of internal law while also being enshrined in the provisions of international law. We will consider the State liability in general. We will first make some general considerations about this system of State liability in the internal sphere, especially on how the process of an autonomous thesis of internal responsibility of the State was developed in the case of Venezuela, and will then refer to international liability of the States according to its development in the international legal system, based on the general principle of international law *pacta sunt servanda* and an internationally wrongful act, understood to be the violation of an international obligation. Finally, we will make some considerations about some cases of state liability in Venezuela.*

KEY WORDS

State liability, rule of law, human rights, international liability, internationally wrongful act.

I. INTRODUCCIÓN

La expresión responsabilidad del Estado tiene una significación diversa, compleja y especial dentro del derecho. Se refiere tanto a aspectos de derecho interno como de derecho internacional, ambos de fundamental importancia. El sistema de responsabilidad del Estado se fundamenta, de una parte, en normas y principios de derecho interno del Estado y, además, se encuentra consagrado en disposiciones de derecho internacional.

La responsabilidad del Estado, junto con los principios de separación de poderes, legalidad y respeto a las situaciones jurídicas subjetivas conforman los presupuestos fundamentales del Estado moderno constitucional y de derecho.

La teoría de la responsabilidad interna del Estado ha avanzado desde la irresponsabilidad absoluta, en la que se entendía que la impunidad del Estado era una consecuencia del ejercicio de la soberanía y que “El Rey no comete errores” (*The King can do no wrong*), hasta la consagración clara y definitiva del principio de responsabilidad patrimonial del Estado basada en normas y principios propios del derecho público.

La responsabilidad patrimonial del Estado está vinculada al nacimiento del Estado moderno constitucional y de derecho; este es, aquel que admite someterse al imperio de la ley, y con ello, al control de la legalidad de todos los actos, actuaciones y omisiones de los órganos que ejercen el poder público -interdicción de la arbitrariedad-, y que por vía de consecuencia implica la obligación de resarcir los daños causados por la actividad del Estado.

De modo que la cláusula de responsabilidad patrimonial del Estado, presente ahora en muchas de las constituciones modernas, es la

garantía patrimonial que tienen los ciudadanos frente a la acción de los órganos del poder público, en cualquiera de sus manifestaciones.

Si bien en sus orígenes la responsabilidad interna del Estado estaba referida únicamente a la actuación de la administración, hoy se extiende a todas las manifestaciones de la actividad del Estado, es decir, que ella incluye, además, dentro de la concepción clásica de la separación de los poderes, la responsabilidad del Estado legislador y del Estado juez. Cambiamos entonces la denominación; abandonamos el término responsabilidad de la administración y asumimos, por ser el correcto, el de “responsabilidad del Estado”.

La responsabilidad interna del Estado es una garantía consagrada a favor de los administrados para lograr el resarcimiento del perjuicio causado. Es una garantía a favor de los administrados a la indemnización patrimonial. Es un derecho subjetivo a la indemnización de los daños ocasionados por la actuación de los órganos del Estado. Pero es también, en especial en los supuestos de responsabilidad con falta, un medio de control de la propia administración. Tiene como fin prevenir que los daños se produzcan, mediante la sana intimidación a los posibles causantes de los mismos. Es decir, conceptualmente significa abolir el privilegio de dañar con impunidad¹.

De otra parte, un asunto especialmente importante en estos tiempos de internacionalización de la justicia y, en especial de la protección de los derechos humanos, es la responsabilidad internacional de los Estados que deriva de la infracción o violación del derecho internacional y que puede consistir en una acción, esto es, una infracción de una prohibición jurídico-internacional, o en una omisión, es decir, puede surgir por el no cumplimiento de una obligación de derecho internacional².

La responsabilidad del Estado, tanto en la esfera nacional como en la internacional, es reconocida como una conquista de la lucha por la protección integral de los derechos humanos.

La responsabilidad internacional de los Estados encuentra sus orígenes en la costumbre internacional, así como en las prácticas lleva-

¹ Véase Rafael Badell Madrid, *Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial del Estado*, Editorial Torino, Caracas, 2014.

² Alfred Verdross, *Derecho Internacional Público*. 5ta edición. Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 1976. P. 336.

das a cabo por los Estados como sujetos de derecho internacional para crear, mantener y desarrollar las relaciones entre sí.

La responsabilidad internacional del Estado garantiza el sistema de derecho y de coordinación internacional entre Estados soberanos que se encuentran en una relación de interdependencia, mediante el establecimiento de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por dichos Estados.

Los Estados suelen cumplir voluntariamente con sus obligaciones internacionales (*pacta sunt servanda*), sin embargo, cuando existe algún incumplimiento se produce una consecuencia y ello produce la responsabilidad internacional del Estado. La responsabilidad internacional del Estado frente a un incumplimiento es un principio general del derecho internacional firmemente establecido, tanto así que se ha llegado a afirmar que de no existir responsabilidad internacional, no existiría el derecho internacional: “Su negación implicaría la destrucción del Derecho Internacional, puesto que el no admitir la responsabilidad consiguiente a un entuerto suprimiría el deber de los Estados de comportarse según el Derecho Internacional”³.

Desde un principio se ha considerado que “La existencia de un orden jurídico internacional, demanda que los sujetos a los que se imponen deberes deben igualmente responder del incumplimiento de los mismos. Esta es sin duda, la convicción de los Estados manifestada por una práctica constante y firme y expresada, igualmente, a veces en disposiciones precisas de los tratados”⁴.

La responsabilidad internacional del Estado es la institución de derecho internacional público mediante la cual se establece que cualquier violación de un compromiso contenido en una norma de carácter internacional tiene como consecuencia para el Estado infractor la obligación de efectuar una reparación. Es decir, que un Estado es internacionalmente responsable cuando viola una obligación jurídica impuesta por

³ Ibid. P. 353.

⁴ Véase Anzilotti, *Curso de derecho internacional* (trad. De López Olivan), Editorial Reus, Madrid, 1935, p. 407. Cit. en Ernesto J. Rey Caro. *Responsabilidad internacional*. Cuaderno de Derecho Internacional Número 3, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Instituto de Derecho Internacional Público y Derecho de la Integración, Córdoba, 2009.

una norma de derecho internacional⁵. Conforme al derecho internacional público el mero hecho de producir un daño no da lugar a responsabilidad jurídico-internacional: esta solo se produce cuando el daño resulte de una infracción de derecho internacional⁶.

De modo que a diferencia de la responsabilidad interna de los Estados, la responsabilidad internacional de los Estados no se basa en la producción de un daño, ni exige que se demuestre la culpa en la ejecución del mismo, sino que requiere para su determinación la infracción de un dispositivo del ordenamiento jurídico internacional o la violación de los derechos humanos. En derecho internacional, el “*ilícito internacional*”, como elemento objetivo cuya comisión genera responsabilidad para el Estado, lo constituye un acto u omisión del Estado que viole una obligación internacional.

Desde los orígenes de la responsabilidad internacional de los Estados se ha reconocido que no es la producción de un daño económico lo que la genera, sino la violación del derecho internacional. Así lo determinó el Tribunal de Arbitraje de La Haya al decidir una solicitud planteada por el gobierno francés con motivo de la detención por Italia, durante la guerra de Tripolitania, de los buques mercantes franceses Carthage y Manoube. En esta oportunidad el Tribunal de Arbitraje de La Haya, si bien no concedió una indemnización patrimonial propia por estos perjuicios, determinó que los resultados de toda infracción del derecho internacional da lugar a la responsabilidad del Estado causante⁷.

Por su parte, el Tribunal Internacional de Justicia, en sentencia del 09 de abril de 1949, cuando decidió el caso sobre el Estrecho de Corfú, “comprobó la existencia de una violación del derecho internacional de la que no había resultado daño material alguno, aunque haciendo notar que esta comprobación constituía por sí misma una consecuencia jurídica adecuada del acto ilícito”⁸.

⁵ Atilio Monteli, “La Responsabilidad Internacional del Estado”. Disponible en <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/26/la-responsabilidad-internacional-del-estado.pdf> p. 44

⁶ Alfred Verdross, *Derecho Internacional Público*. Ob. cit. p. 353.

⁷ Ibidem. p. 353.

⁸ Ibidem.

La responsabilidad internacional del Estado puede surgir por un acto u omisión de carácter directo, como es el realizado por los órganos sometidos a la autoridad del Estado, tanto si éste pertenece al poder ejecutivo, legislativo, judicial, constituyente o cualquier otro poder, o por cualquier otro órgano que ejerza funciones públicas dentro de la organización del Estado.

En Venezuela, la responsabilidad del Estado -en su consideración integral, tanto interna como internacional- tiene un amplio y sólido fundamento en los artículos 6, 29, 30, 31, 49.8, 140, 141 y 259 de la Constitución de 1999.

La Constitución, tal y como lo expresa su Exposición de Motivos, impone al Estado la obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, al tiempo que establece la obligación para el Estado de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios, todo lo cual constituye una consecuencia del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado reconocido por la Constitución.

La responsabilidad internacional del Estado está establecida también en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana adoptada en la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Lima el 11 de septiembre de 2001, como uno de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia.

Este es el tema al que vamos a referirnos: responsabilidad de los Estados en su consideración general. Inicialmente nos corresponderá realizar algunas consideraciones muy generales sobre la responsabilidad del Estado en su esfera interna y posteriormente nos referiremos a la responsabilidad internacional de los Estados según su desarrollo en el derecho internacional.

En primer lugar, reseñaremos cómo fue el proceso de construcción de una tesis autónoma de la responsabilidad interna del Estado, y para ello haremos referencia al caso de Venezuela, donde, como es frecuente en derecho administrativo desde su origen, la jurisprudencia ha tenido una importancia fundamental.

Veremos cómo en una etapa inicial, el reconocimiento de la responsabilidad interna del Estado estaba fundamentado en las reglas, teo-

rías y principios del derecho civil; luego, por vía jurisprudencial, por influencia de la Constitución de 1999 y de la doctrina, tanto nacional como extranjera, se pasó a una noción basada en normas de derecho público y también en disposiciones de derecho internacional; en esta etapa se llegó incluso a predicar la tesis de la responsabilidad objetiva del Estado. Por último, nos referiremos al estado actual de este sistema de responsabilidad interna, a lo que llamaremos tercer período, el cual ahora -como en tantas otras cosas- está caracterizado por la involución y confusión.

En lo que respecta a la responsabilidad internacional del Estado, formularemos algunas consideraciones sobre su concepto y fundamento en el principio general de derecho internacional *pacta sunt servanda*, establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969. También señalaremos los elementos fundamentales de la responsabilidad internacional de los Estados como el ilícito internacional y la fuente de su existencia, entendida como los actos u omisiones realizados por los órganos ejecutivos, judiciales, legislativos o cualquier otro órgano que ejerza funciones públicas en el marco de la organización del Estado sometidos a la autoridad del Estado, que violen una obligación internacional.

Asimismo, vamos a referirnos a las violaciones de Venezuela a normas de derecho internacional que la han hecho incurrir en responsabilidad internacional del Estado.

Por último, haremos algunas consideraciones sobre la responsabilidad internacional penal, que si bien no recae directamente sobre los Estados sino sobre los individuos que cometen crímenes internacionales, es susceptible de generar la responsabilidad internacional del Estado por las actuaciones que sus órganos omitieron prevenir o reprimir, según el derecho internacional.

II. DE LA RESPONSABILIDAD INTERNA DEL ESTADO

El tema de la responsabilidad patrimonial del Estado está vinculado al nacimiento del Estado moderno constitucional y de derecho; este es, aquel que admite someterse al imperio de la ley, y con ello, al control de la legalidad de todos los actos, actuaciones y omisiones de

los órganos que ejercen el poder público -interdicción de la arbitrariedad-, y que por vía de consecuencia implica la obligación de resarcir los daños causados por la actividad del Estado.

Si bien en sus orígenes la responsabilidad del Estado estaba referida únicamente a la actuación de la administración, hoy se extiende a todas las manifestaciones de la actividad del Estado, es decir, que ella incluye, además, dentro de la concepción clásica de la separación de los poderes, la responsabilidad del Estado legislador y del Estado juez. Cambiamos entonces la denominación; abandonamos el término responsabilidad de la administración y asumimos, por ser el correcto, el de “responsabilidad extracontractual del Estado”.

Esta responsabilidad del Estado es un mecanismo de control del ejercicio del poder, lo que explica la necesidad de establecer reglas de derecho público especiales -en consideración al interés público que la actividad supone- y de un mismo orden de tribunales para hacer efectivo, tanto el control de la legalidad de las actuaciones de los órganos del Estado, como el resarcimiento debido por los daños causados. Una estructura social moderna -García de Enterría- es imposible sin un derecho que regule la reparación del daño causado por los órganos del Estado.

Como lo señaló Hauriou “*Hay dos correctivos de las prerrogativas y potestades de imperio de la administración que reclama el instinto popular; cuyo sentimiento respecto al poder público puede formularse en estos dos brocardos: que actúe, pero que obedezca a la ley; que actúe, pero que pague el perjuicio*”⁹.

La responsabilidad del Estado es una garantía consagrada a favor de los administrados “*pro cives*” para lograr el resarcimiento del perjuicio causado. Es una garantía a favor de los administrados a la indemnización patrimonial. Es un derecho subjetivo a la indemnización de los daños ocasionados por la actuación de los órganos del Estado. Pero es también, en especial en los supuestos de responsabilidad con falta, un medio de control de la propia Administración. Tiene como fin prevenir que los daños se produzcan, mediante la sana intimidación a los

⁹ Aut. Cit. por Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. *Curso de Derecho Administrativo*. Tomo II. Cuarta Edición. Editorial Civitas S.A. Madrid. 1977. P. 355.

posibles causantes de los mismos. Es decir, conceptualmente significa abolir el privilegio de dañar con impunidad¹⁰.

En efecto, la responsabilidad del Estado cumple una función dual, no es sólo una garantía patrimonial, es también un mecanismo eficaz de control de la administración, modelador de su conducta, que propende a la mejora de los servicios públicos y al mejor desarrollo de las relaciones que se verifican entre el Estado y los administrados. Constituye -Iribarren Monteverde- uno de los correctivos de las prerrogativas y potestades de imperio de la Administración.

En el derecho moderno se pone énfasis en la exigencia de responsabilidad contractual y extracontractual del Estado y el acento está en la creación de un sistema eficaz que asegure que quien sufre un perjuicio que no tenga el deber jurídico de soportar reciba la debida compensación al daño soportado de forma oportuna y proporcional¹¹.

La responsabilidad del Estado, junto con los principios de separación de poderes, de legalidad y de respeto a las situaciones jurídico subjetivas conforman los presupuestos fundamentales del Estado Constitucional de Derecho. La cláusula de responsabilidad del Estado, presente ahora en muchas de las constituciones modernas, es la garantía patrimonial que tienen los ciudadanos frente a la acción de los órganos del poder público, en cualquiera de sus manifestaciones.

Así, por ejemplo, la Constitución de España de 1978 dispone en su artículo 9.3 que “*La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.*” (Resaltado nuestro).

Por su parte, el artículo 90 de la Constitución de Colombia de 1991 establece una cláusula de la responsabilidad extracontractual del Estado que “*tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico*

¹⁰ Véase Rafael Badell Madrid, *Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial del Estado*, Editorial Torino, Caracas, 2014.

¹¹ Juan Antonio Hernández-Corchete, “La responsabilidad concurrente de las administraciones públicas”, en Francisco Sosa Wagner (Coord.), *El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI: homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo* / Vol. 2, 2000, pp. 1705-1731.

*producido u ocasionado a una persona, y la imputación de este al Estado y demás entidades públicas tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo*¹². De esta forma, dispone el mencionado artículo 90 lo siguiente:

“Artículo 90

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste.”

En Venezuela, la responsabilidad interna del Estado tiene un amplio y sólido fundamento en los artículos 6, 29, 30, 31, 49.8, 140, 141 y 259 de la Constitución de 1999.

En este tema, como es frecuente en derecho administrativo, la jurisprudencia ha tenido una importancia fundamental. En una etapa inicial, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado estaba fundamentado en las reglas, teorías y principios del derecho civil; luego, insistimos por vía jurisprudencial, por influencia de la Constitución de 1999 y de la doctrina, tanto nacional como extranjera, se pasó a una noción basada en normas de derecho público y también en disposiciones de derecho internacional; en esta etapa se llegó incluso a predicar la tesis de la responsabilidad objetiva del Estado. Lamentablemente nos encontramos ahora en un tercer período de involución y de confusión.

1. Primera etapa. Aplicación del Código Civil e inicio del camino para una tesis autónoma

En una primera etapa, desde la jurisprudencia nacional comenzó a construirse en Venezuela un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado fundamentado en las disposiciones del Código Civil. Esta

¹² Jaime Orlando Santofimio Gamboa, *La responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad Reglas y subreglas en una visión convencional, constitucional y contenciosa administrativa*, Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Bogotá, 2020. P. 8.

etapa se mantuvo, con algunas excepciones¹³, durante la vigencia de la Constitución de 1961.

La responsabilidad patrimonial del Estado se reguló en la primera Constitución de Venezuela en 1811, cuyo artículo 146 dispuso la responsabilidad de los magistrados y oficiales del gobierno, en los siguientes términos:

“146. Los Magistrados y oficiales del Gobierno, investidos de cualquiera especie de autoridad, sea en el Departamento Legislativo, en el Ejecutivo o en el Judicial, son de consiguiente meros Agentes y representantes del pueblo en las funciones que ejercen, y en todo tiempo responsables a los hombres o habitantes de su conducta pública por vías legítimas y constitucionales”

Por su parte, la Constitución de 1819 estableció en el artículo 5 la responsabilidad de los Ministros, cuando dispuso que:

“Art. 5.º — Los ministros son responsables de las ordenes que aparezcan expedidas por ellos, y no los exime de esta responsabilidad la orden que hayan recibido del presidente, si fuere contra la Constitución o las leyes. El modo y términos de la responsabilidad de los ministros serán fijados por una ley.”

El artículo 2º de la Constitución de 1821 consagró la responsabilidad de los funcionarios públicos, quienes eran agentes de la nación y, por tanto, respondían ante ella por su conducta pública. De manera que cualquier funcionario de la República investido de autoridad quedaba sujeto a responsabilidad ante actos u omisiones jurídicamente reprochables.

Posteriormente, la Constitución de 1830 mantuvo en términos similares ese principio de responsabilidad de los funcionarios públicos, pero además incluyó la declaración genérica según la cual el gobierno de Venezuela *“es y será siempre republicano, popular, representativo, responsable y alternativo”* (énfasis añadido). El carácter *responsable* del gobierno venezolano fue siempre establecido en las constituciones sucesivas e incluido en todas las que se dictaron en el curso del siglo XX.

¹³ Sentencias de la Sala Político-Administrativa del 27 de enero de 1994, caso “Médanos de Coro”; 25 de enero de 1996, caso “Sermes Figueroa” y 23 de noviembre de 1999, caso: “Luz Magali Serna Rugeles”.

Sin embargo, fue en la Constitución de 1901 cuando se consagró el primer precepto rector de la responsabilidad patrimonial del Estado. En efecto, el párrafo único del artículo 14 de la Constitución de 1901 establecía: “[...] *En ningún caso podrán pretender, tanto los nacionales como los extranjeros, que la Nación ni los Estados les indemnicen daños, perjuicios o expropiaciones que no se hayan ejecutado por autoridades legítimas, obrando en su carácter público*”. Esa regulación se mantuvo en las constituciones posteriores de 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936, 1945, 1947, y 1953.

La Constitución de 1961 estableció en el artículo 47, de forma similar, la responsabilidad patrimonial del Estado: “*En ningún caso podrán pretender los venezolanos ni los extranjeros que la República, los Estados o los Municipios les indemnicen por daños, perjuicios o expropiaciones que no hayan sido causados por autoridades legítimas en el ejercicio de su función pública*”.

Fue en esa misma Constitución de 1961, cuando por primera vez se reguló en el artículo 206 la jurisdicción contencioso-administrativa, a la cual se le atribuyó la competencia de condenar a la administración pública al pago de los “*daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración*” y “*disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa*”.

Durante la vigencia de la Constitución de 1961 fue dictada la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976 que en el artículo 42 numeral 15 y en los artículos 182.2 y 183 consagró la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, según la cuantía, para conocer de las acciones que se propongan contra la República, Estados, Municipios o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, para la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual.

Esa misma ley establecía, en el artículo 131, los poderes del juez contencioso administrativo y, entre ellos, además de la declaratoria total o parcial de nulidad de los actos administrativos impugnados, se refería a la competencia del juez para ordenar la reparación de los daños causados por los órganos de la administración pública.

Esta competencia de la jurisdicción contencioso administrativa fue, precisamente, la que permitió el desarrollo jurisprudencial que hubo en la materia. Sin embargo, a pesar de la existencia de las referidas normas constitucionales y legales, que podían haber permitido construir una tesis de responsabilidad del Estado fundamentada en principios de derecho público, la jurisprudencia se mostró reticente en darles virtualidad práctica y en la mayoría de los casos fundamentó sus decisiones en las normas del derecho civil.

En esta primera etapa la jurisprudencia nacional comenzó a delinearse un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado con base en las disposiciones del Código Civil. Se utilizó la teoría de la responsabilidad civil por hecho ilícito prevista en el artículo 1.185 del Código Civil, que fue asimilada por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa a la noción de “*falta de servicio o funcionamiento anormal de éste*” derivada de los actos, hechos u omisiones de la administración.

Posteriormente, la jurisprudencia adoptó también el criterio de la responsabilidad objetiva por guarda de cosas prevista en el artículo 1.193 del Código Civil, con el objeto de justificar la determinación de la responsabilidad del Estado, sin falta, por situaciones de riesgo creado. En la conocida sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de 1984, caso: “*Alba Orsetti*”, se estableció la responsabilidad del Estado por los daños causados por la caída de una valla de señalización vial, con fundamento en la responsabilidad objetiva por guarda de cosas prevista en el artículo 1.193 del Código Civil.

En esa oportunidad la Sala Político-Administrativa señaló que por cuanto la República de Venezuela era la encargada del mantenimiento de las vías públicas y sus accesorios (incluidos los elementos de señalamiento vial), quedaba establecida la *responsabilidad a cargo de la República de Venezuela, de indemnizar los daños y perjuicios materiales y morales causados por la cosa inanimada que se encontraba bajo su guarda, de conformidad con el artículo 1.193 del Código Civil.*

Otro caso emblemático de la aplicación del mencionado artículo 1.193 del Código Civil para determinar la responsabilidad del Estado, fue el caso “*Nelson Molina vs. Cadafe*”, decidido por la Corte Suprema de Justicia en el año 1989, con ocasión de los daños derivados de líneas

de alta tensión que se encontraban bajo la custodia de empresas del Estado.¹⁴

En estos casos la responsabilidad del Estado se determinó por la imposibilidad de demostrar la concurrencia de alguna de las causas extrañas no imputables, también previstas en el Código Civil, a saber, la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa de la víctima o el hecho del tercero.

Una luz orientadora en la construcción de un camino distinto fue el voto salvado del Magistrado Luis Henrique Farías Mata, quien en el fallo de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del año 1992, recaído en el caso “*Silvia Rosa Riera*”, estableció que:

“(...) la responsabilidad que puede corresponder a las personas morales de Derecho Público, no es ni general ni absoluta, como se ha dicho en la decisión a menudo considerada –no con fundamento – madre del Derecho Administrativo; no se rige, en efecto, directa ni literalmente por las reglas del Código Civil, concebidas para regular las relaciones entre simples particulares; y comporta reglas autónomas y propias, que debe determinar; como ya lo ha hecho, el juez venezolano del contencioso-administrativo, tomando en cuenta la naturaleza del servicio público involucrado, y la necesaria conciliación con el interés general en la prestación del servicio”¹⁵.

Este voto salvado fue considerado por la doctrina nacional como el “*equivalente, en derecho venezolano de la decisión BLANCO del Tribunal de Conflictos francés. ...*”.¹⁶ Este fue sin dudas el inicio del camino para la construcción de una tesis autónoma de la responsabilidad del Estado en Venezuela.

Luego, el 27 de enero de 1994, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia “*Médanos de Coro*” en

¹⁴ Sentencias de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 7 de marzo de 1989. Caso: Nelson Molina vs Cadafe y 3 de agosto de 1995. Caso: José R. Marín vs Cadafe.

¹⁵ Voto Salvado. Magistrado Luis Henrique Farías Mata. Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 15 de diciembre de 1992, recaído en el caso Silvia Rosa Riera.

¹⁶ Al respecto véase Henrique Iribarren Monteverde. “*La Responsabilidad Administrativa Extracontractual*” en Revista de la Facultad de Derecho (UCAB). N° 44. Caracas, 1992.

la cual, aplicando exclusivamente disposiciones constitucionales y legales de derecho público, sin socorrerse de las normas del Código Civil sobre responsabilidad patrimonial, condenó a la República a indemnizar a la empresa Promociones Terra Cardón, C.A., por el daño causado en virtud de la prohibición de explotar un yacimiento mineral de su propiedad, como consecuencia de haberse declarado como “Parque Nacional” la zona en que se ubicaba dicho yacimiento.

En esta oportunidad, la Sala Político-Administrativa al referirse al fundamento constitucional de la responsabilidad del Estado señaló que el mismo se encontraba “...en los artículos 206 y 46 [rectius: 47] de la Constitución, que contempla el deber de indemnizar por parte de la Administración, los daños derivados de su responsabilidad en general, o por la actuación de sus funcionarios competentes, de donde se desprende su obligación de indemnizar los daños causados a los particulares, aun por sus actos lícitos”.

También añadió la decisión que “...la controversia debe decidirse conforme a tales principios constitucionales, vinculados a la garantía de la propiedad, que implica fundamentalmente mecanismos indemnizatorios para las lesiones que sufran sus titulares, incluso por los actos legítimos del Poder Público, como se induce de los artículos 206 y 46 [rectius: 47] de la Constitución, aunado a la garantía del derecho de propiedad a que se refiere el artículo 99. Por lo tanto, puede concluirse que constitucionalmente en Venezuela tiene también consagración el régimen de responsabilidad del Estado por los daños o lesiones causados por su actuación en general...”¹⁷.

El 25 de enero de 1996 la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia conocida como el caso “*Sermes Figueroa*”, en el cual volvió sobre los principios elaborados en el precitado fallo “*Médanos de Coro*” (también conocido como “*Promociones Terra Cardón*”) y señaló que “...la evolución de la teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado, no deja lugar a duda sobre la extensión de tal responsabilidad. Efectivamente, la responsabilidad del Estado ha evolucionado desde la situación inicial de irresponsabilidad

¹⁷ Véase sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 27 de enero de 1994, caso “*Médanos de Coro*”.

total, hasta la ampliación tal de su responsabilidad, al punto que se ha aceptado inclusive la responsabilidad por riesgo objetivo. Así, no existen entonces en la actualidad dudas sobre la posibilidad de exigir la responsabilidad del Estado, lo que inclusive puede dar lugar a la exigencia de indemnización por daños producidos por actos administrativos (...)” y, precisó el Tribunal Supremo además que “...El fundamento para exigir la responsabilidad varía si se trata de la llamada responsabilidad con falta o si se trata de la llamada responsabilidad sin falta. En este último caso, se está frente a un caso de responsabilidad por acto lícito, acto respecto del cual la exigencia de indemnización viene dada por el principio de igualdad ante las cargas públicas. En cambio, en el caso de la llamada responsabilidad con culpa, de lo que se trata es de una exigencia de indemnización derivada de una actuación ilícita del Estado productora de daños”¹⁸.

Por último, antes de aprobarse la Constitución de 1999, la Sala Político-Administrativa, mediante sentencia de fecha 23 de noviembre de 1999, caso: “*Luz Magali Serna Rugeles*”, ratificó el carácter autónomo del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado y en tal sentido, luego de reiterar el criterio esgrimido en la sentencia del precitado caso “*Sermes Figueroa*”, sostuvo que “*Se ha iniciado así la incorporación de nuestra jurisprudencia, a las más avanzadas corrientes doctrinarias sobre la materia que, a la par de coincidir con normas constitucionales, inician el abandono de la justificación privatista de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública de Venezuela, fundamentada en la calificación de la acción del autor del daño (culpa) para dar paso a criterios ius publicae expresados en normas de rango constitucional, que hacen depender la responsabilidad de la situación de la víctima y de su patrimonio, permaneciendo la culpa como un criterio más a ser tomado en cuenta en materia de responsabilidad de la Administración, reduciendo así su preponderancia de origen civil*”¹⁹.

¹⁸ Véase sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 25 de enero de 1996, caso “*Sermes Figueroa*”.

¹⁹ Véase sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 23 de noviembre de 1999, caso “*Luz Magali Serna Rugeles*”.

2. Segunda etapa. Constitución de 1999

En una segunda etapa, ya bajo la vigencia de la Constitución de 1999, el 31 de julio de 2002, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la tesis de la responsabilidad autónoma al indicar que: “...no es propio acudir a las fuentes de las obligaciones que rigen en materia civil, para declarar la responsabilidad de la Administración por su actividad, especialmente por lo que respecta a su actividad extracontractual.”

De esta forma se reconoció expresamente que las reglas de la responsabilidad civil, que atienden a un sistema jurídico de relaciones intersubjetivas entre particulares, no pueden ser aplicadas exactamente a los sujetos de derecho público quienes, además de gozar de potestades públicas, gozan de determinados privilegios por ser los tutores del interés general²⁰.

Luego, la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 19 de noviembre del 2002, recaída sobre el caso “*Viuda de Carmona*”, estableció claramente la tesis de la responsabilidad objetiva del Estado, disponiendo que de la lectura de los artículos 30 y 140 de la Constitución se infería que la Constitución adopta el régimen integral de responsabilidad del Estado, la cual debe ser apreciada de manera objetiva descartándose la culpa del funcionario como fundamento único del sistema indemnizatorio.

Consideró la Sala Constitucional que “*tratándose la responsabilidad patrimonial del Estado de una garantía constitucional inherente a todo Estado de Derecho, consagrada a favor del particular afectado por la conducta administrativa dañosa, la misma debe ser interpretada por los jueces en forma progresiva y amplia, a favor del administrado*”²¹.

De forma que con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, el Tribunal Supremo de Justicia señaló que a la luz de la Constitución queda establecida de una manera expresa y sin necesidad de recurrir a interpretación alguna, la responsabilidad patrimonial de la ad-

²⁰ Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia número 1013 del 31 de julio de 2002, caso “Marbelis María Borges vs. C.V.G Bauxilum”.

²¹ Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 19 de noviembre de 2002, caso “Viuda de Carmona”.

ministración pública por los daños que sufran los administrados como consecuencia de su actividad, por lo que no es imprescindible invocar las normas del Código Civil, ya que la referida responsabilidad se infiere principalmente de las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 6, 30, 133, 140, 141, 259 y 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela²².

En el año 2010, la Sala Constitucional insistió en que *“la evolución asentada por el Constituyente tiene por objeto procurar un verdadero sistema integral y autónomo de derecho público que no dependa de las normas privadas, estructurado sobre una base propia, determinada por regulación especial”*²³.

La responsabilidad del Estado tiene en efecto un amplio y sólido fundamento en los artículos 6, 30, 49.8, 140, 141 y 259 de la Constitución de 1999. En primer lugar, la Constitución de 1999 reitera en su artículo 6 el carácter responsable del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que ha estado presente -en su carácter de cláusula pétrea- desde la Constitución de 1830, disponiendo que:

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen, es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

Además, la Constitución de 1999 reconoce el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado en el artículo 140, el cual establece que *“El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública”*, que se complementa con el artículo 141 *eiusdem*, según el cual la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en el principio, entre otros, de responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Esta disposición es reafirmada por la Exposición de Motivos de Motivos de la Constitución que explica la responsabilidad del Estado

²² Sentencia Nro. 850 del 11 de junio de 2003, caso Manuel Dos Santos vs. Eleoccidente.

²³ Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 189 del 8 de abril de 2010.

“bajo una perspectiva de derecho público moderna”, como “la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos y por cualesquiera actividades públicas, administrativas, judiciales, legislativas, ciudadanas o electorales, de los entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicio de tales funciones”.

La interpretación de la norma constitucional y de la Exposición de Motivos lleva a considerar incluido en la Constitución la responsabilidad del Estado por cualquier actuación de la administración, así como la responsabilidad originada, bien por falta o por sacrificio particular derivado de un daño causado por los servicios públicos, o por cualquier actividad pública sea administrativa, judicial, legislativa, de control o electoral, de los entes públicos o privados en ejercicio de tales funciones.

Adicionalmente, la Constitución de 1999 consagra en el artículo 49.8 una norma expresa referida a la responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad judicial, específicamente, por los daños derivados del error judicial y retardo u omisión injustificados.

Así mismo, este régimen de responsabilidad es complementado con otras disposiciones constitucionales que coadyuvan a su aplicación, entre las que destaca el artículo 259 de la Constitución, que al igual que el mencionado artículo 206 de la Constitución de 1961, establece la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para condenar a la administración pública al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual de los órganos que ejercen el poder público.

Además de las normas constitucionales citadas precedentemente, este principio de responsabilidad patrimonial del Estado se ve respaldado por las disposiciones relativas al principio de igualdad ante las cargas públicas, artículos 21 y 316; la responsabilidad de los funcionarios públicos establecida en el artículo 25; la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26; la garantía de la propiedad e integridad patrimonial previstas en el artículo 115; el derecho a gozar de bienes y servicios de calidad y a la indemnización en caso de incumplimiento de tal derecho establecido y en el artículo 117.

Tengamos en cuenta también el artículo 30 de la Constitución que establece la obligación del Estado de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios; lo cual, reiteramos, tal y como dispone la Exposición de Motivos de la Constitución, es “*una conquista de la lucha por la protección integral de los derechos humanos*”, por cuanto la Constitución “*impone al Estado la obligación de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades*”.

La claridad con la que el texto constitucional ha previsto este sistema de garantía patrimonial, se complementa con las normas procesales de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dictada en el año 2010, que prevén el proceso conforme al cual se tramitan y deciden por ante la jurisdicción contencioso-administrativa las reclamaciones por daños y perjuicios originados por responsabilidad del Estado.

Desde el punto de vista subjetivo, el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado no se agota en la responsabilidad derivada de los entes que tienen la personalidad jurídica del Estado, sino que también podrán generar responsabilidad patrimonial para éste, aquellos actos de personas jurídicas diferentes, pero que ejercen funciones públicas o actúan en funciones administrativas, como es el caso de los concesionarios.

Podemos en este sentido identificar varios supuestos que podrían generar responsabilidad al Estado, a saber: (i) la responsabilidad extracontractual del concesionario por los daños causados por su actividad; (ii) la responsabilidad derivada de los “actos de autoridad” dictados por personas jurídicas diferentes al Estado; y (iii) en general, la responsabilidad derivada de la actuación de cualquier persona jurídica que no forme parte de la estructura general del Estado y que cause daños en ejercicio de funciones públicas.

Por lo que se refiere al aspecto objetivo, la responsabilidad abarca tanto: (a) el actuar ilícito del Estado (responsabilidad por falta o funcionamiento anormal), en su actividad formal (i.e. actos administrativos, sentencias, normas); en su actividad material (i.e. actuaciones, hechos); inactividad (i.e. omisiones o abstenciones); y actividad contractual (el

tema de los contratos administrativos y de derecho privado), como: (b) en sus actuaciones lícitas (responsabilidad por sacrificio particular), tales como, las limitaciones generales al derecho de propiedad (i.e. expropiación, servidumbre, ocupaciones temporales, requisición de bienes en tiempo de guerra, limitaciones por razones urbanísticas) y la revocatoria por razones de mérito de actos y los contratos administrativos.

También se incluye dentro de la responsabilidad del Estado aquella derivada de los daños causados por: (c) situaciones de riesgo creado (responsabilidad por riesgo o actividades peligrosas); y además: (d) por causa de los daños derivados de las actividades judicial y legislativa.

En lo que respecta a las actividades judiciales, la responsabilidad judicial existe en la medida en que los daños ocurran a resultas de actos judiciales típicos, como es el caso de la sentencia, pero también se configura en el supuesto de omisiones y de retardo injustificado, así como en otras actuaciones judiciales, como los daños causados en la ejecución de las decisiones, así como los que se produzcan por su inejecución.

También el órgano judicial del Estado puede ser responsable por la restricción o limitación de forma injusta de la libertad. En este supuesto surge la necesidad de imputar al Estado esas conductas, por cuanto las mismas pueden y de hecho provocan daños antijurídicos, que derivan en el derecho de las víctimas a la reparación integral que corresponda.

Asimismo, hay responsabilidad judicial en actuaciones no propiamente jurisdiccionales pero inherentes a ellas, como es la pérdida de dinero, títulos valores u otros objetos de todo tipo consignados en los tribunales a consecuencia de procesos judiciales. Por su parte, los daños que el órgano judicial cause en cumplimiento de funciones de tipo administrativo darán lugar a la responsabilidad administrativa y no judicial.

3. Tercera Etapa. Involución

No obstante la claridad y amplitud de las normas relativas a la responsabilidad del Estado contenidas en la Constitución de 1999; a pesar de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que regula el proceso para la demanda por daños y perjuicios en contra de los órganos que ejercen el poder público; y obviando la jurisprudencia que hemos comentado, en las últimas dos

décadas ha habido un retroceso jurisprudencial importante en relación a fundamentar la responsabilidad del Estado en normas y principios de derecho público.

En este sentido téngase en cuenta la sentencia de la Sala Político-Administrativa del 7 de febrero de 2013, mediante la cual la Sala Político-Administrativa se refirió nuevamente la aplicación de los artículos del Código Civil para determinar la responsabilidad del Estado. En esa oportunidad la Sala Político-Administrativa estableció que la procedencia de una indemnización por los daños morales que se le habían imputado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), derivados del deterioro de la salud física y mental de los accionantes, como consecuencia de un accidente químico generado por sus contratistas, podía analizarse a la luz de los artículos 1.185 y 1.191 del Código Civil, en lugar de las reglas de derecho público, en tanto que, según la Sala, se trataba de un caso de responsabilidad indirecta o esto es, por intermedio de terceros²⁴.

De otra parte, tengamos también presente el retroceso que se deduce, en el sistema de responsabilidad del Estado, la posición jurisprudencial que imposibilitó la acumulación de las pretensiones de condena a actuar o hacer, con la pretensión de pago de sumas de dinero en una misma demanda y por ende su tramitación en un solo proceso. En efecto, la Sala Político-Administrativa, lejos de ajustarse a los dispositivos constitucionales que reconocen el orden jurisdiccional administrativo, la tutela judicial efectiva y el principio de economía procesal, determinó en sentencia del año 2010 que las pretensiones de omisión y pago de indemnizaciones se excluyen mutuamente, obligando al administrado a instar dos procesos contenciosos distintos para lograr la indemnización de los daños ocasionados por la inactividad o incumplimiento de las obligaciones legales de la Administración pública²⁵.

²⁴ Véase sentencia número 128 de la Sala Político-Administrativa del 7 de febrero de 2013, cit. en Víctor Hernández-Mendible, “La evolución jurisprudencial de la responsabilidad de la Administración Pública en Venezuela”, ob. cit. pp. 71-72.

²⁵ Véase sentencia número 838 de la Sala Político-Administrativa del 11 de agosto de 2010, cit. en Víctor Hernández-Mendible, “La evolución jurisprudencial de la responsabilidad de la Administración Pública en Venezuela”, ob. cit. p. 65.

III. DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO

1. Origen de la responsabilidad internacional del Estado

La responsabilidad internacional del Estado es la institución de derecho internacional público mediante la cual se establece que cualquier violación de un compromiso contenido en una norma de carácter internacional tiene como consecuencia para el Estado infractor la obligación de efectuar una reparación. Es decir, que un Estado es internacionalmente responsable cuando viola una obligación jurídica impuesta por una norma de derecho internacional. Conforme al derecho internacional público el mero hecho de producir un daño no da lugar a responsabilidad jurídico-internacional, esta solo se produce cuando el daño resulte de una infracción de derecho internacional.

La responsabilidad internacional del Estado encuentra su origen en la costumbre internacional, así como en las prácticas llevadas a cabo por los Estados como sujetos de derecho internacional para crear, mantener y desarrollar las relaciones entre sí.

Como dijimos previamente, un asunto especialmente importante en estos tiempos de internacionalización y mundialización de la justicia y, en especial de la protección de los derechos humanos, es la responsabilidad internacional de los Estados que deriva de la infracción o violación del derecho internacional y que puede consistir en una acción, esto es, una infracción de una prohibición jurídico-internacional, o en una omisión, es decir, puede surgir por el incumplimiento de una obligación de derecho internacional.

En una primera etapa -entre los siglos XVI al XIX- regía el principio absolutista según el cual el Estado era irresponsable pues el soberano -el Rey- solo era responsable ante Dios. Se trataba de un concepto enfocado en la teología, en un derecho divino. Recordemos que durante la edad media, a medida que el cristianismo se extendía, el imperio se vio reforzado por la teología cristiana. Como afirma Sorensen, en esta época el ideal era el de un orden universal, y que, a diferencia del ideario romano que lo antecedió “*ahora su autor era divino en lugar de*

*humano, y su cabeza visible era el Vicario de Dios en la Tierra, en vez de serlo el sucesor de Constantino o de Carlomagno*²⁶.

De esta forma, el “soberano” (emperador, rey, monarca, etc.), elegido por Dios, era responsable únicamente ante él, por lo que la responsabilidad era una noción jurídica inexistente en razón de la bilateralidad de la relación entre el monarca y Dios.²⁷ Si un pacto entre soberanos no era cumplido, el soberano agraviado solo podía imponer su voluntad ante el soberano agravante para que sus derechos fueran restituidos por medio de la fuerza armada.

Posteriormente, comenzó a estudiarse la relación no sólo entre el soberano y sus súbditos y las obligaciones que entre ellos podrían surgir, sino además los vínculos y compromisos que se generaban entre un Estado respecto de otros. Recordemos al respecto la tesis iusnaturalista del nacimiento del derecho internacional público, cuyos representantes -Francisco De Vitoria, Francisco Suárez y Hugo Grocio- predicaban que partiendo de una concepción aristotélica, “*el hombre es un ser racional y social. (...) el estado de naturaleza es, para el hombre, idéntico al estado de sociedad*”, en consecuencia “*Traspuesto mecánicamente este postulado a la sociedad internacional se concluye que los Estados, como los seres humanos son también por naturaleza entes racionales y sociales*”²⁸.

La dogmática cristiana tuvo una gran influencia sobre esta evolución. Entre los factores que configuraron el estado de comunidad internacional -aún naciente- durante la edad media destacan el cristianismo, el papado, las cruzadas y las leyes de comercio marítimo formadas gracias a las costumbres y prácticas comerciales establecidas en esa época. El cristianismo ejerció una influencia morigeradora en las relaciones de los pueblos: “*A las prácticas brutales y groseras de los bárbaros opone una filosofía espiritualista de elevación moral y confraternidad*”

²⁶ Max Sorensen, *Manual de Derecho Internacional Público*, Primera Reimpresión, Fondo de Cultura Económica, México, 1978. p. 62.

²⁷ Sebastián Ramos Zeballos. “Evolución histórica de la responsabilidad internacional por hecho ilícito: desde los clásicos hasta la Sociedad de Naciones”. *Revista Tribuna Internacional*, Volumen 9, Nº 17. Chile, 2020. pp-3-18

²⁸ Fermín Toro Jiménez, *Manual de Derecho Internacional Público*, primera parte, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1975. p. 13.

humana.” El papado ejerció también una importante influencia durante la edad media, inclusive como árbitro en las relaciones exteriores de los pueblos: “*Empeñado en cuestiones temporales por la administración de sus propios territorios, el Papa ejerce una acción equilibradora, sirve de árbitro en muchas disputas, asigna territorios, aboga por la abolición de armas crueles y dicta medidas encaminadas a regularizar y humanizar a la guerra.*”²⁹.

Antonio Truyol señala que el “humanismo cristiano” “se afana por mantener la primacía de la moral sobre la política, en lo internacional como en lo interno” y sus principales exponentes insisten en fustigar las tendencias belicistas desde un punto de vista ético, más allá de jurídico³⁰.

En el siglo XVI, Belli reseña en su obra *De Re Militari et Bello Tractatus*, de 1563, algunas prácticas que se establecen como aceptables en las relaciones bélicas entre soberanos. Así por ejemplo se sostuvo que era aceptable el saqueo del enemigo cuando se librara una guerra justa; en este caso, el soberano no incurriría en responsabilidad alguna de darse esta situación, pero sí resultaba responsable por las pérdidas ocasionadas al soberano enemigo por sus soldados, cuando se estuviese resistiendo injustamente a una guerra legítima en su contra. De forma que existía responsabilidad del soberano por acciones de sus súbditos.

Asimismo, Gentili estudió la responsabilidad de un soberano por el daño al embajador de otro soberano. Se trataba de la responsabilidad por el incumplimiento de una norma de derecho internacional consuetudinario que disponía que aún en tiempo de guerra fuese asegurada la integridad del embajador o representante del soberano en tierra extranjera. De esta forma, “cuando el príncipe hacía daño al representante de otro, no podía esperar que las prerrogativas que disfrutaba su propio representante fueran cumplidas”³¹.

Gentili empezó a hacer aportes respecto del incumplimiento de los tratados y sostuvo que “*un tratado no es violado si uno se aparta de*

²⁹ Daniel Guerra Iñiguez, *Derecho Internacional Público*, EDIPÚBLICA, Caracas, 1982, p. 18.

³⁰ Véase al respecto Antonio Truyol, *Fundamentos de Derecho Internacional Público*, cuarta edición revisada y aumentada, Editorial Tecnos, Madrid, 1977. pp. 180 y 181.

³¹ Sebastián Ramos Zeballos. “Evolución histórica de la responsabilidad internacional por hecho ilícito: desde los clásicos hasta la Sociedad de Naciones”. Ob. cit., pp. 4-5.

*sus disposiciones por una razón legítima (...) Si una de las condiciones sobre la cual fue basado el acuerdo no es observada por una de las partes, o si no se le permite disfrutar de los beneficios sobre los cuales fue formado el tratado, existirá una buena razón para disolver la alianza”*³². Sobre este punto, se aclara que la cuestión que dé origen a la disolución debe ser una de “vital importancia” y no un “asunto trivial”, dado que los acuerdos serían extremadamente inestables si alguna cuestión trivial pusiese en duda su existencia³³.

Más adelante, a principios del siglo XVII, Hugo Grocio, considerado el padre del derecho internacional -*De Jure Belli Ac Pacis* de 1625- distinguió tres fuentes de obligaciones: los pactos, la ley y el daño causado. Grocio sostuvo que se llama daño a toda culpa, en el hacer y en el no hacer, que pugna por aquello que los hombres deben hacer comúnmente, y que de tal culpa nace, naturalmente, la obligación, si se hizo el daño, de que sea resarcido. Los términos reparación y restitución (denominados así actualmente) ya eran vislumbrados para la época, cuando se estableció que el que dio promesa con dolo, violencia o miedo injusto, está obligado a restituir el estado inicial a aquel con quien hizo el acto. Sin embargo, esta restitución estaba condicionada a la voluntad del soberano.³⁴

Parte importante de la doctrina sostenía que para que existiera la responsabilidad era necesaria la presencia del elemento de la culpa del sujeto imputado. El soberano no respondía por los actos de sus ministros si no había culpa de su parte, esto es, si no había mediado la *patientia*, que era un dejar hacer a los individuos -sin prevenir ni impedir, pudiendo hacerlo- la conducta contraria a la obligación internacional. Habiendo *patientia*, el soberano hacía suya la conducta ilícita.³⁵

De esta forma se comienza a construir las bases de la responsabilidad internacional de los Estados al sostenerse que “un mal entre diferentes príncipes o naciones es algo que fractura la comunidad de

³² Idem.

³³ Ibidem, p. 5.

³⁴ Ídem.

³⁵ Julio Barboza. “La Responsabilidad Internacional”. Disponible en: https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXXIII_curso_derecho_internacional_2006_Julio_Barboza.pdf

la paz, y del cual, tal como las demandas judiciales surgen de males o daños entre personas privadas, así las guerras surgen entre aquellos que no tienen juez” (Zouche). En efecto, la violación del acuerdo entre Estados fue concebida como causa legítima de la guerra justa, lo que suponía una responsabilidad jurídica, no de hecho, que solamente puede ser restaurada materialmente (mediante la fuerza armada), dada la inexistencia, en la dimensión internacional, del juez. Incluso, comenzó a desarrollarse el concepto aplicable en el derecho internacional contemporáneo sobre el deber de reparación y la promesa de no repetición al sostenerse que todo hombre está en la obligación de reparar el daño causado a otra parte por su propia culpa, y, si ese daño procedió de mala fe, está obligado a prometer que no volverá a ofender en el futuro³⁶.

A mediados del siglo XVIII, surgió un nuevo aporte al derecho internacional en materia de responsabilidad del Estado: el principio de *pacta sunt servanda*, considerado como el principio rector de la obligatoriedad de los acuerdos entre los Estados. La doctrina (Cornelius van Bynkershoek) refiere el término de “honor” como la buena fe en la que deben actuar los Estados en sus relaciones internacionales, partiendo de la idea de que “*si destruyes la buena fe, destruyes todos los tratados; incluso destruyes el derecho internacional, que encuentra su origen en acuerdos presupuestos y tácitamente aceptados fundados sobre la razón y la costumbre*”³⁷. Aunque para ese momento el principio de *pacta sunt servanda* regía como un principio de índole moral y no como un dispositivo jurídico, por lo que no tuvo importantes efectos en las relaciones entre los soberanos³⁸.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la conformación de los Estados federales surgieron nuevas interrogantes con respecto a la relación entre las entidades estatales constitutivas, el Estado federal y la responsabilidad de este último por las acciones de los primeros. Se avanzó en el tema de la imputabilidad, aunque no solamente

³⁶ Sebastián Ramos Zeballos. “Evolución histórica de la responsabilidad internacional por hecho ilícito: desde los clásicos hasta la Sociedad de Naciones”, ob. cit., pp. 6-8.

³⁷ Cornelius van Bynkershoek, *Quaestionum Juris Publici Libri Duo*, de 1737, cit. por Sebastián Ramos Zeballos. “Evolución histórica de la responsabilidad internacional por hecho ilícito: desde los clásicos hasta la Sociedad de Naciones”, ob. cit p. 10.

³⁸ *Ibidem*, pp. 9-11.

se limitó a analizar esta responsabilidad, sino también la atribución al Estado de acciones efectuadas por individuos, órganos del Estado y entidades públicas autónomas, independientes de la administración estatal.

Asimismo, se comenzó a predicar la doctrina dualista, sobre la existencia de dos ordenamientos jurídicos independientes: el internacional y el interno. Igualmente, se elaboró una teoría de responsabilidad internacional del Estado delineando principios y definiciones que concebían esta materia como una categoría jurídica independiente. Entonces, se redujo el ámbito de la responsabilidad internacional a la violación de la norma internacional, separándola de las sanciones o represalias.

De forma que la responsabilidad internacional del Estado se encuentra dentro del marco de la reparación por el incumplimiento de una obligación. La responsabilidad internacional se debe por el incumplimiento del derecho subjetivo y particular de un Estado, esto excluye los intereses generales o específicos de las naciones³⁹.

Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, varios eventos significativos marcaron las relaciones internacionales en cuanto a la responsabilidad del Estado. El tratado de Washington de 1871 dio inicio al arbitraje entre Estados como mecanismo de solución pacífica de disputas y de determinación de responsabilidad internacional de los Estados.

La cuestión entre los Estados Unidos de América y Gran Bretaña surgió con ocasión de la guerra sostenida en América entre los Estados que formaban parte de la Unión. El gobierno de EEUU emprendió fuertes gestiones diplomáticas (reclamaciones de Alabama⁴⁰) para que Gran Bretaña reparara los daños causados por varios buques de guerra construidos en Liverpool con la connivencia británica, que durante las

³⁹ Idem.

⁴⁰ Las reclamaciones del Alabama fueron una serie de demandas de Estados Unidos dirigidas a Gran Bretaña luego de la Guerra Civil Estadounidense. Gran Bretaña se habría declarado neutral, sin embargo, habría actuado de otra manera al proveer de buques a los confederados lo que ocasionó diversos daños en materias primas. Luego, en mayo de 1871, las partes crearon el Tratado de Washington, un acuerdo que resolvería la controversia entre ambos países. Posteriormente crearon un reglamento diseñado especialmente para que el tribunal arbitral permaneciera neutral. El arbitraje tuvo lugar en 1872 y a Gran Bretaña se le condenó a pagar una indemnización. A partir de este momento, el caso serviría de referencia para futuros arbitrajes y comenzó una nueva etapa de evolución para el medio alternativo.

hostilidades habían sido puestos al servicio de los secesionistas sureños. Entre los navíos que causaron más daño al ejército de la Unión destacaron el Florida y el Alabama⁴¹. En efecto, en casi dos años el buque Alabama logró detener 69 navíos de los Estados Unidos, lo que causó graves efectos en la economía norteamericana hasta que fue hundido en 1864.

Las discusiones entre Estados Unidos de América y Gran Bretaña hicieron temer una guerra por lo que para prevenirla se celebró un tratado firmado en Washington el 8 de mayo de 1871, en el cual ambos gobiernos se comprometieron a someterse a un arbitraje para darle fin a las desavenencias en los términos del derecho internacional.

Según el artículo 2 del tratado de Washington de 1871, el tribunal arbitral estaría en la obligación de fallar tomando en cuenta la actuación británica a los ojos de la “obligación de neutralidad”, cuyo contenido estaba señalado en el artículo 6 del mismo instrumento⁴²:

“Todo Gobierno neutral está obligado:

1° A hacer todo lo posible por impedir en los límites de su jurisdicción, que se ponga un buque en condiciones de hacerse a la mar, que se arme o se pertreche, cuando dicho Gobierno tenga suficientes motivos para creer que el expresado buque está destinado a navegar en corso o a realizar actos de guerra contra una Potencia con la que el mismo esté en paz. Asimismo, debe hacerse todo lo necesario para oponerse a que un buque destinado a navegar en corso o a realizar actos de guerra, como queda dicho arriba, salga de los límites en el caso que sea de su jurisdicción territorial, en el caso que sea especialmente apropiada, en todo o en parte a los usos de la guerra”.

La decisión del tribunal arbitral -Corte de Arbitraje de Ginebra-, conocida como *The Geneva Award* o Laudo de Ginebra, condenó al gobierno de Gran Bretaña al resarcimiento de daños en los siguientes términos:

⁴¹ Véase: Los orígenes. Corte Internacional de Justicia. Disponible en: <https://www.un.org/es/iccj/origin.shtml>

⁴² Véase el caso “Reclamaciones de Alabama: Estados Unidos contra Gran Bretaña (1872)”. Disponible en https://nanopdf.com/download/el-caso-reclamaciones-de-alabama_pdf

“The tribunal, by a majority of four voices to one, is of opinion... That Great Britain has in this case failed, by omission, to fulfill the duties prescribed in the first, in the second, and in the third of the rules established by Article VI of the Treaty of Washington”⁴³.

El caso del Alabama es emblemático, no solo desde el punto de vista histórico y político, sino también desde una perspectiva netamente jurídica. En efecto, fue con este caso que el arbitraje internacional entre Estados comenzó su evolución. Podría decirse que el arbitraje que tuvo lugar con ocasión de las reclamaciones de Alabama fue el impulso para que ese medio pacífico de solución de controversias pasara de ser un mecanismo político a un mecanismo de derecho.

Antes del caso del Alabama, lo más común en los arbitrajes internacionales entre Estados era que los árbitros fueran personas poderosas, influyentes y de reconocida solvencia moral. Ciertamente, los reyes y miembros del clero eran frecuentemente designados como árbitros. Sin embargo, al no tratarse de juristas, las soluciones propuestas eran eminentemente diplomáticas y no en observancia de las fuentes de derecho que informan la solución jurídica de las controversias.

En el caso del Alabama los cinco árbitros designados fueron juristas, ello comportó una importante ruptura con la práctica arbitral precedente, con lo que el arbitraje fue transformándose en un medio judicial. Esa transformación pasa, por supuesto, por las labores de codificación del Instituto de Derecho Internacional del año 1875 - proyecto de reglas de arbitraje internacional en derecho- y alcanza su mayor expresión durante el siglo XIX en la I Conferencia de La Haya, que fue fundamental para la comprensión de la evolución del arbitraje entre Estados⁴⁴.

⁴³ Véase “The Geneva Award in the “Alabama” Claims (1872)”. Disponible en: <https://www.dipublico.org/1592/the-geneva-award-in-the-alabama-claims-1872/>

⁴⁴ Véase Rafael Badell Madrid, “Comentarios sobre la controversia con Guyana”, en Rafael Badell Madrid, Enrique Iribarren Monteverde, Juan Cristóbal Carmona Borjas y José Antonio Muci Borjas (Coords.) *Libro Homenaje a Cecilia Sosa Gómez*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2021, pp. 731 y ss.; véase también Rafael Badell Madrid, “La Nulidad del Laudo de París del 3 de octubre de 1899”, en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, número 165, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2021, pp. 279 y ss. Igualmente, al estudiar la evolución del arbitraje entre Estados, véase: Héctor Faúndez Ledesma, *La competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia y el caso Guayana vs. Venezuela*, Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales – Editorial Jurídica Venezolana, 2020.

Luego de la Primera Guerra Mundial se afianzó la tesis de la responsabilidad internacional del Estado por sus actos, reflejado en el Tratado de Versalles firmado el 28 de junio de 1919, que puso fin a la guerra y reconoció la responsabilidad de Alemania por los daños ocasionados. En efecto, se desprendía del tratado que el responsable de la Guerra fue Alemania, de allí que tenía la obligación de reparar los daños ocasionados por sus actos. De esta forma, el artículo 231 del Tratado de Versalles, conocido como la “cláusula de culpa de guerra”, establecido en la sección de reparaciones, dispuso:

“Los Gobiernos Aliados y Asociados afirman y Alemania acepta la responsabilidad de Alemania y sus aliados a causar toda la pérdida y daño al cual los Gobiernos Aliados y Asociados y sus ciudadanos se han sujetado como una consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus aliados”⁴⁵.

Con ocasión del fin de la Primera Gran Guerra se creó la Sociedad de Naciones en 1919, la cual, de conformidad con el Tratado de Versalles, estaba encargada de velar por la paz y la seguridad en el mundo. Esta Sociedad, mediante su Comité de Expertos, fue la que emprendió la primera labor codificadora de derecho internacional en 1925.

La Sociedad de Naciones contribuyó a establecer los principios del derecho internacional como la firma del Tratado de Locarno (1925) para reforzar la paz en Europa y el Pacto Briand-Kellogg (1928) para prohibir el uso de la fuerza. Sin embargo, los esfuerzos de la Sociedad de las Naciones no evitaron la Segunda Guerra Mundial⁴⁶.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, para impedir que el mundo volviera a enfrentarse con otra guerra, los representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional del 25 de abril al 26 de junio de 1945⁴⁷. Durante los siguientes dos meses, procedieron

⁴⁵ Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, en vigor desde el 10 de enero de 1920.

⁴⁶ Véase ¿Qué fue la Sociedad de Naciones? Disponible en <https://elordenmundial.com/que-fue-la-sociedad-de-naciones/>

⁴⁷ Véase Historia de las Naciones Unidas. Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/history-of-the-un>

a redactar y luego firmar la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que creó una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, que se esperaba, evitaría otra guerra mundial como la que acababan de vivir⁴⁸.

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la Comisión de Derecho Internacional y la responsabilidad del Estado fue elegido como uno de los primeros catorce temas a ser tratados por el nuevo órgano⁴⁹.

Actualmente, el principal instrumento normativo sobre la responsabilidad internacional del Estado es el Proyecto sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y aprobado en segunda lectura por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la resolución 56/83 del 12 de diciembre de 2001.

En esa oportunidad, la Asamblea General de la ONU tomó nota de los artículos (cuyo texto figura en el anexo de esa resolución) y los señaló a la atención de los gobiernos, sin perjuicio de la cuestión de su futura aprobación como texto de un tratado o de otro tipo de medida, según correspondiera. Desde entonces, en la práctica, los artículos han sido aprobados y aplicados muy ampliamente en la práctica, incluso por la Corte Internacional de Justicia⁵⁰.

2. Concepto, fundamento y alcance de la responsabilidad internacional del Estado

La responsabilidad internacional del Estado es la institución de derecho internacional público mediante la cual se establece que cualquier violación de un compromiso contenido en una norma de carácter internacional tiene como consecuencia para el Estado infractor la obligación de efectuar una reparación. Es decir, que un Estado es internacionalmente responsable cuando viola una obligación jurídica impuesta por

⁴⁸ Véase La formación de la ONU: un sueño de paz en medio de la pesadilla de la guerra. Disponible en <https://news.un.org/es/story/2020/01/1468361>

⁴⁹ Véase al respecto James Crawford, “Artículos sobre responsabilidad del estado por hechos internacionalmente ilícitos”, United Nations Audiovisual Library of International Law, 2009. Disponible en: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_s.pdf P. 2.

⁵⁰ Ibidem. P. 2.

una norma de derecho internacional. Conforme al derecho internacional público el mero hecho de producir un daño no da lugar a responsabilidad jurídico-internacional, esta solo se produce cuando el daño resulte de una infracción de derecho internacional.

La responsabilidad internacional del Estado garantiza el sistema de derecho y de coordinación internacional entre Estados soberanos que se encuentran en una relación de interdependencia, mediante el establecimiento de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por dichos Estados. La responsabilidad internacional de los Estados deriva de la infracción o violación del derecho internacional y puede consistir en una acción, esto es, una infracción de una prohibición jurídico-internacional, o en una omisión, es decir, puede surgir por el no cumplimiento de una obligación de derecho internacional⁵¹.

Como hemos señalado, con fundamento en las teorías absolutistas del Estado, los Estados generalmente eran irresponsables de sus actos, al punto que los perjudicados recurrían a la fuerza para conseguir el resarcimiento de los perjuicios sufridos por causa de las acciones y omisiones de otro Estado. Sin embargo, a partir de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que estableció expresamente en el artículo 2.4 que: *“Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”*, comenzaron a gestarse consuetudinaria y jurisprudencialmente las reglas relativas a la responsabilidad internacional⁵².

La responsabilidad internacional de los Estados se fundamenta en la existencia de un orden jurídico internacional y en la necesidad de que los Estados observen y cumplan las normas internacionales, de forma que ante su incumplimiento, los Estados incurren en responsabilidad. La doctrina (Sorensen) ha establecido como elementos esenciales de la responsabilidad internacional de un Estado: primero, la existencia de

⁵¹ Alfred Verdross, *Derecho Internacional Público*. Biblioteca Jurídica Aguilar, 5ta edición. Madrid, 1976. p. 336.

⁵² Daniel Rigoberto Bernal Gómez, *Tendencias académicas sobre Derecho Internacional Público*, Tunja: Ediciones Usta, Bogotá, 2018. p. 137.

un acto u omisión que viole una obligación establecida por una regla de derecho internacional vigente entre el Estado responsable del acto u omisión y el Estado perjudicado por dicho acto u omisión; segundo, el acto ilícito debe ser imputable al Estado como persona jurídica; y por último, debe haberse producido un perjuicio o un daño como consecuencia del acto ilícito⁵³.

La responsabilidad internacional, Atilio Molteni, es una institución fundamental dentro del derecho internacional público, pues de no admitirse una responsabilidad consiguiente a un acto ilícito internacional se suprimiría el deber de los Estados de comportarse de acuerdo al derecho internacional⁵⁴.

Al ser el Estado un sujeto de derecho internacional, su responsabilidad internacional puede provenir de conductas violatorias que atacan a personas, bienes o derechos de otro ente, protegidos por normas internacionales. Siempre que se viola un deber establecido en cualquier regla de derecho internacional, automáticamente surge una relación jurídica nueva. Esta relación se establece entre el sujeto imputable, que debe “responder” mediante una reparación y el sujeto que tiene derecho de reclamar la reparación por el incumplimiento de la obligación.

2.1. La obligación de *pacta sunt servanda* como fundamento de la responsabilidad internacional

La obligación de los Estados de cumplir con el ordenamiento jurídico internacional deriva del principio de derecho internacional *pacta sunt servanda*, según el cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, sin la posibilidad de invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del mismo.

Los tratados internacionales son la fuente más importante de derecho internacional, y en términos generales consisten en “un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional, destinado a producir efectos jurídicos, los cuales consisten en crear, modificar o

⁵³ Max Sorensen, *Manual de Derecho Internacional Público, Responsabilidad internacional*, Fondo de Cultura Económica de México, México, 1973. p. 508.

⁵⁴ Atilio Monteli, “La Responsabilidad Internacional del Estado”, ob. cit. p. 43.

extinguir una relación jurídica”⁵⁵. En efecto, los tratados constituyen la forma en que los sujetos de derecho internacional público conciertan entre sí las reglas de comportamiento futuro⁵⁶.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 define los tratados internacionales como “un acuerdo internacional celebrado entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular” (artículo 1).

Este principio de *pacta sunt servanda* fue positivizado en la referida Convención de Viena, cuyos artículos 26 y 27 regulan la Observancia de los Tratados, en los siguientes términos:

“Artículo 26. “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”

Es decir, que a partir de que un Estado ha manifestado formalmente su voluntad a través de los mecanismos que dispone su ordenamiento interno de someterse a las disposiciones de un tratado internacional surge el deber de cumplir las obligaciones que de él se deriven.⁵⁷

En relación con lo anterior, Pedro Nikken afirmó que “*Los Estados comprometen el honor nacional al obligarse por un tratado, de cuya ejecución son los garantes últimos, de modo que, al deshonorar ese compromiso se colocan fuera de la ley, resquebrajan en orden internacional y se exponen a las consecuencias jurídicas y políticas de tal proceder*”, al mismo tiempo que señala que “*tratar de justificar el incumplimiento en argumentos traídos del Derecho Interno, incluso de la Constitución, (...), es insustentable, pues es un principio inalterable de Derecho Internacional consuetudinario que jamás puede invocarse*

⁵⁵ M. G. Monroy Cabra. *Derecho de los Tratados*, Editorial TEMIS, Bogotá, 1978. p. 9.

⁵⁶ Alfred Verdross, ob. cit. p. 92.

⁵⁷ Rafael Badell Madrid, “Control de Convencionalidad”, en *Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano (REDAV)* N° 17-19. Homenaje a Pedro Nikken, Caracas, 2020, pp. 77-78.

*una disposición de Derecho Interno como justificación para el cumplimiento de un tratado, como ha quedado recogido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*⁵⁸.

El fundamento de la responsabilidad internacional del Estado parte de la contrariedad de la actuación del Estado con la norma internacional a la que se encuentra obligado en forma voluntaria, a través de un tratado o del derecho consuetudinario. Al respecto, señaló Rousseau: *“El único fundamento de la responsabilidad es, en realidad, el incumplimiento de una regla del derecho internacional; y es la solución que se emplea cada vez más en la doctrina y en la práctica”*⁵⁹.

2.2. La ilicitud como núcleo de la responsabilidad internacional

A diferencia de la responsabilidad interna de los Estados, la responsabilidad internacional de los Estados no se basa en la producción de un daño, ni exige que se demuestre la culpa en la ejecución del mismo, sino que requiere para su determinación la infracción de un dispositivo del ordenamiento jurídico internacional o la violación de los derechos humanos. En derecho internacional, el *“ilícito internacional”*, como elemento objetivo cuya comisión genera responsabilidad para el Estado, lo constituye un acto u omisión del Estado que viole una obligación internacional.

La ilicitud como elemento esencial de la responsabilidad del Estado es la violación de una obligación internacional establecida en una norma de derecho internacional, que se genera por un hecho, acto u omisión de un Estado. De forma que el comportamiento, acto u omisión del Estado es el núcleo de la ilicitud.

Al respecto tengamos en cuenta el artículo 16 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional encargada por la Asamblea General

⁵⁸ Pedro Nikken, Discurso de contestación al discurso de incorporación del Dr. Carlos Ayala Corao a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales* número 153 – enero-diciembre 2014, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2014. p.206. Disponible en: https://www.acienpol.org.ve/wp-content/uploads/2019/09/BolACPS_2014_153_201-211.pdf p. 78.

⁵⁹ Claudio Nash Rojas. *Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988 - 2007)*. Segunda edición corregida y actualizada. Universidad de Chile, 2009, p. 11.

de la Organización de Naciones Unidas de la codificación de la responsabilidad del Estado por hechos internacionales ilícitos, según el cual “*hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que de él exige esa obligación*”⁶⁰.

Ahora bien, una de las condiciones fundamentales para la configuración de la ilicitud es la vigencia de la obligación internacional al momento en que se produce el comportamiento estatal que la vulnera. Así lo impone el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 13 del Proyecto sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU⁶¹ y en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según el cual:

“Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo”.

2.3. Órganos que pueden generar la responsabilidad internacional

La responsabilidad internacional del Estado puede surgir por un acto u omisión de carácter directo, como es el realizado por los órganos sometidos a la autoridad del Estado, tanto si éste pertenece al poder ejecutivo, legislativo, judicial, constituyente o cualquier otro poder, o por cualquier otro órgano que ejerza funciones públicas dentro de la organización del Estado⁶².

Tomando en cuenta que el Estado es una entidad abstracta y colectiva cuyo comportamiento no puede llevarse a cabo sin la actuación de sus órganos, respecto de la responsabilidad internacional del Estado cabe destacar la importancia de la imputabilidad o atribución de un he-

⁶⁰ Cit. en Daniel Rigoberto Bernal Gómez, *Tendencias académicas sobre Derecho Internacional Público*, p. 138.

⁶¹ *Ibidem*, pp. 277-278.

⁶² *Ibidem*. p. 139.

cho ilícito internacional como la operación jurídica mediante la cual se determina si el comportamiento activo u omisivo de una persona física o jurídica puede considerarse un acto del Estado⁶³.

En efecto, los Estados como sujeto de supremacía actúan a través de sus órganos, y por ello *“cabe únicamente imputarle el comportamiento de sus órganos competentes para realizar actos de supremacía”*⁶⁴. Sin, embargo, un Estado puede incurrir en responsabilidad por el comportamiento de un particular si este actuó en un caso determinado en nombre del Estado⁶⁵.

Al respecto cabe mencionar que, como principio general, el criterio para determinar si una conducta particular puede ser imputada a un Estado parte del ordenamiento jurídico interno de este, que es el que determina qué personas se consideran como órganos del Estado. Sin embargo, puede ocurrir que el propio derecho internacional, determine las personas que han de considerarse como órganos del Estado. El derecho internacional imputa al Estado la conducta de los titulares efectivos del Poder. En todos los casos, *“el derecho internacional hace al Estado responsable de su propio comportamiento, porque se trata de un comportamiento imputable al Estado en virtud de su ordenamiento jurídico”*⁶⁶.

Al respecto el Proyecto de la CDI en su artículo 4 establece: *“Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado”*.

2.3.1. Responsabilidad de los órganos legislativos

El Estado es responsable en materia legislativa por todas las decisiones y leyes que decida promulgar que afecten o sean contrarias a los estándares y principios internacionales, sea por la suscripción de un

⁶³ Ibidem, p. 279.

⁶⁴ Alfred Verdross. *Derecho Internacional Público*, ob. cit., p.358.

⁶⁵ Ídem.

⁶⁶ Ibidem, pp. 359-360.

tratado o por la prevalencia y protección de los derechos humanos⁶⁷. Para el derecho internacional público, las leyes son manifestaciones de voluntad de los Estados y por ende pueden generar la responsabilidad internacional del Estado. En efecto, la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el fallo sobre “Ciertos Intereses Alemanes en La Alta Silesia Polaca” (1926) expresó al respecto que: *“Desde el punto de vista del Derecho Internacional y del Tribunal, que es su órgano, las leyes nacionales son simples hechos, manifestaciones de la voluntad y de la actividad de los Estados, al-igual que las decisiones judiciales o las medidas administrativas”*⁶⁸.

De forma que los Estados son responsables por el ejercicio de sus órganos legislativos, por la promulgación de normas internas incompatibles con las obligaciones internacionales⁶⁹, incluso de rango constitucional. Ahora bien, serán consideradas contrarias al derecho internacional las normas que contienen directamente alguna disposición contraria y no cuando se limitan a hacer posible la realización de un acto internacionalmente ilícito en un futuro⁷⁰.

Así por ejemplo, en el proceso 132-AI-2003 del Tribunal Andino de Justicia se discutió la legalidad de la Ley de Impuesto al Valor Agregado de Venezuela, en el que la Secretaría de la Comunidad Andina alegaba que *“al pretenderse cobrar un arancel que por derecho no se paga, saliéndose a tal efecto de un tributo interno, se desnaturaliza el objetivo del Programa de Liberación, se vulnera el Principio de Trato Nacional y se restringe el comercio andino”*, lo cual era una violación a las normas y principios de igual internacional entre los Estados miembros de la CAN, por lo que el tribunal ordenó en consecuencia la reforma de dicho cuerpo normativo.

Igualmente serán responsables los Estados cuando el órgano legislador no promulga una ley impuesta por el derecho internacional o

⁶⁷ Alfred Verdross, ob. cit.

⁶⁸ Véase la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el fallo sobre “Ciertos Intereses Alemanes en La Alta Silesia Polaca”, 1926. Cit. en Atilio Monteli, La Responsabilidad Internacional del Estado, p. 52. Disponible en <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/26/la-responsabilidad-internacional-del-estado.pdf>

⁶⁹ Véase, la responsabilidad Internacional. Disponible en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1911/12.pdf>, p. 104.

⁷⁰ Alfred Verdross. *Derecho Internacional Público*, ob. cit., p. 361.

cuando las leyes promulgadas sean deficientes de tal manera que los órganos del Estado que se atienen a ellas no estén en condiciones de actuar según dispone el derecho internacional. El Estado también será responsable si el legislador no crea instituciones necesarias para el cumplimiento de los deberes internacionales⁷¹.

De manera que hay responsabilidad del Estado por la emisión de leyes que afecten o sean contrarias a los estándares y principios internacionales y por la abstención en hacerlo cuando hay una obligación en ese sentido impuesta por el derecho internacional o cuando las leyes promulgadas sean deficientes.

2.3.2. Responsabilidad de los órganos ejecutivos

La responsabilidad del Estado por los hechos de órganos ejecutivos suele ser la más común. Los actos emanados de los órganos del poder ejecutivo que contravengan una norma internacional también responsabilizan al Estado aun cuando no exista una autorización o bien se realicen en exceso de sus facultades *ultra vires*⁷².

El Estado es responsable de la conducta de todos sus agentes públicos sin distinciones según el cargo que ocupan en la jerarquía administrativa⁷³. Por ejemplo, actos de policía que infrinjan daños, actuaciones que se determinen como antijurídicas, expropiaciones de hecho, etc.

Sobre este aspecto resaltamos lo resuelto en el caso Massey, que se planteó entre Estados Unidos y México, en el que el tribunal arbitral decidió: “*Cuando un acto improcedente de un funcionario, cualquiera que sea su jerarquía según la ley nacional, da lugar a que una nación falte en el cumplimiento de sus obligaciones según el Derecho internacional, la nación debe asumir la responsabilidad de los actos indebidos de sus servidores*”⁷⁴.

Venezuela ha sido objeto de varias demandas internacionales por medio de las cuales los accionantes han solicitado a instancias interna-

⁷¹ Ibidem.

⁷² Véase Julio Barboza, La responsabilidad internacional, Ob. cit. pp-104-105.

⁷³ Atilio Monteli, *La responsabilidad Internacional del Estado*. Disponible en: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/26/la-responsabilidad-internacional-del-estado.pdf> p. 53.

⁷⁴ Idem.

cionales (tribunales, cortes arbitrales, etc.) la reparación por daños y perjuicios ocasionados por actos dictados por el órgano ejecutivo del Estado venezolano, en violación a compromisos bilaterales y multilaterales que protegían las inversiones extranjeras. Un casi a tener en cuenta es lo ocurrido a Crystallex, empresa extranjera que presentó una demanda contra Venezuela ante el CIADI por la expropiación que experimentó en el año 2008 por el proyecto aurífero “Las Cristinas”, que llevaba a cabo en el Estado Bolívar. La decisión del tribunal fue la condena al Estado venezolano por el pago de 1.200 millones dólares a Crystallex.

2.3.3. Responsabilidad de los órganos judiciales

En cuanto a la responsabilidad internacional del Estado por actos de los órganos del poder judicial, según la perspectiva clásica del derecho internacional público, esta surge cuando dichos órganos obran “*denegando justicia, que consiste en no permitir al extranjero acceder a los tribunales internos; retrasar indebidamente y sin justificación la decisión judicial o en dictar fallos manifiestamente incompatibles con las obligaciones internacionales, o absolutamente injustos, rayano con la mala fe; dejando a salvo el mero “error judicial”, que descarta al instituto de la “denegación de justicia”*”⁷⁵.

Un acto ilícito del órgano judicial se produce entonces cuando este infringe el derecho internacional y al mismo tiempo el derecho interno, como por ejemplo cuando no aplican o aplican erróneamente un tratado internacional reconocido, una costumbre internacional reconocida en el orden interno. De igual forma, el Estado será responsable si su órgano judicial infringe una norma internacional sin infringir una norma interna, por lo que será responsable en uno y en otro caso. En cambio, el derecho internacional nunca considera responsable al Estado por la simple violación de una norma interna⁷⁶, en efecto, la infracción del derecho interno por parte de los órganos judiciales no generará responsabilidad internacional del Estado.

⁷⁵ Jorge Raúl Mariño Fages. “Estado Actual de la Responsabilidad Estatal en el Derecho Internacional”, pp.135-136.

⁷⁶ Alfred Verdross. *Derecho Internacional Público*, Ob. Cit., p.363.

Un ejemplo de la responsabilidad internacional del Estado por sus órganos judiciales, es la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de fecha 26 de septiembre de 2018, por medio de la cual determinó que el Estado de Venezuela es responsable por la falta de protección de los órganos judiciales venezolanos -negligencia judicial- ante los hechos de tortura y violencia sexual sufridos por Linda Loaiza López Soto, todo ello en violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). En efecto, la Corte IDH ordenó al Estado venezolano responder con indemnizaciones económicas a Linda Loaiza López Soto por gastos incurridos con motivo de los daños emergentes y por concepto de pérdidas de ingresos por daño inmaterial.

2.3.4. Responsabilidad de los otros órganos del Estado

También serán responsables internacionalmente cualquier división territorial interna del Estado (municipios, provincias, regiones, cantones...). Cualquier entidad que tenga condición de órgano del Estado, entre ellos órganos estatales que se exceden en su competencia o que vulneren instrucciones. Al respecto, *“el comportamiento de un órgano del Estado o de una persona o entidad facultada para ejercer atribuciones del poder público se considerará hecho del Estado según el derecho internacional si tal órgano o entidad actúa en esa condición, aunque se exceda en su competencia o contravenga sus instrucciones”*⁷⁷.

De otra parte, generalmente es admitido que los Estados no responden por los hechos ilícitos realizados por particulares sean estos nacionales o extranjeros, sin embargo, debe tenerse en consideración que el Estado es responsable por las actuaciones que sus órganos omitieron prevenir o reprimir, según el derecho internacional.

⁷⁷ Jorge Raúl Mariño Fages. “Estado Actual de la Responsabilidad Estatal en el Derecho Internacional”, ob. cit., p. 136.

2.4. De la reparación como obligación derivada de la responsabilidad

La obligación que tienen los Estados de reparar en caso que incurran en un ilícito internacional es uno de los principios del derecho internacional público en materia de responsabilidad del Estado. Ha sido consagrado como principio del derecho internacional por la justicia internacional y por la Corte IDH: *“Es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado ‘incluso una concepción general de derecho’, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo”*⁷⁸.

Respecto a la reparación como parte de las obligaciones que se derivan de la responsabilidad, la Corte Internacional de Justicia (Caso Chorzow) ha establecido que:

“El principio general que está implícito en el concepto de acto ilícito (...) es que en la medida de lo posible, la reparación debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que probablemente hubiera existido de no haberse cometido dicho acto. Restitución en especie o, si ello no es posible, pago de una suma equivalente al valor que tendría la restitución en especie, otorgamiento de ser necesario, de una indemnización por los daños sufridos que no hayan sido reparados por la restitución en especie o por el pago en efectivo: tales son los principios que deben servir para determinar el monto de una indemnización por un acto contrario al derecho internacional”.

Tengamos presente además que en el informe final sobre la impunidad y el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad⁷⁹ rea-

⁷⁸ CPJI, Fábrica Chorzów (1928), párr. 47. Cit en Claudio Nash Rojas. *Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988 - 2007)*, ob. cit., p. 38.

⁷⁹ U.N. Comisión de Derechos Humanos, Louis Joinet. La administración de la justicia y de los derechos humanos de los detenidos. E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev. (octubre 12 de 1997). La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos).

lizado para la ONU, se analizan las obligaciones que tienen los Estados para conseguir la efectiva protección de las víctimas, entre ellas: la verdad, la justicia, la reparación, y la reforma a las instituciones y otras garantías de no repetición⁸⁰.

Consideremos también que el número 37 de los principios antes referidos trata sobre las garantías de no repetición entendidas como mecanismos preventivos y accesorios a las otras obligaciones, y a su vez como elementos del derecho a la reparación integral.

La reparación en este sentido, consiste en restablecer la situación de la víctima al momento anterior del hecho ilícito, anulando las consecuencias de ello por la actuación u omisión. Esta reparación implica dejar sin efecto las consecuencias inmediatas del hecho, en todo aquello que sea posible, y en indemnizar los perjuicios causados, ya sean estos de carácter patrimonial o extrapatrimonial⁸¹.

Vamos a tener presente también el artículo 29 de la Constitución, según el cual:

“El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.”

El mencionado artículo 29, tal y como lo expresa la Exposición de Motivos de la Constitución, constituye un imperativo para el Estado venezolano de -en aras de proteger integralmente los derechos humanos- *“investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, al tiempo que establece, sin*

⁸⁰ Carlos Raúl Duque Morales, Laura María Torres Restrepo. *Las Garantías de no Repetición como Mecanismo Permanente para la Obtención de la Paz*. Universidad de Bogotá, 2014, p. 275.

⁸¹ Claudio Nash Rojas. *Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988 - 2007)*, ob. cit., pp. 35-36.

excepción, que las violaciones de tales derechos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por tribunales ordinarios, a fin de excluir tribunales militares o de excepción de cualquier investigación al respecto”.

Veamos además el artículo 30 de la Constitución que impone al Estado venezolano *la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios*, y además lo obliga a adoptar las medidas legislativas y/o de otra naturaleza, para hacer efectivas las referidas indemnizaciones.

Asimismo, tengamos en especial consideración el artículo 31 constitucional que reconoce el derecho de toda persona a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos, todo ello de conformidad con los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República.

Como garantía del ejercicio de este derecho de acceso a las instancias internacionales para la protección de los derechos humanos, el citado artículo 31 constitucional dispone además la obligación del Estado de adoptar, conforme a procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales.

Esta obligación de dar cumplimiento a las decisiones de los órganos internacionales creados por tratados de derechos humanos, está reforzada por la jerarquía constitucional que tienen dichos tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, los cuales son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución⁸², que señala:

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía cons-

⁸² Carlos Ayala Corao, “Allan Brewer Carías vs. Venezuela: Los caminos para llegar a la justicia internacional”, en Allan R. Brewer-Carías y Carlos Ayala Corao (editores), *Justicia!! Al fin, justicia!! Condena al estado venezolano por violación de las garantías judiciales del debido proceso, el derecho a ser juzgado por jueces independientes, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a la presunción de inocencia de Allan R. Brewer-Carías*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela; Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2022, p. 56.

titucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.”

De otra parte, la responsabilidad internacional del Estado también se halla establecida en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, como uno de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, en los siguientes términos:

“Artículo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.”

En definitiva, el fundamento de la responsabilidad internacional de los Estados es la violación, por parte del Estado, de una obligación internacional, como consecuencia de la cual se debe una reparación al Estado o sujeto perjudicado por el acto ilícito. Al respecto el artículo 17 del Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas establece que *“1. Un hecho de un Estado que constituye una violación de una obligación internacional es un hecho internacional ilícito sea cual fuere el origen, consuetudinario, convencional u otro, de esa obligación; 2. El origen de la obligación internacional violada por un Estado no afectará a la responsabilidad internacional a que dé lugar el hecho internacional ilícito de ese Estado”*.

3. Violación de la responsabilidad internacional por parte de Venezuela

En los últimos veinte años Venezuela ha incumplido e inaplicado tratados internacionales válidamente suscritos y ha violado el derecho internacional de los derechos humanos.

3.1 Responsabilidad internacional de Venezuela por la violación de tratados internacionales

Veamos algunos ejemplos de responsabilidad internacional del Estado venezolano por el incumplimiento de tratados y convenios internacionales válidamente suscritos por la República.

3.1.1. Denuncia del Tratado de Creación de la Comunidad Andina de Naciones

En primer lugar, en relación a la responsabilidad internacional de Venezuela por la violación de tratados internacionales, podemos referirnos a la denuncia de la República de Venezuela del Acuerdo de Cartagena que creó la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que implicó no solo el desconocimiento de la obligación de respetar, acatar y aplicar con preferencia la normativa adoptada en el marco de los tratados de integración válidamente suscritos por Venezuela (artículo 153 de la Constitución), sino además la obligación del Estado de responder conforme a aquella ante los órganos supranacionales que velan por su cumplimiento, en este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En efecto, en fecha el 26 de abril de 2006, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela formalizó la denuncia del Acuerdo de Cartagena conforme al artículo 135 de dicho Tratado que dispone que:

“El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesaran para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia”.

Los efectos de la denuncia del Acuerdo de Cartagena fueron recogidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 25-AI-1999, el cual señaló al respecto que:

“En el marco del artículo transcrito, la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena, finalizando de pleno derecho para ese País Miembro, desde el momento de la pre-

sentación de la denuncia del Tratado, los derechos y obligaciones originados de su condición de País Miembro. Lo anterior significa que desde el momento de presentación de la denuncia del Tratado, cesaron los derechos y obligaciones que había adquirido, en el marco de la Integración Andina, con excepción de lo previsto en el artículo 135 transcrito, es decir, el derecho de importar y exportar libre de todo gravamen y restricción los productos originarios del territorio de cualquiera de los Países Miembros que hayan sido debidamente acordados en la ejecución de dicho Programa por espacio de cinco años (...)

Que conforme a lo anterior, es evidente que, igualmente, desde el momento de la denuncia del Tratado cesa la condición de País Justiciable por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que de conformidad con la normativa que regula la actividad de este Órgano, este no tiene competencia para resolver conflictos que se susciten entre los Países Miembros y un tercero, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 42 del Tratado de Creación del Tribunal.

A la República Bolivariana de Venezuela, a partir de la fecha en que denunció el Acuerdo Subregional Andino, ya no le alcanza la aplicación de los efectos de la sentencia dictada por el Tribunal ya que no habría mecanismos para imponer el acatamiento del fallo judicial.”⁸³

Ahora bien, como ya señalamos, la denuncia del Acuerdo de Cartagena viola el artículo 153 de la Constitución que dispone que:

“La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una Comunidad de Naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el

⁸³ Rafael García Muller, *Consecuencias jurídicas de la Denuncia del Acuerdo de Cartagena*, Universidad Metropolitana, Caracas, 2008. P. 28. Disponible en: <http://repositorios.unimet.edu.ve/docs/48/ATK230G3M8.pdf>

ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.”

En efecto, si bien se desprende claramente del mencionado artículo constitucional que todas aquellas normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración en el ámbito latinoamericano y caribeño (como es el caso del Acuerdo de Cartagena), se consideran como integrantes del ordenamiento jurídico venezolano, siendo de aplicación directa y preferente a la legislación interna; y no obstante el “reiterado reconocimiento de la obligación de cumplir con el derecho supranacional producido por las instituciones de la Comunidad Andina, conforme a lo establecido en la Protocolo modificadorio del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, actual Comunidad Andina”, con la denuncia del Acuerdo de Cartagena se produjo un gran quiebre de esta obligación y en consecuencia del deber de responder con fundamento en dicha normativa de integración andina⁸⁴.

3.1.2. Responsabilidad internacional del Estado venezolano por incumplimiento de las obligaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Venezuela fue el tercer Estado miembro de la Organización de Estados Americanos en ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en junio de 1977, y a partir de esta fecha se comprometió a cumplir con los deberes y obligaciones de los Estados partes de la CADH, entre ellas: i) la obligación de respetar y ii) garantizar los derechos humanos, y iii) el deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

⁸⁴ Víctor Hernández-Mendible, “La evolución jurisprudencial de la responsabilidad de la Administración Pública en Venezuela”, ob. cit. p. 85.

En primer lugar, las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos están dispuestas en el artículo 1.1 de la CADH que establece que:

“1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

Como lo dispuso la Corte IDH en su primera sentencia en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, el artículo 1.1. de la CADH es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la CADH puede ser atribuida a un Estado y a la vez señaló que del artículo 1.1 se desprendía la existencia de dos obligaciones generales en materia de derecho internacional de los derechos humanos: 1) la obligación de respetar, y 2) la obligación de garantizar los derechos⁸⁵.

La obligación de respeto de los derechos humanos por parte de los Estados consiste en cumplir directamente con la norma establecida, ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestación. Se reconoce así que el ejercicio de la función pública tiene límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Por su parte, Gros Espiell define esta obligación de respeto como “la obligación del Estado y de todos sus agentes, cualquiera que sea su carácter o condición, de no violar, directa ni indirectamente, por acciones u omisiones, los derechos y libertades reconocidos en la Convención”.⁸⁶

De otra parte sobre la obligación de respetar los derechos humanos, la Corte IDH ha dispuesto que:

“[...] la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parten de la

⁸⁵ Christian Steiner y Marie-Christine Fuchs (editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Segunda Edición. Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá, 2019. p. 47.

⁸⁶ Ibidem. p. 41.

afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal”⁸⁷

En definitiva, el contenido de la obligación de respeto de los derechos humanos estará definido a partir del derecho o libertad concreto y, entre las medidas que debe adoptar el Estado para respetar dicho mandato normativo se encuentran las acciones de cumplimiento, que pueden ser positivas o negativas y estarán determinadas por cada derecho o libertad. Esta obligación comprende todos los derechos, tanto civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, los cuales por su naturaleza llevan implícita una fuerte carga prestacional.

Por lo que se refiere a la obligación de garantía de los derechos humanos, esta consiste en el “deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”⁸⁸.

En efecto, esta obligación implica el deber del Estado de “impedir o hacer todo lo racionalmente posible para impedir que se violen los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción del

⁸⁷ Véase Corte IDH. Opinión Consultiva OC-6/86. La expresión “Leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1986, párr. 21. (énfasis agregado) Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. FRC. 2012, párr. 143. CIDH. Informe n.º 49/97, Tomás Porfirio Rondín “Aguas Blancas” vs. México, Caso 11.520, 18 de febrero de 1998. Cit. en Christian Steiner y Marie-Christine Fuchs (editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Ob. cit. p. 41.

⁸⁸ Véase Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. F. 1988, párr. 166. Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. F. 1999, párr. 139. Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. EPFR. 2012. Corte IDH. Caso Operación Génesis vs. Colombia. EPFRC. 2013, párr. 223. Corte IDH. Caso López Lone y otros vs. Honduras. EPFRC. 2015, párr. 282. Ibidem. Cit. en Christian Steiner y Marie-Christine Fuchs (editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Ob. cit. p. 43.

Estado por parte de cualquier persona, pública o privada, individual o colectiva, física o jurídica”⁸⁹.

La Corte IDH ha destacado que, como consecuencia de esta obligación, los “Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la CADH, procurando, además, el restablecimiento, de ser posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”. Asimismo, la Corte IDH ha señalado que la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos “no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, [implica también] la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”⁹⁰.

De acuerdo con esta obligación el Estado no puede limitarse a no incurrir en conductas violatorias de los derechos, sino que además debe emprender acciones positivas. Estas acciones consisten en todas aquellas que resulten necesarias para posibilitar que las personas sujetas a su jurisdicción puedan ejercer y gozar de sus derechos y libertades.

La Corte IDH ha determinado además que garantizar los derechos humanos implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos disfruten de los derechos que la CADH reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituiría un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1.1. de la CADH.

Por último, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno está consagrado en el artículo 2 de la CADH en los siguientes términos:

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o

⁸⁹ Héctor Gros Espiell, pp. 65-66, Cit. en Christian Steiner y Marie-Christine Fuchs (editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Ob. cit. p. 43.

⁹⁰ Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. F. 1988, párr. 167. Cit. en Christian Steiner y Marie-Christine Fuchs (editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Ob. cit. p. 43.

de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”

Este deber de garantía es uno de los de mayor importancia respecto de la armonización del derecho internacional de los derechos humanos con el derecho interno y se concreta en la obligación de los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno, sean legislativos o de otro carácter, en orden de otorgar efectividad a los derechos y las libertades establecidos en los tratados internacionales⁹¹.

En efecto, la transcendencia del artículo 2 de la CADH radica en que esta “norma conlleva la obligación de los Estados de acoplar su legislación interna a lo preceptuado en la CADH, de tal manera que haya perfecta armonía y congruencia entre las normas internas y las internacionales contenidas en dicha Convención”⁹².

De esta forma, la Corte IDH ha señalado que la referida norma “obliga a los Estados partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones en ellas plasmadas, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y las libertades protegidos por dicho pacto internacional.”. Así pues, los Estados además de la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, tienen también el deber de evitar promulgar leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos y, a la vez, evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen.⁹³

Ahora bien, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, junto con las ya referidas obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, son preceptos complementarios, “en la medida en que pueden, por sí mismos, generar responsabilidad internacional a los Estados partes de la CADH”. De forma que no constituyen normas programáticas como lo ha puesto de relevancia la jurisprudencia de la Cor-

⁹¹ Christian Steiner y Marie-Christine Fuchs (editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Ob. cit. p. 81.

⁹² *Ibidem*. p. 77.

⁹³ *Ibidem* p. 80.

te IDH, “al derivarse obligaciones específicas que se han establecido progresivamente, caso por caso, a lo largo de más de treinta años de actividad de dicho órgano jurisdiccional”⁹⁴.

En caso de comprobarse el incumplimiento de algún Estado parte de las señaladas obligaciones dispuestas en la CADH, la Corte IDH procederá a la determinación de la responsabilidad internacional y la consecuente orden de reparación.

Especialmente en caso de violación a los derechos humanos, el Estado deberá reparar a las víctimas de acuerdo con los estándares que al efecto se han establecido en el derecho internacional de los derechos humanos. Al respecto la Corte IDH ha determinado que el derecho a la reparación es un principio de derecho internacional, ya que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.

La Corte IDH “ha sostenido que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*); lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior, la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”⁹⁵.

Para articular esta obligación, la Corte IDH ha tomado como base lo dispuesto en el artículo 63.1 de la CADH, según el cual:

“1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”

⁹⁴ Ibidem. p. 76.

⁹⁵ Véase sentencia de la Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. F. 1988, párr. 26. Corte IDH. Caso Duque vs. Colombia. EPFRC. 2016, párr. 195. Cit. en Christian Steiner y Marie-Christine Fuchs (editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Ob. cit. p. 48.

La Corte IDH ha señalado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente; la disposición “recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado”⁹⁶.

La Corte IDH tiene entonces competencia para ordenar tres distintos tipos de reparaciones, a saber: 1) garantizar el goce de los derechos y libertades previsto en el corpus iuris interamericano; 2) reparar las consecuencias de las violaciones cometidas por agentes privados o estatales; y 3) ordenar el pago de una indemnización justa. En este orden, el criterio de la Corte IDH ha dado lugar a un abanico muy importante de reparaciones, que incluyen la restitución, la compensación (donde también aparecen las costas judiciales), la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición⁹⁷.

No escapa a nuestro análisis que en fecha 6 de septiembre de 2012, el Ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela, cumpliendo instrucciones de la presidencia de la República, dirigió una comunicación al Secretario General de la Organización de Estados Americanos denunciando la CADH, en violación de diversas disposiciones constitucionales, tales como los artículos: 2, sobre la preeminencia de los Derechos Humanos como valor superior del ordenamiento jurídico; 19 relativo al principio de progresividad de los derechos humanos; 23 sobre la jerarquía constitucional de la CADH; y 31 que establece el derecho de acceso y solicitud de protección y amparo de los Derechos Humanos ante los órganos internacionales⁹⁸.

⁹⁶ Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. F. 1999, párr. 62. Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. EPFRC. 2014, párr. 300. Cit. en Christian Steiner y Marie-Christine Fuchs (editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Ob. cit. p. 48.

⁹⁷ D. Cassel, “El alcance e impacto cada vez mayores de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Bogdandy, A. von et al. (coords.) *La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un ius constitutionale commune en América Latina?* UNAM, IJ, Max-Planck-Institut Für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, t. II, 2010, [disponible en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM], pp. 216-217. Cit. en Christian Steiner y Marie-Christine Fuchs (editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Ob. cit. p. 48.

⁹⁸ *Ibidem*.

En fecha 15 de mayo de 2019, la Asamblea Nacional en sesión ordinaria aprobó el reingreso de Venezuela a la CADH a través del “Acuerdo Para Restablecer la Vigencia de la CADH y la Protección Internacional que ofrecen la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. En el referido acuerdo se establece “dejar sin efecto la denuncia de la CADH presentada el 10 de septiembre de 2013, ante la Secretaría General de la OEA por el entonces Ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, y reafirmar el pleno derecho y la competencia de la Corte IDH sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esa CADH desde el 10 de septiembre de 2013 en adelante. De esta forma, de conformidad con dicho acuerdo, los seis años transcurridos desde la entrada en vigencia de la denuncia de la CADH, quedan sin efecto y se retoma la jurisdicción de la Corte IDH sobre Venezuela⁹⁹.”

En razón de todo lo anteriormente expuesto, nos referiremos a continuación a algunos ejemplos de responsabilidad internacional de Venezuela derivada del incumplimiento de las referidas obligaciones dispuestas en la CADH, que han sido determinadas por la Corte IDH.

3.1.2.1. Caso “Corte Primera de lo Contencioso Administrativo” vs. Venezuela. Corte IDH Sentencia de 5 de agosto de 2008¹⁰⁰

El 05 de agosto de 2008 la Corte IDH dictó sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela por la destitución de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, sin cumplir el debido proceso, en violación de la obligación de respetar los derechos, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en violación además de los derechos políticos, de igualdad ante la ley, del derecho a la protección

⁹⁹ Véase “Reingreso de Venezuela a la jurisdicción de Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Examen ONU Venezuela, 3 de junio de 2019. Disponible en: <https://www.examenonuvenezuela.com/democracia-estado-de-derecho/reingreso-de-venezuela-a-la-jurisdiccion-de-corte-interamericana-de-derechos-humanos>

¹⁰⁰ Véase sentencia de la Corte IDH de fecha 05 de agosto de 2008. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf

judicial y de las garantías judiciales, consagrados en los artículos 1, 2, 23, 24, 25 y 8, respectivamente, de la CADH.

El 12 de septiembre de 2000, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia designó a Ana María Ruggeri Cova, Evelyn Margarita Marrero Ortiz, Luisa Estela Morales, Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras para ocupar con carácter provisorio los cargos de Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

El 11 de junio de 2002 la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo emitió una sentencia resolviendo una solicitud de amparo cautelar y un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuestos contra un acto administrativo emitido por el Registrador Subalterno del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda. Este funcionario se negaba a protocolizar una propiedad y la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad, declaró procedente el amparo y admitió a trámite el recurso de nulidad.

El 8 de octubre de 2002 el mencionado Registro Subalterno solicitó el avocamiento de la Sala Político Administrativa (“SPA”) del Tribunal Supremo de Justicia para que conociera, entre otros, del expediente relacionado con el amparo cautelar declarado procedente por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Luego de que la SPA pasó a conocer del referido avocamiento, el 3 de junio de 2003 declaró la nulidad del fallo emitido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y estableció que al no haber declarado ésta la improcedencia de la pretensión cautelar incurrió en un “grave error jurídico de carácter inexcusable”, el cual ha sido conocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia como “aquél que no puede justificarse por criterios jurídicos razonables, lo cual le confiere el carácter de falta grave que amerita la máxima sanción disciplinaria, esto es, la destitución” (véase sentencia No. 465 de la SPA de 22 de marzo de 2001 citada por la propia Corte IDH en el fallo en cuestión).

Posteriormente, el 30 de octubre de 2003, los referidos magistrados fueron destituidos de sus cargos por orden de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial” (en adelante “la CFRSJ”), como órgano disciplinario judicial, debido a la presunta comisión de un error judicial inexcusable, al conceder un amparo cautelar

que suspendió los efectos de un acto administrativo que había negado el registro de una compraventa.

Tras la aplicación de la sanción disciplinaria de destitución, los magistrados de la Corte Primera interpusieron una serie de recursos a fin de cuestionar dicha medida de destitución, los cuales no resultaron exitosos¹⁰¹.

La Corte IDH decidió en primer lugar que el Estado era responsable internacionalmente por no haber garantizado el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser juzgados por un tribunal imparcial, lo que constituye una violación del artículo 8.1 de la CADH, en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la misma.

Según la Corte IDH, la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular “se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. (...)”. En el presente caso, si bien la Corte no determinó que no se comprobó que el Estado venezolano haya desconocido el derecho de las víctimas a ser juzgadas por un tribunal imparcial, sí quedó demostrado que su legislación y jurisprudencia les impidieron solicitar que la imparcialidad de su órgano juzgador fuese revisada.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por la Corte IDH, Venezuela resultaba responsable por no establecer en su legislación interna la posibilidad de recusación de los funcionarios competentes y que, a pesar de que sí contenía el deber de inhibición, este “no es suficiente

¹⁰¹ Según reseña la Corte IDH: “Los magistrados Apitz y Rocha interpusieron, en contra de la sanción de destitución, un recurso jerárquico ante la Sala Plena del TSJ alegando la incompetencia de la CFRSJ para destituirlos, recurso que fue desechado. También interpusieron un recurso contencioso administrativo de nulidad junto con amparo cautelar ante la SPA, alegando, inter alia, la violación del derecho a ser juzgado por su juez natural, del derecho a defensa y al debido proceso, de la presunción de inocencia, de la independencia de la función jurisdiccional, y arguyendo la existencia de una desviación de poder. El amparo fue desechado y, a la fecha, el recurso de nulidad no ha sido resuelto en el fondo.”.

para garantizar la imparcialidad del tribunal, puesto que no se ha demostrado que el justiciable tenga algún recurso para cuestionar al juez que debiendo inhibirse no lo hiciera”.

Téngase en cuenta que para este momento estaba vigente el Decreto sobre Régimen de Transición del Poder Público dictado por la Asamblea Nacional Constituyente luego de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999¹⁰², el cual establecía que los integrantes de la CFRSJ y el Inspector General de Tribunales “no estarán sujetos a recusación, pero deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.

Por estas razones la Corte IDH declaró que el Estado no garantizó el derecho de las víctimas a ser juzgadas por un tribunal imparcial, lo que constituye una violación del artículo 8.1 de la CADH en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la misma.

Así también, la Corte IDH determinó la responsabilidad de Venezuela por el incumplimiento del deber de motivación derivado de las debidas garantías del artículo 8.1 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Juan Carlos Aritz Barbera y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova.

En esta oportunidad la Corte IDH constató que la acusación de la Inspectoría General de Tribunales y la resolución de destitución de la CFRSJ tomaron como única prueba y como único componente de motivación los argumentos desarrollados por la SPA en su fallo, por lo que tan solo reiteraron la calificación efectuada por esta última, sin analizar, como era necesario, el error judicial inexcusable como ilícito disciplinario.

En efecto, ni la acusación de la Inspectoría General de Tribunales ni la decisión de la CFRSJ dieron razones la idoneidad de las presuntas víctimas para el ejercicio del cargo, ni tampoco sobre la gravedad de la falta supuestamente cometida por los miembros de la Corte Primera o sobre la proporcionalidad de la sanción propuesta y finalmente adoptada.

¹⁰² Publicado originalmente en Gaceta Oficial del 22 de diciembre de 1999 y reimpresso por error material en Gaceta Oficial N° 36.859 de fecha 29 de diciembre de 1999.

En razón de lo anterior, la Corte IDH estimó que la CFRSJ debía responder autónomamente, y no por remisión a la decisión de la SPA, al menos los principales alegatos de los magistrados Apitz, Rocha y Ruggeri, y al no haber ocurrido esto, “la situación real fue que el proceso disciplinario terminó siendo de mero trámite”.

De forma que la Corte consideró que el Estado incumplió con su deber de motivar la sanción de destitución, violando con ello las “debidas garantías” ordenadas en el artículo 8.1 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Apitz, Rocha y Ruggeri.

De otra parte, la Corte IDH estableció que el Estado violó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser juzgados por un tribunal independiente, conforme al artículo 8.1 de la CADH, en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la misma.

En efecto, la Corte IDH estableció que de conformidad con el derecho interno venezolano el Tribunal Supremo de Justicia tiene absoluta discreción para reorganizar la CFRSJ, sin que exista ningún procedimiento o mecanismo previamente establecido y respetuoso de las debidas garantías para nombrar o remover a los miembros de la CFRSJ. En este sentido, la Corte estableció que no podía quedar demostrado en este caso que la CFRSJ haya actuado en desviación de poder, directamente presionada por el Ejecutivo para destituir a las víctimas,

Sin embargo, la Corte IDH concluyó que debido a la libre remoción de los miembros de la CFRSJ, no existieron las debidas garantías para asegurar que las presiones que se realizaban sobre la Corte Primera no influenciaran las decisiones del órgano disciplinario y declaró que el Estado violó el derecho de los señores Apitz, Rocha y Ruggeri a ser juzgados por un tribunal con suficientes garantías de independencia,

La Corte IDH determinó una serie de órdenes dirigidas a lograr la reparación de las violaciones a los derechos humanos por parte Estado venezolano, entre las que se mencionan las siguientes:

- El Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones

y Costas por concepto de daño material, inmaterial y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la misma.

- El Estado debe reintegrar al Poder Judicial a los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y a la señora Ana María Ruggeri Cova, si éstos así lo desean, en un cargo que tenga las remuneraciones, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería el día hoy si no hubieran sido destituidos. Si por motivos fundados, ajenos a la voluntad de las víctimas, el Estado no pudiese reincorporarlas al Poder Judicial en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, deberá pagar a cada una de las víctimas la cantidad establecida en el párrafo 246 del fallo.
- El Estado debe realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 249 de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la misma.
- El Estado debe adoptar dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas las medidas necesarias para la aprobación del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolanos.
- Supervisará la ejecución íntegra de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, el Estado deberá rendir a la Corte IDH un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.

Luego de la decisión de la Corte IDH, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró “inejecutable” la sentencia de la Corte IDH, violando de esta forma su obligación de cumplir con la CADH, y además “sugirió” al Ejecutivo Nacional denunciar dicha

CADH con el fin de sustraerse de su ámbito de aplicación y cumplimiento, y de esta forma, evitar tener que cumplir sus futuras condenas¹⁰³.

**3.1.2.2. Caso López Mendoza vs. Venezuela.
Corte IDH sentencia de 1 de septiembre
de 2011¹⁰⁴**

El 1º de septiembre de 2011 la Corte IDH dictó sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela por la violación de los derechos por la inhabilitación del ciudadano Leopoldo López Mendoza para el ejercicio de la función pública a través de la vía administrativa y haber prohibido su participación en las elecciones regionales del año 2008, en violación de los derechos económicos y políticos; garantías judiciales y procesales; igualdad ante la ley; y la protección judicial de la víctima, consagrados en los artículos 1, 2, 8, 23, 24, y 25 de la CADH.

Los hechos del caso se refieren a la situación política de Leopoldo López Mendoza, quien el 4 de agosto de 2000 fue elegido como Alcalde del Municipio Chacao y reelegido el 31 de octubre de 2004, desempeñándose en dicho cargo por ocho años, hasta noviembre de 2008. Al finalizar su mandato como Alcalde aspiraba a presentarse como candidato para la Alcaldía del Estado Mayor de Caracas. Sin embargo, no pudo presentarse como candidato debido a dos sanciones de inhabilitación que le fueron impuestas por el Contralor General de la República en el marco de dos procesos administrativos. La primera investigación de la que fue objeto el señor López Mendoza se relacionaba con un presunto conflicto de intereses cuando, antes de ser alcalde, trabajaba en la empresa Petróleos de Venezuela S.A. La segunda investigación se circunscribió a hechos en el marco de sus actuaciones como Alcalde, específicamente con el presunto uso indebido del presupuesto.

De esta forma, el punto central del caso radica en las sanciones de inhabilitación impuestas al señor López Mendoza por decisión de

¹⁰³ Víctor Hernández-Mendible, “La evolución jurisprudencial de la responsabilidad de la Administración Pública en Venezuela”, ob. cit. p. 87.

¹⁰⁴ Véase sentencia de la Corte IDH del 1º de septiembre de 2011. Disponible en: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_233_esp.pdf

un órgano administrativo -el Contralor General de la República- que le impidieron registrar su candidatura para cargos de elección popular, en aplicación del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, según el cual:

*“La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. **Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un periodo no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes. En aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la máxima autoridad, la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su designación, remoción o destitución. Las máximas autoridades de los organismos y entidades previstas en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, antes de proceder a la designación de cualquier funcionario público, están obligados a consultar el registro de inhabilitados que a tal efecto creará y llevará la Contraloría General de la República. Toda designación realizada al margen de esta norma será nula.”** (resaltado añadido).*

La Corte IDH decidió, en primer lugar que Venezuela es responsable por la violación del derecho a ser elegido, establecido en los artículos 23.1.b y 23.2, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, establecida en el artículo 1.1 de la CADH, en perjuicio del señor López Mendoza.

Según la Corte IDH, el artículo 23.2 de la CADH¹⁰⁵ determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos políticos reconocidos en el artículo 23.1¹⁰⁶, así como los requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción, sin embargo, en el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción la Corte estableció que ninguno de dichos requisitos se ha cumplido. En efecto, en este caso solo se admitiría la restricción del derecho a ser elegido impuesta mediante una “condena, por juez competente, en proceso penal”.

Al respecto la Corte IDH estimó pertinente reiterar que “el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la CADH y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”; y que, en este caso, si bien el señor López Mendoza ha podido ejercer otros derechos políticos, está plenamente probado que se le ha privado del sufragio pasivo, es decir, del derecho a ser elegido.

Así también, la Corte IDH estableció que el Estado venezolano es responsable por la violación del deber de motivación y el derecho a la defensa en los procedimientos administrativos que derivaron en la imposición de las sanciones de inhabilitación, establecidos en el artículo 8.1, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, establecida en el artículo 1.1 de la CADH, en perjuicio del señor López Mendoza.

¹⁰⁵ Artículo 23. Derechos políticos. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

¹⁰⁶ Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
 - a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
 - b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
 - c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

De conformidad por lo dispuesto por la Corte IDH, de una lectura de las resoluciones administrativas de inhabilitación en contra del ciudadano Leopoldo López, no se encuentra un análisis concreto de relación entre la gravedad de los hechos y la afectación a la colectividad, a la ética pública y a la moral administrativa. En efecto, en las dos resoluciones de inhabilitación el Contralor General de la República se concentró en resaltar los hechos por los cuales el señor López Mendoza fue declarado responsable por el director de la Dirección de Determinación de Responsabilidades. Si bien la Corte IDH consideró que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, el Tribunal estima que el Contralor General debía responder y sustentar autónomamente sus decisiones, y no simplemente remitirse a las previas declaraciones de responsabilidad.

Asimismo, la Corte IDH determinó que los problemas en la motivación al imponer la sanción de inhabilitación tuvieron un impacto negativo en el ejercicio del derecho a la defensa. La falta de motivación impedía un reexamen a profundidad sobre la argumentación o evidencia directamente relacionada con la imposición de una restricción al sufragio pasivo que pueden -inclusive- ser notablemente más gravosas que la sanción principal.

De otra parte, según la decisión de la Corte IDH, Venezuela también resulta responsable internacionalmente por la violación del derecho a la protección judicial, establecido en el artículo 25.1, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a ser elegido.

La Corte IDH consideró que para que exista un recurso efectivo no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.

En este orden, la Corte IDH señaló que los recursos judiciales interpuestos por el señor López Mendoza no cumplieron con dar una respuesta efectiva e idónea para proteger su derecho a ser elegido y que pudiera salvaguardar las exigencias mínimas del deber de motivación en los procesos que derivaron en sanciones de inhabilitación, razón por la cual se vulneró el derecho a la protección judicial reconocido en el

artículo 25.1, en relación con los artículos 1.1, 8.1, 23.1.b y 23.2 de la CADH, en perjuicio del señor López Mendoza.

Por último, la Corte IDH estableció que el Estado venezolano es responsable por el incumplimiento de la obligación de adecuar su derecho interno a la CADH, establecida en el artículo 2, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a ser elegido, establecidos en los artículos 1.1, 8.1, 23.1.b y 23.2 de la misma.

En efecto, la Corte IDH consideró que en el marco de las debidas garantías establecidas en el artículo 8.1 de la CADH se debe salvaguardar la seguridad jurídica sobre el momento en el que se puede imponer una sanción, y tomando en cuenta que la norma interna no establecía un término o plazo fijo para que el Contralor ejerciera la facultad sancionadora, determinó que la falta de un plazo cierto, previsible y razonable puede dar lugar a un ejercicio arbitrario de la discrecionalidad a través de sanciones aplicadas en un momento totalmente inesperado para la persona que ya fue declarada responsable previamente, tal y como ocurrió en el presente caso en el que la Sala Político Administrativa intentó suplir esta laguna normativa con el término de prescripción de la acción administrativa que no cumple con el estándar de previsibilidad o certeza de la norma. En efecto, determinó la Sala que el plazo de cinco años no es razonable para garantizar la previsibilidad en la imposición de una sanción. Constituye un plazo excesivamente prolongado y, por lo tanto, es incompatible con la necesidad de que un procedimiento sancionatorio concluya al momento de determinarse la responsabilidad correspondiente, de tal forma que el imputado no espere por un plazo demasiado amplio a que se determine el tipo de sanción que debe recibir por una responsabilidad que ya ha sido determinada.

La Corte IDH estableció una serie de órdenes dirigidas a lograr la reparación de las violaciones a los derechos humanos por parte Estado venezolano, entre las que se mencionan las siguientes:

- El Estado, a través de los órganos competentes, y particularmente del Consejo Nacional Electoral (CNE), debe asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación del señor López Mendoza en el evento de que desee inscribirse como candidato en procesos electorales

a celebrarse con posterioridad a la emisión de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

- El Estado debe dejar sin efecto las Resoluciones Nos. 01-00-000206 de 24 de agosto de 2005 y 01-00-000235 de 26 de septiembre de 2005 emitidas por el Contralor General de la República.
- El Estado debe, en un plazo razonable, adecuar el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
- El Estado debe realizar el pago de la cantidad establecida en el párrafo 243 de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, por concepto de reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación del fallo.
- El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, rendir a la Corte IDH un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.

3.1.2.3. Caso Marcel Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela. Corte IDH. Sentencia de 22 de junio de 2015¹⁰⁷

El 22 de junio de 2015 la Corte IDH dictó una sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela por la violación de los derechos a la libertad de expresión, a la no discriminación y al debido proceso como consecuencia del cierre del canal de televisión “Radio Caracas Televisión” (“RCTV”) ocurrido el 27 de mayo de 2007, a raíz de la decisión del Estado de reservarse la porción del espectro eléctrico que anteriormente había sido asignado a RCTV y, por tanto, impedir la participación en los procedimientos administrativos a un medio de comunicación que expresaba voces críticas contra el gobierno.

Como punto previo al análisis de este caso, tengamos presente que la libertad de expresión no es una mera pretensión; tampoco es un de-

¹⁰⁷ Véase sentencia de la Corte IDH de fecha 22 de junio de 2015. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_293_esp.pdf

recho cualquiera, antes y por el contrario, se trata de un derecho “que ocupa un lugar central en todo el sistema de los derechos humanos, no solo en cuanto facilita la toma de conciencia respecto de los otros derechos y libertades, si no en cuanto es un instrumento vital para la preservación y consolidación de todos los otros derechos individuales”, en especial para la preservación de las libertades públicas. De forma que “el mayor o menor grado de respeto a la libertad de expresión también puede servir de termómetro para medir la vigencia de otros derechos humanos”. Como ha expresado el Dr. Héctor Faúndez “Se trata de un derecho que, por su carácter fundamental, tiene una jerarquía superior a los demás; porque, una vez que desaparece la libertad de expresión, se diluyen todas las otras libertades”¹⁰⁸.

RCTV operaba como una estación de televisión abierta con cobertura nacional en Venezuela desde el año 1953 en que le fue entregada una concesión. El Estado venezolano renovó la concesión a RCTV, con base en el Decreto 1.577 de 1987, para operar como estación de televisión abierta y utilizar el espectro radioeléctrico correspondiente por 20 años, es decir, hasta el 27 de mayo de 2007.

El 24 de enero de 2007, los representantes de RCTV solicitaron la emisión de nuevos títulos de concesión ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). El 24 de enero de 2007, el Ministro Jesse Chacón Escamillo, a cargo del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (MPPTI) y de CONATEL, mediante Comunicación N° 0424 del 28 de marzo de 2007, negó la renovación de la concesión a RCTV. Ese mismo día, el MPPTI emitió la Resolución N° 002 de 28 de marzo de 2007, mediante la cual extinguió el procedimiento administrativo correspondiente.

En sentencia del 25 de mayo de 2007 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia asignó a CONATEL el derecho de uso de los bienes propiedad de RCTV, con la finalidad de que la Fundación Televisora Venezolana Social (en adelante “TVes”) contara con la infraestructura necesaria para la transmisión a nivel nacional.

¹⁰⁸ Sobre el derecho a la libertad de expresión véase Héctor Faúndez Ledesma, *Los límites de la libertad de expresión*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004. p. 42.

Ante la decisión de no renovar la concesión a RCTV, manifestada en la Comunicación No. 0424 y en la Resolución N° 002 del MPPTI, la señal de dicha emisora fue interrumpida a la 00:00 hora del 28 de mayo de 2007. En sustitución, TVes pasó a transmitir su programación a través del canal 2 de la red de televisión abierta.

Cabe destacar que antes y después del cierre de RCTV, sus representantes interpusieron varios recursos judiciales en defensa de sus derechos e intereses, a saber: i) acción de amparo constitucional; ii) recurso contencioso administrativo de nulidad en conjunto un amparo cautelar y unas medidas cautelares innominadas; iii) oposición a las medidas cautelares dictadas por el TJS, y iv) denuncias penales; ninguno de los cuales resultó favorable para RCTV por lo que decidieron dirigir su petición ante la Corte IDH.

Ahora bien, en esta oportunidad, la Corte IDH declaró, en primer lugar, la violación al derecho a la libertad de expresión, por cuanto se configuró una restricción indirecta al ejercicio del mismo, en perjuicio de Marcel Granier, Peter Bottome, Jaime Nestares, Inés Bacalao, Eladio Lárez, Eduardo Sapene, Daniela Bergami, Miguel Ángel Rodríguez, Soraya Castellano, María Arriaga y Larissa Patiño.

De acuerdo al razonamiento de la Corte IDH, en este caso, la no renovación de la concesión a RCTV no produjo la restricción al derecho a la libertad de expresión, por cuanto el Estado no estaba obligado a ello; sin embargo puede determinarse una restricción indirecta del derecho referido, si se tiene en cuenta que los peticionarios solicitaron a CONATEL en primer lugar, el 5 junio de 2002, que su título de concesión de uso del espectro radioeléctrico otorgado en 1987 fuera transformado de acuerdo al nuevo régimen jurídico de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000¹⁰⁹; y más adelante, el 24 de enero de 2007,

¹⁰⁹ La Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece la transformación de las concesiones y los permisos otorgados de conformidad con la normativa anterior en habilitaciones administrativas, concesiones u obligaciones de notificación o registros establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En efecto, el artículo 210 de dicha Ley dispone que: “La Comisión Nacional de Telecomunicaciones establecerá, mediante resolución, cronogramas especiales de transformación de las actuales concesiones y permisos otorgados de conformidad con la legislación anterior, en las habilitaciones administrativas, concesiones u obligaciones de notificación o registros establecidos en esta Ley. Mientras ocurre la señalada adecuación, todos los derechos y obligaciones adquiridos al amparo de la anterior

solicitaron la emisión de nuevos títulos (renovación) de la concesión para utilizar el espectro radioeléctrico, y ninguno de estos procedimientos fue llevado a cabo por la administración competente por motivos distintos a los legalmente establecidos.

La Corte IDH concluyó que los hechos del caso implicaron una desviación de poder, ya que se hizo uso de una facultad permitida del Estado con el objetivo de alinear editorialmente al medio de comunicación con el gobierno. Dispuso la Corte que:

“La anterior afirmación se deriva a partir de las dos conclusiones principales a las cuales arribó el Tribunal a partir de lo descrito anteriormente, a saber, que la decisión se encontraba tomada con anterioridad y que se hallaba relacionada con las molestias generadas por la línea editorial de RCTV, sumado al contexto sobre el “deterioro a la protección a la libertad de expresión” que fue probado en el presente caso. Asimismo, la Corte manifestó que la desviación de poder declarada tuvo un impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo en los trabajadores y directivos de RCTV, sino además en la dimensión social de dicho derecho, es decir, en la ciudadanía que se vio privada de tener acceso a la línea editorial que RCTV representaba. En efecto, la finalidad real buscaba acallar voces críticas al gobierno, las cuales se constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger.”

legislación, permanecerán en pleno vigor, en los mismos términos y condiciones establecidas en las respectivas concesiones y permisos. La transformación de los títulos jurídicos deberá efectuarse dentro de los dos años siguientes a la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial, tendrá carácter obligatorio y se hará atendiendo a los principios siguientes: [...] 2. Los derechos de uso y explotación dados en concesión, sobre frecuencias legalmente otorgadas, se mantendrán en plena vigencia. [...] 4. Se respetará el objeto, la cobertura y el lapso de vigencia de las concesiones o permisos vigentes para el momento de la entrada en vigencia de la presente Ley. Las renovaciones posteriores de las habilitaciones administrativas o concesiones previstas en esta Ley se seguirán por las reglas generales contenidas en ella. [...] La transformación de los títulos actuales en modo alguno supone que los operadores de telecomunicaciones existentes antes de la entrada en vigencia de esta Ley, estén sometidos al procedimiento general establecido para el otorgamiento de las habilitaciones administrativas o a la extinción, revocatoria o suspensión de las concesiones o permisos otorgados bajo el amparo de la anterior legislación, por tal concepto”.

Así entonces, la Corte IDH determinó que se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión producida por la utilización de medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de las ideas y opiniones, al decidir el Estado que se reservaría la porción del espectro y, por tanto, impedir la participación en los procedimientos administrativos para la adjudicación de los títulos o la renovación de la concesión a un medio que expresaba voces críticas contra el gobierno, en violación del artículo 13.1 y 13.3 en relación con el artículo 1.1 de la CADH.

Asimismo, el Tribunal declaró la vulneración del derecho a la libertad de expresión en relación con el deber de no discriminación en perjuicio de las personas anteriormente señaladas.

En efecto, la Corte IDH resaltó que para la fecha de expiración de la concesión de RCTV, existían otras estaciones de televisión que compartían algunas características similares con RCTV y cuya concesión también vencía el 27 de mayo de 2007 y constató que todas las licencias de estos canales fueron renovadas, salvo la de RCTV, razón por la cual entró a analizar si la decisión de reservarse el uso del espectro asignado inicialmente a RCTV y no la de otro canal pudo haber generado un trato discriminatorio en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Al respecto la Corte IDH, tomando en cuenta que la línea editorial y la postura política transmitida en RCTV eran unos de los motivos principales detrás de las decisiones tomadas en la Comunicación N° 0424 o en la Resolución N° 002, y que no contó con elementos que le permitieran concluir que efectivamente existieran condiciones técnicas particulares de RCTV que no tuvieran otros canales de televisión y que hubieran sido la motivación de la diferencia de trato, concluyó que existían elementos para determinar que la decisión de reservarse la porción del espectro asignado a RCTV implicó un trato discriminatorio en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

De esta forma, la Corte IDH consideró que el Estado venezolano es responsable de la violación del derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 13 en relación con el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la CADH.

Por último, la Corte IDH encontró violados los derechos a un debido proceso, al plazo razonable y a ser oído en perjuicio de Marcel Granier, Peter Bottome, Jaime Nestares, Jean Nestares, Fernando Nestares, Alicia Phelps de Tovar, Francisco J. Nestares, Edgardo Mosca, Anani Hernández, Inés Bacalao, José Simón Escalona, Eladio Lárez, Odila Rubin, Oswaldo Quintana, Eduardo Sapene, Daniela Bergami, Isabel Valero, Miguel Ángel Rodríguez, Soraya Castellano, María Arriaga y Larissa Patiño.

Respecto a la violación del debido proceso administrativo la Corte IDH determinó que aunque en la ley interna (Ley de Telecomunicaciones) estaba dispuesto un debido proceso para la transformación de los títulos y para la renovación de la concesión, el mismo había sido deliberadamente omitido por el Estado venezolano. En efecto, de acuerdo con la Corte IDH, en el presente caso los apoderados de RCTV habían iniciado los procedimientos para la transformación de los títulos y para la renovación de las concesiones establecidos en la normativa venezolana, mediante la introducción de las solicitudes, pero constató que el Estado tomó la decisión de no aplicarlos, contraviniendo de esta forma las garantías previstas por el artículo 8 de la CADH, pues era necesario que los procedimientos administrativos continuaran para efectos de definir si se aceptaba o no la transformación o renovación de la concesión. Asimismo, la Corte IDH resaltó que de haberse seguido dichos procedimientos con apego a la normativa interna y respetando las salvaguardas mínimas que dichas normas establecen, se habría podido evitar la arbitrariedad en la decisión.

De otra parte, sobre el derecho a la defensa de las presuntas víctimas, la Corte IDH constató que los representantes de RCTV no pudieron intervenir de forma directa en el proceso judicial en el que se determinó la incautación de los bienes propiedad de RCTV, ya que únicamente se le notificó del proceso como posible interesado a través de edictos, sin que pudieran presentar argumento o pruebas dentro del mismo. Así pues, la Corte IDH determinó que el no poder intervenir en un proceso que claramente tenía impacto en los derechos patrimoniales de RCTV, constituye una clara vulneración al derecho de defensa.

Finalmente, la Corte IDH resaltó que en mayo de 2007 los representantes de RCTV interpusieron una oposición contra la medida cautelar emitida por la Sala Constitucional en el marco de la demanda por intereses colectivos y difusos, y que desde junio de 2007 no se ha realizado ninguna diligencia en el marco del proceso para resolver dicha oposición. Por ello, la Corte consideró que se ha vulnerado el plazo razonable en este proceso. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, la Corte declaró que Venezuela vulneró el derecho a ser oído y al plazo razonable contenidos en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la CADH.

En este caso, la Corte IDH determinó una serie de órdenes dirigidas a lograr la reparación de las violaciones a los derechos humanos por parte Estado venezolano, entre las que se mencionan las siguientes:

- i) restablecer la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al canal 2 de televisión y devolver los bienes objeto de las medidas cautelares;
- ii) que una vez se efectúe el restablecimiento de la concesión a RCTV, en un plazo razonable ordene la apertura de un proceso abierto, independiente y transparente para el otorgamiento de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al canal 2 de televisión, siguiendo para tal efecto el procedimiento establecido en la LOTELE o la norma interna vigente;
- iii) realizar las publicaciones dispuestas;
- iv) tomar las medidas necesarias a fin de garantizar que todos los futuros procesos de asignación y renovación de frecuencias de radio y televisión que se lleven a cabo, sean conducidos de manera abierta, independiente y transparente, y
- v) pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daño material e inmaterial, y reintegro de costas y gastos.

Ante esta situación, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 10 de septiembre de 2015, declaró inejecutable la sentencia de la Corte IDH, incumpliendo nuevamente el derecho internacional de los derechos humanos.

3.1.2.4. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Corte IDH sentencia del 26 de septiembre de 2018¹¹⁰

El 26 de septiembre de 2018 la Corte IDH dictó sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, de no discriminar, y de adoptar medidas de derecho interno, así como por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Linda Loaiza López Soto. Asimismo, declaró la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la integridad personal de su grupo familiar.

Es el caso de Linda Loaiza López Soto, quien fue privada de libertad a los 18 años por un individuo por casi cuatro meses -desde el 27 de marzo al 19 de julio de 2001- durante los cuales fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual, incluyendo ingesta forzada de alcohol, drogas y medicamentos, golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en la cara y el cuerpo, desnudez forzada, violaciones reiteradas, amenazas y humillaciones, privación de alimentos, entre otras. Luego de su rescate -que tuvo lugar en virtud de que ella logró gritar por auxilio, lo que llevó a que personal policial y del cuerpo de bomberos se apersonaran en el lugar y lograran ingresar escalando al apartamento en el que se encontraba privada de libertad- Linda Loaiza tuvo que pasar casi un año hospitalizada y someterse a 15 cirugías, debido a las múltiples lesiones que presentaba.

¹¹⁰ Véase sentencia de la Corte IDH del 26 de septiembre de 2018. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf

Estos hechos de los que fue víctima Linda Loaiza fueron investigados por Venezuela en sede penal: se llevaron a cabo dos juicios orales (el primero fue anulado), en el último de los cuales Luis Antonio Carrera Almoina fue condenado por los delitos de privación de la libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto por el delito de violación. De otra parte, los otros dos individuos que fueron acusados por otros hechos concomitantes (peculado y encubrimiento, entre otros) fueron absueltos de todos los delitos. En el año 2008 se declaró cumplida la pena y para el momento en que la Corte IDH dictó sentencia, se encontraba pendiente la revisión del proceso en lo atinente al delito de violación.

Ahora bien, la Corte IDH en esta oportunidad estableció que el derecho internacional de los derechos humanos impone una obligación de debida diligencia estricta en la prevención de la violencia contra la mujer. Esta obligación implica, por un lado, la adopción de medidas de carácter general, en el plano normativo e institucional; y por el otro, la debida diligencia en la respuesta estatal ante la noticia de una desaparición o secuestro de una mujer.

En el orden anterior, la Corte IDH advirtió que en el presente caso se verificó el incumplimiento de las referidas dos facetas de la obligación de prevención por parte del Estado y por ende se produjo la responsabilidad internacional de Venezuela.

En efecto, la Corte IDH determinó en cuanto al incumplimiento por parte del Estado venezolano de la adopción de medidas de carácter general, que el marco institucional y normativo para la prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer, al momento de los hechos en Venezuela, era deficitario:

“En primer lugar, la atención de casos de violencia contra la mujer se circunscribía a aquellos sucedidos en el ámbito familiar. Pero, aún en ese supuesto, los funcionarios públicos encargados de recibir las denuncias carecían de formación técnica para cumplir con la debida diligencia en la respuesta estatal ante la noticia de la desaparición de una mujer, teniendo en cuenta el riesgo que tal circunstancia conlleva para su vida e integridad, e incluso frente a la posibilidad de ser forzadas a ejercer la prostitución en condiciones de esclavitud. Además, la Corte advirtió que el Código Penal vigente era altamente discriminatorio contra la mujer, sobre

todo en lo que respecta a la tipificación de los delitos sexuales. Por ejemplo, establecía penas diferenciadas y más gravosas para el delito de adulterio en caso en que la mujer incurriera en tal conducta; atenuaba las penas cuando los delitos sexuales fueran cometidos contra una mujer que ejerza la prostitución, y se preveía la extinción de la pena en el evento en que el autor del delito de violación contrajera matrimonio con su víctima. Además, el bien jurídico protegido en los delitos sexuales no era la libertad sexual y la integridad de la mujer, sino lo relativo a la “moral y las buenas costumbres”. En otro orden, la tipificación de la tortura era insuficiente en tanto se circunscribía a personas en custodia.

De esta forma, la Corte IDH determinó que el Estado venezolano no había adecuado su legislación y práctica a los instrumentos internacionales ratificados.

De otra parte, en cuanto a la obligación de actuar con debida diligencia para cumplir con el deber de prevención en este caso en concreto, la Corte IDH concluyó que desde la denuncia del 26 de mayo de 2001 de Ana Secilia López por la desaparición de su hermana ante los cuerpos policiales el Estado tuvo conocimiento de un riesgo para la integridad, libertad, dignidad, autonomía y vida privada de Linda Loaiza López Soto.

La Corte IDH consideró que debido al conocimiento del riesgo por parte del Estado a partir de que Ana Secilia denunciara la situación de su hermana, se generó para Venezuela una obligación de actuar con la debida diligencia, en el entendido de que se trataba de la desaparición o el secuestro de una mujer, lo que podía conllevar a la comisión de actos de todo tipo de violencia y, en particular, de naturaleza sexual.

En este caso la Corte IDH consideró que la falla en el deber de debida diligencia fue manifiesta, dado que el Estado conocía la identidad del agresor y pudo tomar medidas concretas y direccionadas para desactivar el riesgo, dispuso que los agentes policiales debieron haber efectuado medidas investigativas tendientes a confirmar con los registros públicos los datos personales del denunciado, determinar su domicilio, corroborar la titularidad del abonado telefónico aportado al momento de la denuncia y el domicilio de facturación, así como obtener listados de llamadas entrantes y salientes, todo ello con el propósito de identifi-

car la residencia de la persona denunciada y proceder a realizar averiguaciones discretas sobre los hechos denunciados. Por el contrario, al tomar conocimiento de la situación y contar con los datos de identidad y número de teléfono del denunciado, los funcionarios policiales únicamente intentaron comunicarse telefónicamente con él. La Corte IDH indicó al respecto que no contó con información que indicara que más allá de esta medida (llamada telefónica), se hubieran emprendido otras acciones de investigación o búsqueda del paradero, o incluso que se le haya dado intervención a un órgano jurisdiccional.

De acuerdo a todo lo previamente expuesto, la Corte IDH estimó que si bien no era posible considerar al Estado como responsable directo de los actos sufridos por Linda Loaiza, si resultaba responsable por la reacción insuficiente y negligente de los funcionarios públicos que, al tomar conocimiento del riesgo, no adoptaron las medidas que razonablemente era de esperarse por lo que no cumplieron con la debida diligencia para prevenir e interrumpir el curso de causalidad de los acontecimientos, sino que además su accionar causó alerta en el agresor. La Corte IDH además determinó que ello, sumado a la posterior omisión total para prevenir adecuadamente las agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales sufridas por Linda Loaiza, pese a conocer la identidad de la persona denunciada, demostraba una actitud tolerante frente a situaciones que por sus características constituyen un riesgo de violencia contra la mujer.

Asimismo, la Corte IDH responsabilizó al Estado “en razón de su grosera omisión”, que posibilitó la esclavitud sexual y las torturas a la que fue sometida Linda Loaiza López Soto.

De igual forma, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, así como del deber de investigar actos de violencia contra la mujer, debido a las “omisiones y prácticas inadecuadas, así como por retardos injustificados, que condujeron a que se materializara un incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia en un plazo razonable”, así como los derechos a las garantías judiciales, protección judicial, integridad personal, vida privada e igualdad y no discriminación, en relación con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en razón de que Linda Loaiza López Soto “no contó con

un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues recibió un trato inadecuado a su condición de víctima de violencia contra la mujer”.

En efecto, la Corte IDH comprobó que existió un retardo injustificado y reiteradas dilaciones en la sustanciación del proceso. Además, advirtió diversas irregularidades en las diligencias iniciales de investigación, incluso, se interpusieron diversas denuncias como consecuencia de las irregularidades en la sustanciación del proceso judicial, concretamente, como consecuencia de las dilaciones debido a la inhibición de jueces, el retardo en la fijación de la audiencia de debate, y la suspensión injustificada de audiencias.

Por último, la Corte IDH determinó la responsabilidad del Estado venezolano por la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de Linda Loaiza López Soto afectada de forma significativa a raíz de la incertidumbre sostenida sobre su paradero durante casi cuatro meses y los hechos sucedidos con posterioridad a su rescate, así como a consecuencia del proceso judicial.

La Corte IDH determinó un total de 18 órdenes dirigidas a lograr la reparación de las violaciones a los derechos humanos por parte Estado venezolano, entre las que se mencionan las siguientes:

- i) dentro de un plazo razonable, continuar eficazmente la sustanciación del proceso penal en curso en el ámbito interno y, en su caso, sancionar a los responsables por los hechos de tortura y violencia sexual en perjuicio de Linda Loaiza López Soto;
- ii) dentro de un plazo razonable, llevar a cabo todas las investigaciones que sean necesarias a fin de identificar, juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables de los actos de hostigamiento, ataques y amenazas oportunamente denunciados por las víctimas y su abogado;
- iii) de forma inmediata, adoptar todas las medidas necesarias para que las víctimas y sus representantes legales cuenten con las debidas garantías de seguridad durante la sustanciación de las investigaciones y procesos judiciales ordenados anteriormente;
- iv) dentro de un plazo razonable, determinar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, las eventuales responsabilidades de los funcionarios que no investigaron desde un primer momento lo sucedido a Linda Loaiza López Soto,

como así también de aquellos responsables por las irregularidades y las dilaciones injustificadas durante la investigación y sustanciación de los procesos judiciales llevados a cabo en el ámbito interno y, en la medida que corresponda, aplicar las consecuencias que la ley pudiera prever;

- v) brindar gratuitamente, y de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, tratamiento médico y psicológico y/o psiquiátrico a Linda Loaiza López Soto y a sus familiares declarados beneficiarios en la sentencia.

3.1.3. Responsabilidad internacional de Venezuela por el incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Caso Brewer-Carías vs Venezuela. Comité de Derechos Humanos ONU. Dictamen de 14 de octubre de 2021)¹¹¹

De conformidad con el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en lo sucesivo “El Pacto”) cada uno de los Estados Partes del Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Asimismo dispone el Pacto en el artículo 2.2 que cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

De esta forma, como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la ONU (“El Comité”), los Estados parte del Pacto, entre

¹¹¹ Véase Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 3003/2017 (caso Brewer-Carías). Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/133/D/3003/2017&Lang=en

ellos Venezuela, tienen la obligación general de respetar los derechos del Pacto y de asegurar su aplicación a todos los individuos en su territorio y sometidos a su jurisdicción. En este sentido, “los Estados Partes están obligados a dar efecto a las obligaciones prescritas en el Pacto de buena fe”¹¹².

Vemos de esta forma como en el Pacto se reproducen las 3 obligaciones principales de los Estados partes ya comentados respecto de la CADH, que consisten en respetar y garantizar los derechos reconocidos en el pacto, así como de adoptar disposiciones de derecho interno, obligaciones estas que de ser incumplidas por el Estado parte puede producir la responsabilidad internacional del mismo.

El caso de la violación de los derechos humanos del profesor Allan Brewer-Carías, inicialmente declarado sin lugar por la Corte IDH en el año 2014, fue recientemente reconocido por el Comité, cuando se declaró la responsabilidad del Estado venezolano por la violación de los derechos y obligaciones dispuestos en el artículo 14 del Pacto, del que Venezuela es parte.

El caso del abogado, profesor y académico Brewer-Carías se originó con la infundada imputación formulada en su contra, mediante escrito de fecha 27 de enero de 2005, por la entonces Fiscal provisoria Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, Luisa Ortega Díaz, quien atribuyó al profesor Allan R. Brewer-Carías “la comisión del delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución previsto y sancionado en el artículo 143, numeral 2 del Código Penal Vigente (artículo 144, numeral 2 para la fecha de la comisión de los hechos)”, por haber supuestamente participado “en la discusión, elaboración, redacción y presentación” del decreto constitutivo del llamado gobierno de transición que anunció el ciudadano Pedro Carmona Estanga el 12 de abril de 2002, tras la anunciada renuncia del Presidente Chávez a la Presidencia de la República en la misma fecha; hecho que el profesor Brewer-Carías negó.

¹¹² Cfr. Comité de Derechos Humanos de la ONU. Observación General n.º 31, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, La indole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, 80º periodo de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 2004, párr. 3. Cit. en Christian Steiner y Marie-Christine Fuchs (editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Ob. cit. P. 42

Según el profesor Brewer-Carías, la solicitud de su actuación por parte de Pedro Carmona fue para requerir su opinión jurídica como abogado especialista en derecho público y reconocido constitucionalista, sobre un texto ya redactado, siendo la consulta y su rechazo evidencia de que él no redactó el documento.

En los meses siguientes, durante el proceso penal, todos los fiscales y jueces implicados en su caso fueron nombrados con carácter provisorio o temporal, y varios fueron suspendidos tras sus decisiones a favor del profesor Brewer-Carías¹¹³:

“(…), en el marco del proceso por los hechos investigados, la jueza provisorio temporal del Juzgado de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas (“Juzgado 25 de Control”), Josefina Gómez Sosa, decretó la prohibición de salida del país de varios ciudadanos investigados por su presunta participación en los hechos de abril de 2002. La Corte de Apelaciones revocó la decisión por considerar que no había sido motivada. El 3 de febrero de 2005, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia suspendió en sus cargos a los dos jueces que votaron por la nulidad de la decisión apelada, así como a la jueza provisorio Gómez Sosa, autora de la decisión presuntamente inmotivada. El autor explica que la jueza Gómez Sosa fue sustituida por el juez temporal Manuel Bognanno. En dos oportunidades, el juez Bognanno ordenó a la Fiscal provisorio Sexta que expidiera a los defensores del autor copia de las actuaciones del expediente que habían solicitado, y que le remitiera el expediente, respectivamente. Ante la oposición de la Fiscal, el juez ofició al Fiscal Superior para ponerle en conocimiento de la irregularidad en la que la Fiscal estaba incurriendo. Dos días después, el juez Bognanno fue suspendido de su cargo.”

En el año 2006, luego de su salida legal al exterior para dictar clases en la Universidad de Columbia en USA, fue dictada una orden de detención en contra del profesor Brewer-Carías, lo cual le impidió regresar a Venezuela para no verse expuesto a los daños irreparables

¹¹³ Véase Academia de Ciencias Políticas y Sociales, “Comunicado ante el dictamen de la ONU caso Brewer-Carías”, Caracas, 17 de diciembre de 2021. Disponible en: <https://www.acienpol.org.ve/wp-content/uploads/2021/12/Comunicado-ACIENPOL-dictamen-de-la-ONU-caso-de-Brewer-Carias.pdf>

que conllevaría una detención arbitraria. Ciertamente, desde el 29 de septiembre de 2005, el profesor Brewer-Carías ha permanecido fuera del país como exiliado para resguardar su libertad y su integridad física y moral.

En virtud de los referidos atropellos, el 24 de enero de 2007 el profesor Brewer-Carías presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme a la CADH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal y como lo reseña el Dr. Carlos Ayala Corao, declaró admisible el caso “Allan Brewer Carías vs Venezuela” mediante la aprobación del *Informe de admisibilidad* No. 97/09 de 8 de septiembre de 2009 y posteriormente, el 3 de noviembre de 2011 la misma Comisión aprobó el *Informe de Fondo* No. 171/112, en el cual concluyó que el Estado venezolano era responsable de la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la CADH, en relación con sus artículos 1.1 y 2, en perjuicio del profesor Allan R. Brewer Carías; y seguidamente le formuló al Estado las recomendaciones reparatorias correspondientes¹¹⁴.

Seguidamente, el 7 de marzo de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso a la Corte IDH, fundamentado en “la necesidad de obtención de justicia para la víctima, debido a la naturaleza y gravedad de las violaciones comprobadas, y ante el incumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado”¹¹⁵.

En fecha 26 de mayo de 2014 la Corte IDH dictó sentencia por medio de la cual declaró “[a]coger la excepción preliminar interpuesta por el Estado relativa a la falta de agotamiento de recursos internos”; y por tanto, sin siquiera pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado decidió archivar el expediente.

Tras la negativa de la Corte IDH, en fecha 21 de diciembre de 2016 el caso del profesor Brewer-Carías fue llevado ante el Comité¹¹⁶.

Finalmente, el 14 de octubre de 2021 el Comité decidió el caso “Allan Brewer-Carías vs Venezuela”, estableciendo que el Estado ve-

¹¹⁴ Carlos Ayala Corao, “Allan Brewer Carías vs. Venezuela: Los caminos para llegar a la justicia internacional”, ob. cit. pp. 16 y ss.

¹¹⁵ Ibidem.

¹¹⁶ Ibidem.

nezolano violó sus derechos humanos a ser juzgado por un tribunal independiente, a la presunción de inocencia y a disponer de un recurso efectivo para la protección de sus derechos y garantías, consagrados en el artículo 14 del Pacto, del que Venezuela es parte.

En primer lugar, respecto de la violación del derecho a ser juzgado por un tribunal independiente, el Comité determinó que “con base en la información que tiene ante sí, los jueces y los fiscales que intervinieron en el proceso penal del autor no gozaban de las necesarias garantías de independencia necesarias para garantizar el derecho del autor a un tribunal independiente”, que se encuentra establecido en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

En efecto, tomando en cuenta el argumento del profesor Brewer-Carías, según el cual todos los jueces y fiscales que han intervenido en su proceso penal son funcionarios temporales o provisorios, nombrados y sustituidos discrecionalmente por razones políticas, el Comité recordó que “el procedimiento para el nombramiento de los jueces y las garantías en relación con su seguridad en el cargo son requisitos para la independencia judicial, y toda situación en que el Poder Ejecutivo pueda controlar o dirigir al Judicial es incompatible con el Pacto, garantía que abarca, indubitadamente, a los jueces de control en las etapas preliminares del proceso”.

A juicio del Comité, el profesor Brewer-Carías demostró que en el marco del proceso penal del cual el autor formaba parte, al menos un juez de control (el Juez Bognanno) y dos jueces de apelaciones fueron efectivamente removidos sin causa inmediatamente tras tomar decisiones que podrían considerarse velaban por las garantías de los coimputados, y, en ausencia de información del Estado parte que refute las alegaciones del autor o que demuestre la existencia las garantías procesales de independencia de los funcionarios relacionados con el proceso, el Comité consideró que los jueces y los fiscales que intervinieron en el proceso penal del autor no gozaban de las necesarias garantías de independencia necesarias para garantizar el derecho del autor a un tribunal independiente de conformidad con el artículo 14, párrafo 1, del Pacto, y en violación de dicha disposición.

El Comité determinó que el nombramiento provisorio de miembros del Poder Judicial no puede eximir a un Estado parte de asegurar

las debidas garantías para la seguridad en el cargo de los miembros así designados. En efecto, el Comité exaltó la necesidad de que los miembros del Poder Judicial deben ser independientes y dar apariencia de independencia, así como la exigencia de que los nombramientos provisorios deben ser excepcionales y limitados en el tiempo. Garantía esta que debe extenderse a fiscales en tanto que operadores judiciales, pues es una condición elemental para el debido cumplimiento de sus funciones procesales.

En segundo lugar, sobre la violación del derecho a la presunción de inocencia, el profesor Allan Brewer-Carías había denunciado que diversas autoridades públicas construyeron una presunción de culpabilidad en su contra mediante declaraciones públicas que lo señalaban culpable del delito de conspiración por el cual se encontraba procesado, en violación del artículo 14, párrafo 2 del Pacto.

Entre dichas declaraciones públicas se encuentran las declaraciones del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien identificó en televisión al profesor Brewer-Carías como redactor del “Decreto Carmona” y como parte del golpe de Estado del año 2002. Así también, la declaración del Fiscal General de la República, quien en septiembre del año 2005 (un mes antes de la solicitud de acusación formal de la Fiscal provisorio en contra del profesor Brewer-Carías el 21 de octubre) publicó un libro en el cual daba por cierto que el profesor Brewer-Carías había redactado el “Decreto Carmona”. Por último, la entonces Embajadora de Venezuela en Costa Rica había asegurado que el profesor Brewer-Carías “participó como autor material e intelectual e instruyó para su corrección en la redacción del decreto (^)”, y que “conocía y conoce todos los delitos que estaba cometiendo y por eso huyó del país”.

Al respecto el Comité se pronunció señalando que “[t]odas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado”. En efecto, el Comité consideró que no es necesario que las autoridades estén directamente vinculadas al proceso en cuestión para configurar una violación al derecho de presunción de inocencia, así como tampoco lo es que sus comentarios sean presentados como elementos para la imputación del procesado.

En razón de lo expuesto “y no existiendo en el momento de verterse las referidas declaraciones de autoridades públicas sentencia alguna que determinara la responsabilidad penal del autor”, el Comité consideró que se vulneró el principio de presunción de inocencia del profesor Brewer-Carías, recogido en el artículo 14, párrafo 2 del Pacto.

Por último, respecto de la violación del derecho a disponer de un recurso efectivo para la protección de sus derechos y garantías, el profesor Brewer-Carías alegó que había ejercido en dos ocasiones el único recurso idóneo en el estado y causa del proceso penal en el que estaba inmerso, para la defensa de sus derechos, que era el recurso de nulidad o amparo penal, pero nunca recibió respuesta, dejándolo en estado de indefensión.

En efecto, tal y como comprobó el Comité, el profesor Brewer-Carías “estuvo altamente involucrado en el proceso penal en su contra (incluyendo su asistencia personal a tomar notas de su expediente); ejerció una debida diligencia durante la fase preliminar de la investigación, interponiendo diversos recursos que cuestionaban la prueba existente en su contra y ofrecían prueba a su favor; salió legalmente del territorio del Estado parte; interpuso un recurso de nulidad previo a la solicitud de acusación formal de la Fiscalía; e interpuso un segundo recurso de nulidad previo a la acusación formal del Juez que contenía el establecimiento de la prisión preventiva”.

Ahora bien, a pesar de haber ejercido los recursos idóneos para la defensa de sus derechos, el Comité consideró que existe un “temor fundado a estar sometido a un proceso penal arbitrario, violatorio de sus derechos y garantías, y al severo agravamiento de dichas violaciones, en caso de someterse a la prisión preventiva en su contra, todas cuestiones que fueron debida y reiteradamente presentadas a las autoridades judiciales encargadas de velar por su derecho al debido proceso”.

Ciertamente, el Comité observa que en las circunstancias del profesor Brewer-Carías, “un recurso que haga efectivo el derecho a un debido proceso no puede subordinarse a la sujeción a un proceso indebido”, es decir que independientemente de lo que determine el derecho interno, el Estado Parte -Venezuela- no puede invocar el cumplimiento de ese proceso (indebido) como justificación del incumplimiento de sus obligaciones establecidas al Pacto, entre ellos la garantía del debido proceso.

En las circunstancias del caso, el Comité consideró inaceptable que las autoridades venezolanas subordinaran el derecho a un debido proceso precisamente a la sujeción a un proceso arbitrario en el que se violaron todas las garantías judiciales.

Por todas las razones antes expuestas el Comité encontró que el profesor Brewer-Carías ha sufrido una violación a su derecho a un recurso efectivo respecto a su derecho a un debido proceso, en particular, a acceder a un tribunal independiente, recogido en el artículo 2, párrafo 3, leído conjuntamente con el artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

Ahora bien, en virtud de las violaciones de los derechos humanos antes referidos, el Comité dispuso que el Estado venezolano está obligado a llevar a cabo la reparación integral al profesor Brewer-Carías, adoptando, *inter alia*, las siguientes medidas:

- a) declarar la nulidad del proceso contra el autor, dejando sin efecto la orden de detención preventiva contra este;
- b) en caso de que se inicie un nuevo proceso contra el autor, asegurar que este cumpla con todas las garantías del debido proceso previstas en el artículo 14 del Pacto y con acceso a recursos efectivos de conformidad con el artículo 2, párrafo 3; y
- c) conceder al autor una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

3.1.4. Responsabilidad internacional del Estado venezolano determinada por el CIADI

Desde el año 1999, el Observatorio de Gasto Público del Centro de Difusión del Conocimiento Económico (CEDICE Libertad), en su informe sobre la deuda externa venezolana por demandas arbitrales¹¹⁷, ha contabilizado más de 5.500 expropiaciones directas y confiscaciones realizadas por el Estado venezolano, algunas de las cuales han incumplido obligaciones o deberes contenidos en tratados bilaterales o

¹¹⁷ Véase Ramón Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk, Mariana Campos Villalba, “Informe sobre la deuda externa venezolana por demandas arbitrales”, Observatorio de Gasto Público del Centro de Difusión del Conocimiento Económico, marzo de 2021. Disponible en: <https://cedice.org.ve/observatoriogp/portfolio-items/deuda-externa-venezolana-por-demandas-arbitrales/>

multilaterales, por lo que se consideran hechos generadores de generar responsabilidad internacional del Estado venezolano.

En razón de lo anterior, algunos inversionistas extranjeros protegidos por tratados de protección de inversiones vigentes entre Venezuela y otros países, en respuesta a estas expropiaciones, confiscaciones y violaciones a la propiedad privada, han ejercido acciones legales de carácter internacional, ante instancias internacionales -comúnmente tribunales arbitrales-, con el objeto de lograr la determinación de la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de compromisos internacionales y su consecuente indemnización.

Entre esos tribunales arbitrales destaca el CIADI, que es el centro perteneciente al Banco Mundial que se encarga de administrar procesos arbitrales entre Estados e inversionistas, gestionando la designación de árbitros que son los que en última instancia deciden las demandas planteadas por inversionistas extranjeros.

Venezuela ratificó el Convenio por medio del cual se creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el año 1999; sin embargo, trece años más tarde, en el 2012, lo denunció pues a juicio del presidente Chávez violaba la soberanía nacional y porque los arbitrajes administrados bajo ese Convenio eran parcializados a favor de los inversionistas. Sin embargo, como señala José Ignacio Hernández “La verdadera razón era intentar eludir las demandas de inversionistas afectados por las arbitrarias medidas de expropiación”¹¹⁸.

Venezuela ha figurado como parte demandada en cincuenta y siete procedimientos arbitrales, de los cuales cuarenta y siete se han tramitado ante el CIADI y diez ante otros centros de arbitraje, de acuerdo con el informe de CEDICE. De todos estos procedimientos, hasta ahora veintitrés han condenado a Venezuela a pagar sumas de dinero o mediante un acuerdo de pago entre las partes¹¹⁹.

En la actualidad el capital condenado a pagar por Venezuela a los acreedores arbitrales asciende a la cantidad de 21.299.562.949,05 dó-

¹¹⁸ José Ignacio Hernández “¿Cuánto debe Venezuela en arbitrajes CIADI?”, en *La Gran Aldea*, 04 de abril de 2022. Disponible en: <https://www.lagranaldea.com/2022/04/04/cuanto-debe-venezuela-en-arbitrajes-ciadi/>

¹¹⁹ Ramón Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk, Mariana Campos Villalba, “Informe sobre la deuda externa venezolana por demandas arbitrales”, ob. cit. P. 30

lares estadounidenses (incluyendo los costos asociados a los procedimientos arbitrales), “lo que representa alrededor del 14% de la deuda externa venezolana”. Sin contar, claro está, las eventuales condenas que podrían ser determinadas por los tribunales arbitrales que aún están tramitando demandas contra Venezuela y PDVSA¹²⁰. Por su parte, José Ignacio Hernández calcula que la deuda acumulada en laudos firmes del CIADI es de cerca de 16 mil millones de dólares¹²¹.

Veamos como ejemplo algunos casos de responsabilidad internacional del Estado venezolano determinados por el CIADI.

3.1.4.1. Vestey Group Ltd.

Uno de esos casos de particular gravedad es el de las catorce haciendas propiedad de Vestey Group Limited (“Vestey”), empresa con sede en el Reino Unido que operó en el negocio de ganadería en Venezuela desde 1909, a través de su filial Agroflora, la cual fue expropiada de hecho en el año 2005, mediante el uso de la Fuerza Armada Nacional.

Este caso llegó a instancia del CIADI en el año 2012 cuando el grupo Vestey demandó a Venezuela, alegando que el gobierno de Venezuela había expropiado a Agroflora sin procedimiento legal y sin compensación alguna. El 16 de abril de 2016 el CIADI dictó laudo a favor de Vestey, y condenó a Venezuela a pagar US\$ 98.145.325, que el tribunal consideró que era el valor justo de mercado de los bienes de Agroflora en el momento de la expropiación. Pese a los esfuerzos de Venezuela por anular el laudo del CIADI, el mismo quedó firme y fue solicitada su ejecución por la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos. En el año 2020 la representación de la Procuraduría General de la República de Venezuela llegó a un acuerdo con la empresa Vestey según el cual el Estado de Venezuela tendrá que hacer los pagos correspondientes a partir de fines del mes de julio de 2022¹²².

¹²⁰ Ibidem. Pp. 30-31.

¹²¹ José Ignacio Hernández “¿Cuánto debe Venezuela en arbitrajes CIADI?”, ob. cit.

¹²² Véase “Comunicado de la Procuraduría Especial de la República sobre negociación judicial con la empresa Vestey”, del 27 de enero de 2021. Disponible en: <https://presidenciave.com/internacional/comunicado-de-la-procuraduria-especial-de-la-republica-sobre-negociacion-judicial-con-la-empresa-vestey/>

3.1.4.2 Venezuela Holdings BV y otros (Exxon Mobil)

En fecha 09 de octubre de 2014, el CIADI condenó a Venezuela a pagar a Exxon Mobil (empresa holandesa), a través de sus subsidiarias, cerca de 1.412 millones de dólares en concepto de indemnización por la expropiación de sus inversiones en el Proyecto Cerro Negro en 2007, y más de 179 millones de dólares por la expropiación del Proyecto La Ceiba.

Posteriormente, el 09 de marzo de 2017, el comité ad hoc a cargo del procedimiento de anulación instado por Venezuela sobre el arbitraje dio la razón a la República Bolivariana lo que evitó que el país afrontara el pago antes referido. Sin embargo, en octubre de 2018, Exxon Mobil reabrió de nuevo el procedimiento a través de un “*resubmission proceeding*” o procedimiento de reenvío pendiente y en formación de un nuevo tribunal arbitral¹²³.

3.1.4.3. Hamaca B.V. y Conoco-Phillips Gulf of Paria B.V.

Otro caso importante a considerar es el de la empresa holandesa Conoco Phillips, que en abril de 2018 presentó una demanda ante un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París en contra de PDVSA, por la expropiación en el año 2007 de los activos de la empresa ConocoPhillips en dos campos petroleros ubicados en el territorio venezolano (Hamaca y Petrozuata). El tribunal arbitral consideró que PDVSA violó los contratos internacionales por la “expropiación ilegal y no compensada” de las inversiones de Conoco

¹²³ “Resubmission proceeding” según la documentación de CIADI: “Si un laudo se anula en forma total o parcial, cada parte tiene derecho a solicitar que se someta la diferencia a un Tribunal recientemente constituido en aras de obtener un laudo nuevo respecto de la cuestión. Cualquiera de las partes podrá iniciar este proceso mediante la presentación de una solicitud de nueva sumisión de la diferencia, que identifique el laudo original y explique en detalle qué aspectos de la diferencia han de someterse al nuevo Tribunal (Regla 55(1) de las Reglas de Arbitraje)”. Véase: “Consecuencias Del Arbitraje Exxon Mobil-Venezuela Vivo Desde 2007”, en CIAR Global, 21 de marzo de 2019. Disponible en: <https://ciarglobal.com/consecuencias-del-arbitraje-exxon-mobil-venezuela-vivo-desde-2007/#:~:text=En%20el%20laudo%20emitido%20en,expropiaci%C3%B3n%20del%20Proyecto%20La%20Ceiba>

Phillips en los proyectos de crudo pesado y condenó al Estado venezolano (propietario del 100% de las acciones de PDVSA), al pago de 2.000 millones de dólares,

Un año después, en el 2019, el 8 de marzo de 2019, el tribunal arbitral del CIADI otorgó más de 8.7 mil millones dólares estadounidenses más intereses a Conoco Phillips por la expropiación ilícita, por parte de Venezuela, de tres inversiones en el sector petrolero realizadas por filiales holandesas de la empresa estadounidense Conoco Phillips, los proyectos Hamaca, Petrozuata y Corocoro que involucraban la extracción, refinamiento parcial y comercialización de crudo extra pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco¹²⁴.

Seguidamente, el 11 de marzo de 2019 la representación de Conoco Phillips interpuso ante las cortes del Distrito de Columbia solicitud para el reconocimiento y ejecución del laudo del CIADI. En la actualidad está pendiente un procedimiento de rectificación ante el CIADI¹²⁵.

3.1.4.4. Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A.

El 18 de noviembre de 2014 el CIADI dictó laudo arbitral mediante el cual condenó a la República de Venezuela a pagar 9.714.130.50 dólares estadounidenses por concepto de compensación por la expropiación de concesiones otorgadas a las empresas extranjeras Flughafen Zürich A.G. (Suiza) y Gestión e Ingeniería IDC S.A. (Chile), para la administración y operación del Aeropuerto de la Isla de Margarita, más conceptos accesorios. En la actualidad está pendiente un procedimiento de anulación del laudo¹²⁶.

3.1.4.5. Crystallex International Corporation

En el año 2016, el CIADI condenó al Estado venezolano por 1,200.00 millones de dólares, a favor de la empresa canadiense Crysta-

¹²⁴ Véase “Tribunal del CIADI otorga a Conoco Phillips USD 8,7 mil millones más intereses en controversia con Venezuela”, Investment Treaty News, 23 de abril de 2019. Disponible en: <https://www.iisd.org/itn/es/2019/04/23/icsid-tribunal-awards-conocophillips-usd-8-7-billion-plus-interest-dispute-venezuela-gregg-coughlin/>

¹²⁵ Ramón Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk, Mariana Campos Villalba, “Informe sobre la deuda externa venezolana por demandas arbitrales”, ob. cit. p. 8.

¹²⁶ Ibidem. p. 8.

llex, en compensación por la expropiación de hecho de “Las Cristinas”, una mina de oro al sureste del país, llevada a cabo en el año 2008. En fecha 7 de abril de 2016 Crystallex solicitó la confirmación del referido laudo por ante la Corte Distrital de Columbia, la cual fue acordada mediante opinión del 25 de marzo de 2017. El 28 de octubre de 2016 interpuso una solicitud para solicitar el bloqueo de la venta de acciones de CITGO. Posteriormente, a finales de 2017, las partes llegaron a un acuerdo para terminar el litigio¹²⁷.

El 9 de agosto de 2018, la Corte Distrital de Delaware estableció que PDVSA es un “alter ego” de la República, por lo que se podían ejecutar los activos de CITGO para satisfacer las deudas a favor Crystallex. En efecto, de acuerdo con el criterio de la Corte de Delaware, entre PDVSA y la República de Venezuela no existía una clara separación corporativa, es decir, que a los efectos judiciales se debía considerar que eran lo mismo (el mismo Estado), de forma que podía hacer responder a Venezuela con los bienes de PDVSA y sus filiales, por la violación de los convenios de protección de inversiones cometida por las decisiones conducidas por el Ministro de Energía, Minas y Petróleo¹²⁸.

El 1º de marzo de 2019 Arnold & Porter, escritorio que representa al gobierno interino de Venezuela (presidente encargado Juan Guaidó), solicitó participar en el procedimiento y que se paralizase el mismo por ciento veinte (120) días. El 12 de diciembre de 2019 la Corte Distrital de Delaware emitió orden de congelación de los activos de CITGO. El 19 de febrero de 2020 la República consignó escrito de *certiorari* ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, el cual fue negado el 02 de junio de 2020.

En septiembre de 2021 el Departamento de Estado de los Estados Unidos negó solicitud de Crystallex para acceder a las acciones embargadas de Citgo y cobrar el laudo, al determinar que la venta de los activos de Citgo no es compatible con la política exterior estadounidense

¹²⁷ Ibidem. pp. 8 y 9.

¹²⁸ Allan Brewer-Carías, “La transformación de Petróleos de Venezuela S.A.: de la constitución exitosa de una empresa del estado a su total destrucción institucional posterior”, *Libro Homenaje a Jesús Caballero Ortiz*, Tomo I, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, FUNEDA, Caracas, 2022. p. 399.

que reconoce al presidente (E) Juan Guaidó la reestructuración de la deuda venezolana¹²⁹.

3.1.4.6. Longreef Investment A.V.V.

El 6 de noviembre de 2017 el CIADI condenó al Estado venezolano por la cantidad de 43.000.000,00 dólares estadounidenses a favor de la empresa holandesa Longreef Investment A.V.V. por la Nacionalización de Fama de América, C.A. En la actualidad se encuentra pendiente una solicitud de anulación del laudo arbitral de condena¹³⁰.

3.1.4.7. Koch Minerals y Koch Nitrogen International Sárl (Fertinitro)

En fecha 30 de octubre de 2017 el CIADI emitió el laudo arbitral, a través del cual condenó a la República de Venezuela a pagar 140.250.000 de dólares estadounidenses, más intereses y costos del arbitraje, a favor de las empresas suizas Koch Minerals y Koch Nitrogen International Sárl (Fertinitro), por la expropiación de su inversión en negocios de fertilizantes. Este laudo pasó por un procedimiento de rectificación, que fue decidido el 11 de abril de 2018 y en la actualidad está pendiente un procedimiento de nulidad, que fue suspendido el 18 de abril de 2019 por falta de pago de los anticipos relativos al procedimiento¹³¹.

3.1.4.8. OI European Group B.V.

El CIADI emitió el laudo de fecha 10 de marzo de 2015 mediante el cual condenó al Estado venezolano por la expropiación de una inversión en plantas productoras y distribuidoras de contenedores de vidrio que había realizado la empresa holandesa OI European Group B.V. De acuerdo con el informe de CEDICE, el 11 de febrero de 2019,

¹²⁹ Véase “Crystallex Deberá Esperar A 2022 Para Continuar Lucha De Laudo Contra Venezuela”, en CIAR Global, 27 de septiembre de 2021g. Disponible en: <https://ciarglobal.com/crystallex-debera-esperar-a-2022-para-continuar-lucha-de-laudo-contra-venezuela/>

¹³⁰ Ramón Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk, Mariana Campos Villalba, “Informe sobre la deuda externa venezolana por demandas arbitrales”, ob. cit. p. 9.

¹³¹ Ramón Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk, Mariana Campos Villalba, “Informe sobre la deuda externa venezolana por demandas arbitrales”, ob. cit. p. 9.

OI solicitó la confirmación del laudo final ante las cortes del Distrito de Columbia y en fecha 21 de mayo del mismo año, la corte confirmó el laudo y determinó que OI European Group tenía derecho a:

- (i) 372.461.982,00 de dólares estadounidenses más intereses sobre esta cantidad desde el 26 de octubre de 2010, hasta la fecha del laudo, a la tasa LIBOR para depósito de un año en dólares estadounidenses, más un margen de 4%, con composición anual de intereses devengados;
- (ii) los costos y gastos del arbitraje: 5.750.000,00 de dólares estadounidenses más intereses sobre esta cantidad desde el 10 de marzo de hasta la fecha del fallo, calculados a Tasa de interés LIBOR para depósitos a un año en dólares estadounidenses, más un margen del 4%, con composición anual de intereses devengados;
- (iii) los costos y gastos de la anulación: 3.864.811,05 de dólares estadounidenses, más intereses sobre este importe desde el 6 de diciembre de 2018 hasta la fecha de la sentencia, calculada a una tasa de interés LIBOR para depósitos a un año en dólares estadounidenses, más un margen del %, con una composición anual de los intereses devengados; y
- (iv) intereses posterior al juicio sobre el monto total de la adjudicación, calculado a la Tasa establecida en el 28 *United States Code* 1961, desde la fecha del fallo hasta su pago completo”¹³².

3.1.4.9. Tenaris S.A. y Talta

Véase como ejemplo de expropiación indirecta que derivó en la responsabilidad internacional del Estado venezolano el caso de Matesi, una empresa productora de hierro briquetado en caliente, que fue constituida en Venezuela por Tenaris (una empresa de Luxemburgo), Talta (una filial portuguesa de Tenaris) y SIDOR, y que a partir del año 2009 fue anunciada su nacionalización por el presidente Hugo Chávez y luego en el año 2010 fue declarada de utilidad pública e interés social mediante Decreto N.º 8.280 del 14 de junio de 2011, conforme al

¹³² Ramón Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk, Mariana Campos Villalba, “Informe sobre la deuda externa venezolana por demandas arbitrales”, ob. cit. pp. 9 y 10.

cual se emitió una orden de adquisición forzosa de: “todos los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías, presuntamente propiedad o en posesión de Matesi”.

Los efectos de estas medidas despojaron a Matesi de todos sus bienes y activos productivos. Sin embargo, no ocurrió ni la transferencia de los pasivos ni de las acciones de Matesi al Estado, dejando a los accionistas de Matesi una sociedad vacía con pasivos, sin la capacidad de generar ingresos.

Esta situación ocasionó que tanto Tenaris como Talta demandaran a Venezuela ante el CIADI por lo que consideraron una “expropiación indirecta” de sus inversiones. El CIADI determinó mediante laudo del 29 de enero de 2016 que Venezuela había incumplido sus obligaciones estipuladas en los artículos 4(1)(b) y 4(1)(d) del Tratado con Luxemburgo y los Artículos 4(a) y 4(c) del Tratado con Portugal (firmados con ocasión de la constitución de Matesi en Venezuela), los cuales estaban referidos a la obligación de no adoptar ninguna medida de expropiación o nacionalización, ni cualquiera otra cuyo efecto sea desposeer directa o indirectamente a los inversores de la Parte Contratante de las inversiones que les pertenezcan en su territorio, salvo que cumplieran determinadas condiciones. Venezuela fue condenada al pago de la suma de 87.300.000,00 dólares de los Estados Unidos de América a las partes demandantes¹³³.

3.1.4.10. Rusoro Mining Limited

En fecha 22 de agosto de 2016 el CIADI condenó a la República de Venezuela por la cantidad de 971.079.502,00 de dólares estadounidenses a la empresa canadiense Rusoro Mining Limited, por concepto de indemnización, costos y gastos, más intereses desde el 16 de septiembre de 2011 hasta la fecha de pago, derivada de la expropiación de inversión en negocios de exploración y explotación de oro. El 29 de enero de 2019 la Corte de Apelaciones de París anuló parcialmente el

¹³³ Véase laudo del CIADI en el procedimiento de arbitraje entre TENARIS S.A. Y TALTA-TRADING E MARKETING SOCIEDADE UNIPessoal LDA y REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Caso N.º ARB/11/26. Disponible en: http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C1820/DC7492_Sp.pdf

laudo dictado por el Tribunal CIADI. La anulación abarcó los daños y perjuicios condenados por el laudo arbitral¹³⁴.

3.1.4.11. Saint-Gobain Performance Plastics Europe (Francia)

En fecha 3 de noviembre de 2017 el CIADI condenó a Venezuela al pago de US\$ 29,6 millones a la empresa francesa Saint-Gobain Performance Plastics Europe, por compensación por la expropiación de las inversiones en una Empresa de Producción de Apuntalante (Material Utilizado en el Área Petrolera), más conceptos accesorios. Actualmente está pendiente de decisión un procedimiento de nulidad¹³⁵.

3.1.4.12 Valores Mundiales SL y Consorcio Andino SL

El 25 de julio de 2017 el CIADI dictó laudo arbitral condenando a la República al pago de 430.4 millones de dólares estadounidenses, más conceptos accesorios, a favor de las empresas españolas Valores Mundiales SL y Consorcio Andino SL, con motivo de la expropiación de la inversión en la Empresa de Producción de Harina de Maíz y Tortillas “Monaca” y “Demaseca”. En la actualidad, se encuentra pendiente un procedimiento de anulación del laudo¹³⁶.

3.1.4.13. Tidewater Investment SRL y Tidewater Caribe, C.A.

En fecha 13 de marzo 2015, el CIADI condenó a Venezuela por el monto de 48.000.000 de dólares estadounidenses más intereses y reembolso de costo, a favor de las empresas extranjeras Tidewater Investment SRL y Tidewater Caribe, C.A., con motivo de la expropiación de la inversión en servicios de soporte marino para la industria petrolera en el Lago de Maracaibo y en el Golfo de Paria, prestado por SEMARCA. En fecha 27 de diciembre de 2017, se emitió decisión que anuló parcial-

¹³⁴ Ramón Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk, Mariana Campos Villalba, “Informe sobre la deuda externa venezolana por demandas arbitrales”, ob. cit. p. 11.

¹³⁵ Ibidem. p. 11.

¹³⁶ Ibidem. p. 12.

mente la referida decisión y redujo el monto de la condena a 38.000.000 de dólares estadounidenses¹³⁷.

3.1.4.14. Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos

Recientemente, el 23 de marzo de 2022, el CIADI dictó un laudo que obliga a la República de Venezuela a pagar 1.629 millones de dólares estadounidenses como indemnización por la expropiación de los activos de la red de comercialización de insumos agropecuarios Agroisleña junto con otras compañías, propiedades del conglomerado español “Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos”. De acuerdo con la decisión del CIADI, “la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en las sociedades venezolanas Agroisleña C.A., Insecticidas Internacionales C.A., Proyefa C.A. y Venezolana de Riego C.A., constituyó una violación del Acuerdo entre el Reino de España y Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”¹³⁸.

3.2. Responsabilidad internacional de Venezuela por la violación de derechos humanos

Los derechos humanos son considerados un conjunto de valores éticos de carácter universal, inherentes al ser humano, cuya función es proteger a todos los individuos de la actuación de los poderes mediante la limitación de los mismos y el derecho internacional de los derechos humanos constituye una normativa fundamental de la que derivan obligaciones que deben ser cumplidas por los Estados. Los instrumentos internacionales que lo componen están inspirados en valores superiores comunes que demandan la protección del ser humano, característica que los diferencia de los demás instrumentos de derecho internacional.¹³⁹

¹³⁷ Ibidem. pp. 12 y 13.

¹³⁸ Véase “CIADI condenó a Venezuela a pagar US\$1.629 millones más intereses y costos por expropiación de Agroisleña”, en Banca y Negocios, 24 de marzo de 2022. Disponible en: <https://www.bancaynegocios.com/ciadi-condeno-a-venezuela-a-pagar-us629-millones-mas-intereses-y-costos-por-expropiacion-de-agroisleña/>

¹³⁹ Felipe Medina Ardila. *La responsabilidad Internacional del Estado por actos particulares: análisis jurisprudencial interamericano*. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, p. 7.

De los derechos humanos derivan obligaciones *erga omnes* para los Estados; es decir, son un conjunto de normas imperativas y universales que, recogidas por la Carta de las Naciones Unidas, afirmadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos y aceptadas por la mayoría de los Estados, son de cumplimiento obligatorio para todos los miembros de la comunidad internacional. *“Hay que considerar que si bien los derechos humanos pueden ser considerados como parte de las obligaciones erga omnes de los Estados, no son todas ellas normas pertenecientes al ius cogens, lo cual implica la exclusión de posibilidad de pactar contra ellas, válidamente, en contrario”*¹⁴⁰. La internacionalización de los derechos humanos se dio, precisamente, con la mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los organismos especializados en derechos humanos de las Naciones Unidas son, junto con los procedimientos que administran, los encargados de recordar, a los sujetos internacionales que los derechos humanos son normas de obligatorio cumplimiento. Con ello se garantizará que los derechos humanos están por encima del Estado sin considerar violentado el principio de no intervención cuando se habiliten los mecanismos organizados por la comunidad internacional para su protección¹⁴¹.

De esta forma, no obstante las consecuencias de hecho que derivan de la denuncia de la CADH, *“desde la perspectiva internacional, el Estado sigue obligado a respetar y cumplir los derechos humanos y los mecanismos de protección y reparación contenidos en los pactos, protocolos y convenciones sobre derechos humanos que integran el sistema universal”*, y que han sido válidamente suscritos y ratificados por el Estado venezolano como Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU)¹⁴².

Sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, tengamos en cuenta los informes del 15 y 25 de septiembre de 2020 de la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, designada por el Consejo de Derechos

¹⁴⁰ Joel Díaz Cáceda, “La Responsabilidad Internacional de los Estados: base para la defensa de los Derechos Humanos”, Ob. Cit., p.261.

¹⁴¹ *Ídem*.

¹⁴² Víctor Hernández Mendible, Ob. cit.

Humanos de la Organización de Naciones Unidas para investigar una serie de violaciones a los derechos humanos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se han cometido desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.

En el informe se detalla la existencia de represión política selectiva durante el período que se examina, en el que se practicaron detenciones arbitrarias para agredir a personas por su afiliación, participación, puntos de vista, opiniones o formas de expresión de carácter político. La Misión Independiente determinó que los servicios de inteligencia del Estado han desempeñado un papel esencial en las pautas de las vulneraciones cometidas. Los organismos de inteligencia identificaron objetivos, llevaron a cabo detenciones, reclusiones e interrogatorios, y torturaron o trataron de forma inhumana a detenidos.

Asimismo, el informe dio cuenta, en el marco de las vulneraciones de los derechos humanos que la misión tenía el mandato de investigar, de las ejecuciones extrajudiciales producidas durante las operaciones de seguridad -policiales y/o militares- llevadas a cabo por el Estado. Se trataba de operaciones destinadas a combatir la delincuencia, que dieron lugar a un elevado número de ejecuciones extrajudiciales de personas supuestamente consideradas delincuentes.

De igual forma la Misión Independiente se pronunció sobre las manifestaciones públicas que derivaron repetidamente en detenciones arbitrarias de manifestantes, vulnerando sus derechos a la libertad, la seguridad, e incluso a la vida.

Como expresó el informe, la misión tuvo motivos razonables para creer que en los casos investigados no se respetaron las normas internacionales y nacionales sobre el uso de la fuerza, lo que causó privación arbitraria de la vida. Se observó que las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal contra la víctima cuando no era estrictamente necesario para proteger vidas. Asimismo, utilizaron también armas menos letales de manera letal, lo que provocó la muerte de manifestantes.

Por último, informó la Misión Independiente que los detenidos sufrieron malos tratos y torturas durante la detención y el traslado al centro de reclusión, así como durante la privación de libertad.

En efecto, la misión constató que los actos de tortura o los malos tratos infligidos a los detenidos y reclusos en relación con las protestas incluían palizas, descargas eléctricas, la obligación de permanecer en posiciones forzadas, la exposición a gas lacrimógeno en espacios cerrados, violencia sexual y de género, y/o tortura y malos tratos psicológicos, todo ello en violación de las normas internacionales sobre derechos humanos.

En su informe la Misión Independiente comprobó que las vulneraciones documentadas en el informe se produjeron en el marco de un proceso gradual de desintegración de las instituciones democráticas y de colapso del Estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela acaecido desde 2014. El debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos, judiciales e institucionales dio lugar a una creciente impunidad, que exacerbó las vulneraciones.

Ahora bien, tal y como lo refiere el Informe, en su capítulo V sobre las Responsabilidades, el Estado venezolano es responsable por las violaciones a los derechos humanos comprobadas, y en este sentido:

152. Las vulneraciones de los derechos humanos y los delitos investigados por la misión y descritos en el informe dan lugar tanto a responsabilidad del Estado como a responsabilidad penal individual en virtud del derecho penal interno o del internacional, o bien de ambos.

153. El Estado, como principal titular de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, es responsable de todos los actos que le son atribuibles y que constituyen una violación de las obligaciones internacionales. Además de la obligación del Estado de impedir las vulneraciones de los derechos humanos y de garantizar recursos accesibles y eficaces a las personas cuando aquellas se produzcan, el hecho de que no investigue y lleve ante la justicia a los autores de esas violaciones da lugar por sí mismo a otro incumplimiento distinto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Tengamos en cuenta al respecto que la Resolución 60/147 de 2005 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, señaló que “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas

de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”¹⁴³.

En la actualidad, y especialmente desde la pandemia del COVID-19, se ha agravado la crisis sanitaria, económica, política y social en Venezuela, lo que ha derivado en el aumento de las violaciones a los derechos humanos, tales como, los derechos a la salud, a la integridad personal, a la vida, a la libertad de expresión, al trabajo y a un salario digno, así como los derechos políticos.

Por la violación de todos esos derechos, el Estado venezolano es responsable, tal y como lo dispone el artículo 30 de la Constitución que señala que *“El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios”*.

4. Responsabilidad internacional penal

4.1. Concepto

La responsabilidad internacional penal es una categoría jurídica y, para algunos autores, la razón de ser del derecho internacional penal, el cual es definido como una especialidad del derecho internacional que tiene como objeto la *“represión del daño antijurídico causado a valores protegidos por el derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos y cuyo reconocimiento del individuo se limita a la atribución de la responsabilidad internacional penal, en su calidad de titular de obligaciones y no como titular de derechos.”*¹⁴⁴.

¹⁴³ Véase la Resolución 60/147 de 2005, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, párr. 18.

¹⁴⁴ Frédéric Sudre, *Droit européen et international des droits de l’homme*, 8a. ed., París, Presses Universitaires de France, 2009, pp. 30-33. Cit. en Rosmerlin Estupiñan Silva, “Principios

El derecho penal internacional y la consecuente responsabilidad internacional penal se ocupa de la represión de atentados contra valores fundamentales de la humanidad que amenazan la paz y la seguridad colectiva, estos son, crímenes internacionales¹⁴⁵. En este orden de ideas, es preciso hacer una distinción entre la responsabilidad estatal internacional y la responsabilidad internacional. La primera, como hemos señalado constituye una obligación que tienen los Estados con respecto a otro de responder, a través de una reparación, por la violación de una norma, principio o valor de derecho internacional, esto es, la comisión de un ilícito internacional. La segunda, en cambio, consiste en la obligación de los individuos de responder, a través de una pena y resarcimiento de los daños causados por la comisión de crímenes internacionales que hayan cometido. Así pues, la responsabilidad internacional recae sobre los Estados mientras que la responsabilidad penal internacional en los individuos¹⁴⁶.

En efecto, la existencia de una responsabilidad penal internacional supone el reconocimiento de los individuos como sujetos de derecho en el ámbito internacional, junto con los Estados y las organizaciones internacionales, capaces de violar el derecho internacional, y de, consecuentemente, ser responsables por dichas trasgresiones¹⁴⁷.

La responsabilidad penal internacional, así entendida, fue incorporada al derecho internacional -principalmente- a través de la jurisprudencia del Tribunal de Núremberg, y, después de la Segunda Guerra Mundial, fue reconocida por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en la elaboración de los denominados “Principios de Núremberg”, luego incorporada a los estatutos de los tribunales ad hoc y de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma)¹⁴⁸.

que rigen la responsabilidad internacional penal por crímenes internacionales”, en *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. 12, Ciudad de México ene. 2012. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542012000100005#nota

¹⁴⁵ Rosmerlin Estupiñan Silva, ob. cit.

¹⁴⁶ Javier Dondé Matute, “Responsabilidad penal internacional: los nuevos escenarios dogmáticos”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, Volumen XVIII, enero-diciembre 2018. Disponible en: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/12107/16039>

¹⁴⁷ Ibidem.

¹⁴⁸ Rosmerlin Estupiñan Silva, ob. cit.

En la actualidad, la responsabilidad penal internacional por crímenes de guerra se encuentra regulada en los siguientes tratados internacionales¹⁴⁹:

- I. El Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, del 12 de agosto de 1949;
- II. El Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, del 12 de agosto de 1949;
- III. El Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949;
- IV. El Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra, del 12 de agosto de 1949;
- V. El Protocolo Adicional I a dichos Convenios, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, del 8 de junio de 1977;
- VI. El Protocolo Adicional II a esos Convenios relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, del 8 de junio de 1977;
- VII. El Estatuto de Roma, del 17 de julio de 1998, que estableció la Corte Penal Internacional, la cual tiene “competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” y con ese fin está facultada para ejercer sobre las personas jurisdicción complementaria de las jurisdicciones penales nacionales y, por último,
- VIII. La Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, de 1954, y sus Protocolos de 1954 y de 1999.

Téngase en cuenta que aun en los casos en que un Estado no se encuentre vinculado a las obligaciones convencionales del Estatuto de

¹⁴⁹ Véase CJI/doc.328/09 rev. 1. LOS CRÍMENES DE GUERRA EN EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, presentado por el doctor Jorge Palacios Treviño. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/informes_culminados_recientemente_Corte_Penal_Internacional_CJI-doc_328-09_rev1.pdf

Roma (como es el caso de Sudán y Libia) sigue vinculado por las obligaciones internacionales derivadas del tratado constitutivo, este es, la Carta de Naciones Unidas y por los principios generales de derecho internacional aplicables en caso de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional de los conflictos armados.

En efecto, véase al respecto el artículo 13-b del Estatuto de Roma según el cual el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede remitir “*al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes*”, como una demostración adicional de la autoridad superior del derecho internacional penal frente a los crímenes internacionales más graves de competencia de la Corte Penal Internacional¹⁵⁰.

4.2. Carácter subjetivo e individual de la responsabilidad internacional penal

La responsabilidad internacional penal se encarga de castigar los crímenes internacionales cometidos por individuos. Ciertamente, ha sido reconocido como principio del derecho internacional penal que la responsabilidad internacional penal parte de actos -crímenes- cometidos por hombres, no por entidades abstractas, y que solo castigando a los individuos que cometieron dichos crímenes puede asegurarse el derecho internacional.

Aunque la idea de la responsabilidad penal individual por violaciones del derecho internacional es antigua, fueron los procesos contra los principales criminales de guerra, tras la I y II Guerra Mundial, los que hicieron de dicha idea una realidad incuestionable e inobjetable¹⁵¹. Luego de la Primera Guerra Mundial la “Comisión sobre la responsabilidad de los autores de la guerra y la aplicación de sanciones” estableció los primeros criterios de responsabilidad internacional penal de los individuos basándose en los principios de derecho penal de la subjetividad y la individualización de la pena. Más tarde, los principios de

¹⁵⁰ Rosmerlin Estupiñan Silva, ob. cit.

¹⁵¹ Edoardo Greppi, “La evolución de la responsabilidad penal individual bajo el derecho internacional”, *Revista Internacional de la Cruz Roja*, 30-09-1999. Consultado en: <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdnnf.htm>

responsabilidad internacional penal fueron desarrollados ampliamente por el Estatuto de Roma y la jurisprudencia del Tribunal de Núremberg y fueron retomados en 1950 por la Comisión de Derecho Internacional tras la creación del sistema de las Naciones Unidas¹⁵².

Véase de esta forma el artículo 25, apartados 1 y 2, del Estatuto de Roma que consagró la responsabilidad internacional penal de los individuos (personas naturales) por los crímenes bajo competencia de la Corte Penal Internacional en los siguientes términos:

- 1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales.*
- 2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.*

En el actual del derecho internacional penal, la responsabilidad internacional penal es individual y personal. Esa responsabilidad internacional penal del individuo puede ser reclamada ante una jurisdicción internacional penal, con independencia de que la conducta alegada se encuentre sancionada o no en la legislación interna del Estado concernido. “*Ésta es una consecuencia de la supremacía del derecho internacional penal sobre el derecho penal de los Estados y es una constatación de que los individuos tienen responsabilidades que trascienden sus obligaciones nacionales*”¹⁵³.

4.3. Responsabilidad internacional del Estado por la comisión de crímenes internacionales

En lo que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas (personas morales), entre ellas, los Estados, la tesis fue discutida y descartada durante los trabajos preparatorios del Estatuto de Roma. Tengamos presente que ni siquiera la atribución de la responsabilidad internacional penal a los individuos pertenecientes a órganos del Estado es asimilable a una responsabilidad internacional “penal” de los Estados.

¹⁵² Ibidem.

¹⁵³ Rosmerlin Estupiñan Silva, ob. cit.

Sin embargo, a pesar de que los Estados no son responsables penalmente por la comisión de crímenes internacionales, sí pueden ser responsables internacionalmente por el incumplimiento de obligaciones internacionales relativas a la investigación, persecución, prevención o represión de los crímenes internacionales.

La existencia de crímenes internacionales supone un compromiso estatal que no se limita a la obligación negativa de abstención en la perpetración de los crímenes. Los Estados tienen una obligación positiva de protección de la población civil y de persecución y sanción de los responsables de los crímenes internacionales, cuyo instrumento más acabado es el Estatuto de Roma¹⁵⁴.

Las violaciones graves de las normas humanitarias no sólo acarrear la responsabilidad internacional de las personas que hayan participado en su comisión, sino que, al mismo tiempo, constituyen hechos ilícitos que atentan contra valores esenciales de la comunidad internacional, de allí que sean susceptibles de generar la responsabilidad del Estado si este no actúa para perseguirlos o reprimirlos¹⁵⁵.

Ahora bien, el reconocimiento de la competencia universal de persecución de los crímenes de guerra se encuentra en los Convenios de Ginebra de 1949 (párrafo segundo de los artículos 49, 50, 129 y 146 comunes), e implica que todos los Estados asumen el compromiso de investigar las infracciones graves y, en su caso, de enjuiciar a los presuntos responsables de tales crímenes, sobre todo, cuando los acusados de estos hechos delictivos se hallen en el territorio del Estado (*jurisdicción universal territorial obligatoria*)¹⁵⁶.

De otra parte, la comisión de crímenes genera la obligación internacional del Estado de adoptar las medidas tendientes a reprimir las violaciones graves del derecho internacional humanitario.

¹⁵⁴ Ibidem.

¹⁵⁵ De esta forma, la necesidad de prevenir los crímenes internacionales justifica que un alto miembro de un órgano del Estado pueda ser tenido por responsable penal a título individual y que, al mismo tiempo, el Estado al que pertenece pueda quedar sometido a un régimen especial de responsabilidad internacional, sin que estas dos circunstancias sean de la misma naturaleza.

¹⁵⁶ Julio Jorge Urbina, “Crímenes de guerra, justicia universal e inmunidades jurisdiccionales penales de los órganos del estado”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, v. VIII. Disponible en: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/245/417>

En efecto, cuando estos crímenes resultan en la violación grave de normas de *ius cogens*, trasciende el carácter *erga omnes* de las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, lo que activa el compromiso colectivo de hacer cumplir las normas humanitarias en todas las circunstancias¹⁵⁷.

Al respecto véase el artículo 1 de los Convenios de Ginebra de 1949, según el cual “Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las circunstancias”, en concordancia con el artículo 2 que dispone que:

“Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Convenio, las Potencias que son Partes en el mismo estarán, sin embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán, además, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia, si ésta acepta y aplica sus disposiciones.”

De esta forma, se reconoce que todos los Estados, al margen de su participación en el conflicto armado, poseen un interés jurídico en que tales disposiciones sean efectivamente respetadas y en que los responsables de su violación sean castigados.

De ahí que estén facultados, e incluso obligados, de conformidad con el precitado artículo 1, para velar por el respeto del derecho internacional humanitario en cualquier situación de conflicto armado y para reaccionar frente a cualquier violación de sus normas. *“A tal efecto, están plenamente habilitados, en particular, para exigir del infractor el cese del hecho ilícito —esto es, el fin de los crímenes de guerra o el respeto de las obligaciones de represión— y el cumplimiento de la obli-*

¹⁵⁷ Ibidem.

gación de reparación en interés del Estado lesionado o de la entidad o las personas afectadas por la violación.”.

Los Estados deberán tomar todas las medidas que resulten pertinentes para garantizar que los derechos de las víctimas sean respetados por los contendientes y que dichos crímenes no se repitan en el futuro. Ahora bien, en el momento de concretar el tipo y la naturaleza de las medidas que podrían ser adoptadas por los Estados a tal efecto es donde se suscitan las mayores dificultades, pues estas suelen ser indeterminadas. Sólo se ha precisado que deberán ser proporcionadas a la gravedad de la infracción y respetuosas con el derecho internacional y las obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, lo que, entre otras cosas, significa que los Estados no quedan por esta vía autorizados a recurrir a la fuerza armada¹⁵⁸.

Como ha señalado Urbina, en el ámbito que nos ocupa, “el cumplimiento de estas obligaciones debería pasar necesariamente por el abandono de los cargos oficiales desempeñados por todas aquellas personas acusadas de haber participado en dichos crímenes —como paso previo a su enjuiciamiento—, incluidos los más altos dirigentes del Estado si han intervenido de algún modo en su comisión. Este sería un medio efectivo para lograr el respeto de las normas humanitarias y para evitar en el futuro la repetición de dichos comportamientos. Además, no podría hablarse de una reparación efectiva de estos hechos ilícitos mientras se mantenga un ambiente de impunidad que impida a las víctimas de estos crímenes reclamar justicia, pues en tal caso el Estado seguiría incumpliendo las obligaciones -convencionales o consuetudinarias- de represión de las violaciones graves del derecho internacional humanitario”¹⁵⁹.

Otro elemento que merece especial reflexión en el marco de los crímenes internacionales es la distinción entre la responsabilidad internacional penal y la obligación de reparación del Estado. En este orden de ideas el Estatuto de Roma preservó los derechos de las víctimas a obtener una reparación por el daño causado. En efecto, la Conferencia Diplomática del Estatuto de Roma aprobó el artículo 25-4, donde rati-

¹⁵⁸ Ibidem.

¹⁵⁹ Ibidem.

ficó la responsabilidad internacional penal de los individuos, sin agotar los regímenes de responsabilidad internacional aplicables a los Estados: “4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional”¹⁶⁰.

De esta forma, la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional podría verse inclinada a estudiar una actuación judicial internacional de reparación contra el Estado, posterior a la sentencia de responsabilidad internacional penal, en particular cuando los condenados sean miembros de órganos del Estado o hayan actuado como órganos *de facto*¹⁶¹.

4.4. Crímenes internacionales (crímenes de guerra)

4.4.1. Origen

La concepción de los crímenes de guerra se remonta al Estatuto para el Gobierno del Ejército, publicado en 1386 por el rey Ricardo II de Inglaterra, mediante el cual se establecieron límites para la conducción de hostilidades y se prohibieron - so pena de muerte- los actos de violencia contra las mujeres y los sacerdotes desarmados, el incendio de casas y la profanación de iglesias¹⁶².

Más adelante, se estipularon disposiciones de esta misma naturaleza en los códigos promulgados por Ferdinando de Hungría en 1526, por el Emperador Maximiliano II en 1570 (los artículos 8 y 9 comprendían normas humanitarias) y por el rey Gustavo II Adolfo de Suecia en 1621. Particularmente, en el artículo 100 de los Artículos de Guerra decretados por Gustavo II Adolfo disponían que ningún hombre debía “ ejercer la tiranía sobre ningún clérigo o anciano, hombres o mujeres, doncellas o niños “¹⁶³.

Ahora bien, lo cierto es que las categorías de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, consideradas como parte de la categoría más amplia de *crimina juris gentium*, se desarrollaron de manera significativa a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando

¹⁶⁰ Rosmerlin Estupiñan Silva, ob. cit.

¹⁶¹ Ibidem.

¹⁶² Edoardo Greppi, ob. cit.

¹⁶³ Ibidem.

comenzó a crearse una conciencia más clara en la comunidad internacional de la necesidad de establecer juicios por violaciones graves a las leyes de guerra, en los que se considerara tanto la responsabilidad tradicional de los Estados como la responsabilidad personal de los individuos¹⁶⁴.

En efecto, en vista de los atroces crímenes cometidos por los nazis y por los japoneses, las potencias aliadas concertaron rápidamente acuerdos entre sí y, posteriormente, instauraron los Tribunales Internacionales Militares de Nuremberg y Tokio, los cuales estaban “encargados del juicio y castigo de criminales de guerra por delitos carentes de una ubicación geográfica particular, independientemente de que dichos individuos estén acusados de manera individual, en calidad de miembros de organizaciones o grupos, o en ambas calidades”¹⁶⁵.

Téngase en cuenta, como lo reseña Edoardo Greppi, que cuando se aprobó el artículo 6 del Estatuto de Nuremberg, sus disposiciones relativas a los delitos de guerra declaraban ya su aceptación del derecho internacional general de origen consuetudinario. Los delitos de guerra eran violaciones de las disposiciones existentes del *jus in bello*. Así fue reconocido mediante sentencia del Tribunal de Nuremberg cuando declaró que “no obstante, por lo que atañe a los delitos de guerra, como ya se ha señalado, los delitos definidos por el artículo 6, inciso b del Estatuto estaban ya reconocidos como delitos de guerra en virtud del derecho internacional”. En efecto, estaban establecidos en los artículos 46, 50, 52 y 56 del Reglamento de La Haya anexo al Convenio de La Haya de 1907 y por los artículos 2, 3, 4, 46 y 51 del Convenio de Ginebra de 1929. Declaró además el Tribunal de Nuremberg que “las violaciones de estas disposiciones constituían delitos por los cuales los individuos culpables eran punibles está demasiado bien determinada como para admitir argumentación alguna”. Sin embargo, como se ha señalado, los orígenes consuetudinarios de las normas sobre crímenes de guerra se remontan aproximadamente a medio milenio atrás¹⁶⁶.

Con la entrada en vigor del Estatuto de Roma de 1998, finalmente se creó una jurisdicción complementaria -la Corte Penal Internacional-

¹⁶⁴ Ibidem.

¹⁶⁵ Ibidem.

¹⁶⁶ Ibidem.

que puede ser convocada para garantizar la salvaguarda de los valores de la humanidad, ante los crímenes internacionales más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, tales como el crimen de genocidio; los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra; y el crimen de agresión.

4.4.2. Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra

La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1968 y la Convención Europea sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes contra la Humanidad y de los Crímenes de Guerra de 1974 disponen expresamente el principio de imprescriptibilidad de la responsabilidad penal por crímenes de guerra.

El mismo principio se encuentra reafirmado en el artículo 29 del Estatuto de Roma, que dispone que: “*Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán*” y en el artículo 29 de la Constitución determina que: “*Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles.*”

Sobre el principio de imprescriptibilidad la Corte IDH se ha pronunciado señalando que son inadmisibles e inaplicables las disposiciones internas de los Estados parte de la CADH referidas a la prescripción de violaciones graves a los derechos humanos, de la siguiente forma:

“[...] son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”¹⁶⁷

De esta forma, tanto en el ordenamiento jurídico interno como en el internacional es indiscutible que el Estado tiene la obligación de ga-

¹⁶⁷ Véase sentencia de la Corte IDH, caso Barrios Altos. Sentencia de fecha 14 de marzo de 2001.

rantizar que los procesos internos tendientes a investigar y sancionar a los responsables de los hechos de violaciones graves a los derechos humanos surtan sus debidos efectos, de allí que deban abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad.

En efecto, luego de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente los años siguientes a los juicios de Núremberg, ha existido una tendencia generalizada a reiterarse la práctica de los Estados en relación con el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales. En el derecho internacional se ha concebido entonces que la prescripción de los crímenes internacionales “*da lugar a una ineficacia jurídica de estos crímenes y deja a las víctimas y a sus familias sin ningún recurso judicial a través del cual se pudiese identificar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos para imponerles los castigos correspondientes*”. En definitiva, “*en el contexto de los crímenes internacionales, la prescripción favorece la impunidad y rechaza la idea de justicia*”¹⁶⁸.

IV. BIBLIOGRAFÍA

ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, “Comunicado ante el dictamen de la ONU caso Brewer-Carías”, Caracas, 17 de diciembre de 2021. Disponible en: <https://www.acienpol.org.ve/wp-content/uploads/2021/12/Comunicado-ACIENPOL-dictamen-de-la-ONU-caso-de-Brewer-Carias.pdf>

AGUILAR CAVALLO, Gonzalo, “Crímenes internacionales y la imprescriptibilidad de la acción penal y civil: referencia al caso chileno”, en Rafael Enrique Aguilera Portales, *Nuevas perspectivas y desafíos en la protección de los derechos humanos*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, núm. 180, Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2011.

¹⁶⁸ Gonzalo Aguilar Cavallo, “Crímenes internacionales y la imprescriptibilidad de la acción penal y civil: referencia al caso chileno”, en Rafael Enrique Aguilera Portales, *Nuevas perspectivas y desafíos en la protección de los derechos humanos*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, núm. 180, Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2011. P. 94. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2977/5.pdf>

- ANZILOTTI, *Curso de derecho internacional* (trad. De López Olivan), Editorial Reus, Madrid, 1935.
- AYALA CORAO, Carlos, “Allan Brewer Carías vs. Venezuela: Los caminos para llegar a la justicia internacional”, en Allan R. Brewer-Carías y Carlos Ayala Corao (editores), *Justicia!! Al fin, justicia!! Condena al Estado venezolano por violación de las garantías judiciales del debido proceso, el derecho a ser juzgado por jueces independientes, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a la presunción de inocencia de Allan R. Brewer-Carías*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela; Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2022,
- BADELL MADRID, Rafael, *Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial del Estado*, Editorial Torino, Caracas, 2014.
- , “Control de Convencionalidad”, en *Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano (REDAV)* N° 17-19. Homenaje a Pedro Nikken, Caracas, 2020.
- , “Derecho administrativo, la Buena Administración y la Ley Antibloqueo”. Publicado en el Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, número 161, julio-diciembre 2020, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2020.
- , “Comentarios sobre la controversia con Guyana”, en Rafael Badell Madrid, Henrique Iribarren Monteverde, Juan Cristóbal Carmo- na Borjas y José Antonio Muci Borjas (Coords.) *Libro Homenaje a Cecilia Sosa Gómez*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2021.
- , “La Nulidad del Laudo de París del 3 de octubre de 1899”, en *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales*, número 165, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2021.
- BARBOZA, Julio. “La Responsabilidad Internacional”. Disponible en: https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXXIII_curso_derecho_internacional_2006_Julio_Barboza.pdf
- BERNAL GÓMEZ, Daniel R., *Tendencias académicas sobre Derecho Inter- nacional Público*, Tunja: Ediciones Usta, Bogotá, 2018.
- BREWER-CARÍAS, Allan, “La transformación de Petróleos de Venezuela S.A.: de la constitución exitosa de una empresa del estado a su total destrucción institucional posterior”, *Libro Homenaje a Jesús Caballero Ortiz*, Tomo I, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, FUNEDA, Caracas, 2022.
- CRAWFORD, James, “Artículos sobre responsabilidad del estado por hechos internacionalmente ilícitos”, United Nations Audiovisual Library of In-

ternational Law, 2009. Disponible en: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_s.pdf

DONDÉ MATUTE, Javier, “Responsabilidad penal internacional: los nuevos escenarios dogmáticos”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Volumen XVIII, enero-diciembre 2018. Disponible en: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/12107/16039>

DUQUE MORALES, Carlos Raúl; TORRES RESTREPO, María. *Las Garantías de no Repetición como Mecanismo Permanente para la Obtención de la Paz*. Universidad de Bogotá, 2014,

ESCOVAR ALVARADO, Ramón; CARRASQUERO STOLK, Andrés y CAMPOS VILLALBA, Mariana, “Informe sobre la deuda externa venezolana por demandas arbitrales”, Observatorio de Gasto Público del Centro de Difusión del Conocimiento Económico, marzo de 2021. Disponible en: <https://cedice.org.ve/observatoriogp/portfolio-items/deuda-externa-venezolana-por-demandas-arbitrales/>

ESTUPIÑAN SILVA, Rosmerlin, “Principios que rigen la responsabilidad internacional penal por crímenes internacionales”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 12, Ciudad de México ene. 2012. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542012000100005#nota

FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, *Los límites de la libertad de expresión*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004.

_____, *La competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia y el caso Guayana vs. Venezuela*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales – Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2020.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. *Curso de Derecho Administrativo*. Tomo II. Cuarta Edición. Editorial Civitas S.A. Madrid. 1977.

GARCÍA MULLER, Rafael, “Consecuencias jurídicas de la Denuncia del Acuerdo de Cartagena”, Universidad Metropolitana, Caracas, 2008. P. 28. Disponible en: <http://repositorios.unimet.edu.ve/docs/48/ATK230G3M8.pdf>

GREPPI, Edoardo. “La evolución de la responsabilidad penal individual bajo el derecho internacional”, Revista Internacional de la Cruz Roja, 30-09-1999. Consultado en: <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdnnf.htm>

GUERRA IÑIGUEZ, Daniel, *Derecho Internacional Público*, EDIPÚBLICA, Caracas, 1982.

- HERNÁNDEZ, José I., “¿Cuánto debe Venezuela en arbitrajes CIADI?”, en *La Gran Aldea*, 04 de abril de 2022. Disponible en: <https://www.la-gran-aldea.com/2022/04/04/cuanto-debe-venezuela-en-arbitrajes-ciadi/>
- HERNÁNDEZ-CORCHETE, Juan A., “La responsabilidad concurrente de las administraciones públicas”, en Francisco Sosa Wagner (Coord.), *El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI: homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo / Vol. 2*, 2000.
- HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor, “La evolución jurisprudencial de la responsabilidad de la Administración Pública en Venezuela”, *Revista de Derecho Público - Vol. 83, 2º Sem.*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2015.
- IRIBARREN MONTEVERDE, Henrique. “*La Responsabilidad Administrativa Extracontractual*” en *Revista de la Facultad de Derecho (UCAB)*. Nº 44. Caracas, 1992.
- LÓPEZ MARTÍN, Ana Gemma. “La codificación del derecho internacional en el Umbral del siglo XXI. Luces y Sombras en la labor de la CDI”, p. 4. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/6991/1/CODIFICA.pdf>
- LUPINI, Luciano, “Consideraciones sobre la guerra actual en Ucrania. Causas históricas y consecuencias inmediatas”, versión transcrita y corregida de las palabras pronunciadas por el primer vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en sesión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2022. Consultado en original.
- MARIÑO FAGES, Jorge Raúl. *Estado Actual de la Responsabilidad Estatal en el Derecho Internacional*.
- MEDINA ARDILA, Felipe. *La responsabilidad Internacional del Estado por actos particulares: análisis jurisprudencial interamericano*. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
- MONROY CABRA, M. G. *Derecho de los Tratados*, Editorial TEMIS, Bogotá, 1978.
- MONTIEL, Atilio. “La Responsabilidad Internacional del Estado”. Disponible en: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/26/la-responsabilidad-internacional-del-estado.pdf>
- NASH ROJAS, Claudio. *Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988 - 2007)*. Segunda edición corregida y actualizada. Universidad de Chile, 2009.
- NIKKEN, Pedro. Discurso de contestación al discurso de incorporación del Dr. Carlos Ayala Corao a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales* número 153

– enero-diciembre 2014, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2014. Disponible en: https://www.acienpol.org.ve/wp-content/uploads/2019/09/BolACPS_2014_153_201-211.pdf

PALACIOS TREVIÑO, Jorge. “Los crímenes de guerra en el derecho internacional humanitario”. CJI/doc.328/09 rev. 1. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/informes_culminados_recientemente_Corte_Penal_Internacional_CJI-doc_328-09_rev1.pdf

RAMOS ZEBALLOS, Sebastián. “Evolución histórica de la responsabilidad internacional por hecho ilícito: desde los clásicos hasta la Sociedad de Naciones”. *Revista Tribuna Internacional*, Volumen 9, N° 17. 2020.

REY CARO, Ernesto J. “Responsabilidad internacional”. Cuaderno de Derecho Internacional Número 3, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Instituto de Derecho Internacional Público y Derecho de la Integración, Córdoba, 2009.

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, *La responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad Reglas y subreglas en una visión convencional, constitucional y contenciosa administrativa*, Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Boinilla 2020.

SORENSEN, Max, *Manual de Derecho Internacional Público*, Fondo de Cultura Económica de México, México, 1973.

STEINER, Christian y FUCHS, Marie-Christine (editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Segunda Edición. Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá, 2019.

TORO JIMÉNEZ, Fermín, *Manual de Derecho Internacional Público*, primera parte, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1975

TRUYOL, Antonio, *Fundamentos de Derecho Internacional Público*, cuarta edición revisada y aumentada, Editorial Tecnos, Madrid, 1977.

VERDROSS, Alfred. *Derecho Internacional Público*. Biblioteca Jurídica Aguilar, 5ta edición. Madrid, 1976.